

Golpe de Estado en Bolivia

**La soledad
de Evo Morales**

Hugo Moldiz

GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA

La soledad de Evo Morales

HUGO MOLDIZ MERCADO (La Paz, 1964). Coordinador del Capítulo Boliviano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y ministro de Gobierno durante el tercer mandato de Evo Morales en 2015. Es autor de ensayos y libros sobre la izquierda en América Latina y sobre la Revolución Democrática y Cultural en su natal Bolivia. Con Ocean Sur ha publicado *Bolivia en los tiempos de Evo. Claves para entender el proceso boliviano* (2009), *¿Reforma o Revolución en América Latina? El proceso boliviano* (2009) y *América Latina y la tercera ola emancipadora* (2013).

GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA

La soledad de Evo Morales

Hugo Moldiz Mercado



una editorial latinoamericana

Derechos © 2020 Hugo Moldiz Mercado
Derechos © 2020 Ocean Press y Ocean Sur

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, conservada en un sistema reproductor o transmitirse en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro, sin previa autorización del editor.

ISBN: 978-1-925756-91-3

Primera edición 2020
Impreso en

PUBLICADO POR OCEAN SUR
OCEAN SUR ES UN PROYECTO DE OCEAN PRESS

E-mail: info@oceansur.com

DISTRIBUIDORES DE OCEAN SUR

Argentina: Distal Libros • Tel: (54-11) 5235-1555 • E-mail: info@distalnet.com

Australia: Ocean Press • E-mail: info@oceanbooks.com.au

Bolivia: Fundación Programa de Investigación y Estudios Estratégicos Latinoamericanos
• Tel.: 591-2-2782238 • E-mail: fundacionpinves@gmail.com

Canadá: Publishers Group Canada • Tel: 1-800-663-5714 • E-mail: customerservice@raincoast.com

Chile: Ocean Sur Chile • Tel.: (56-09) 98881013 • E-mail: contacto@oceansur.cl
• <http://www.oceansur.cl>

Colombia: Ediciones Izquierda Viva • Tel/Fax: 2855586 • E-mail: edicionesizquierdavicola@gmail.com

Cuba: Prensa Latina • E-mail: plcomercial@cl.prensa-latina.cu
Ocean Sur • E-mail: info@oceansur.com

Ecuador: Ediciones Populus • Tel: +593 992871665 / +5932 2907039
• E-mail: info@edicionespopulus.com • www.edicionespopulus.com

EE.UU.: CBSD • Tel: 1-800-283-3572 • www.cbsd.com

El Salvador, Guatemala y Honduras: Distribuidora El Independiente S.A de C.V.
• Tel: 7900 1503 • E-mail: walteraudales@hotmail.com

España: Traficantes de Sueños • E-mail: distribuidora@traficantes.net

Gran Bretaña y Europa: Turnaround Publisher Services • E-mail: orders@turnaround-uk.com

México: Ocean Sur • Tel: 52 (55) 5421 4165 • E-mail: mexico@oceansur.com

República Dominicana: Editorial Caribbean • E-mail: ecomercial@editcaribbean.com

Venezuela: Ocean Sur Venezuela • E-mail: venezuela@oceansur.com

**ocean
sur**



www.oceansur.com
www.facebook.com/OceanSur
info@oceansur.com

Índice

Presentación	1
Prólogo	3
Introducción	13
¿De qué tipo de golpe estamos hablando y por qué?	23
Los periodos de la Revolución Boliviana y la injerencia de Estados Unidos	49
Momento heroico	50
La ralentización	65
Ocaso del gobierno y el golpe de Estado	77
La desestabilización y la ofensiva contra Evo	83
La recta final, en dos tiempos	95
La represión y el no derecho	107
El golpe de Estado, la geopolítica y las relaciones internacionales	118
A manera de epílogo	131

Dedicado a los muertos de Sacaba y Senkata.

OCEAN SUR EN LA WEB

UNA EDITORIAL LATINOAMERICANA

www.oceansur.com
www.facebook.com/OceanSur

Un amplio e interactivo catálogo de publicaciones que abarca textos sobre la teoría política y filosófica de la izquierda, la historia de nuestros pueblos, la trayectoria de los movimientos sociales y la coyuntura política internacional.

Ocean Sur es un lugar de encuentros.



Presentación

Cuando se termina de escribir y publicar este libro se cumplen cuatro meses de que el gobierno de facto de Bolivia nos tiene en calidad de rehenes a seis compañeros y una compañera al negarnos salvoconductos para que, en nuestra condición de asilados, podamos dirigirnos a México, donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, siguiendo la larga tradición de este país, nos ha concedido ese derecho humano desde el 14 de noviembre de 2019, cuatro días después de que se consumara el derrocamiento, por métodos no democráticos, del presidente indígena Evo Morales.

Los objetivos centrales de este libro son dos:

Primero, exponer las razones teórico-prácticas de por qué podemos afirmar que en Bolivia hubo un golpe de Estado el 10 de noviembre del pasado año, y develar las principales características de la naturaleza fascistoide del actual gobierno: autoritario y represivo, que en un inicio se apoyó en un amplio movimiento de masas urbanas (de pequeña burguesía y sectores atrasados del campo popular) y que ahora, con menos respaldo, continúa priorizando la represión y alentando el accionar de grupos de choque (paramilitares) que se mueven protegidos por las fuerzas policiales y militares.

Segundo, aportar algunos elementos de lectura crítica de los errores cometidos por el gobierno de Evo Morales y los propios movimientos sociales que terminaron siendo la base

material y subjetiva sobre la que se montó la desestabilización del proceso político más profundo de la historia de Bolivia. No puede pasarse por alto que la estrategia y tácticas de la derecha —que no cree en, pero sí ejerce el concepto de la lucha de clases— se desplegaron estos años sobre las propias limitaciones del proceso.

Finalmente, cuando este libro sale a la luz y circula también su versión digital, la presencia de la pandemia del coronavirus ha sido utilizada como pretexto por las fuerzas de derecha, gubernamentales o no, para postergar las elecciones del 3 de mayo con el único y claro objetivo de impedir que el pueblo, en vías de reconstituirse como sujeto histórico, vuelva al poder.

Prólogo

Constituye para mí un honor haber sido invitado por Hugo Moldiz Mercado para escribir unas pocas líneas a guisa de prólogo a este libro. Por una parte, porque se trata de uno de los más prestigiosos intelectuales de izquierda de Latinoamérica, autor de numerosos textos que en años recientes han servido para arrojar luz sobre los procesos de cambio experimentados por la región desde finales del siglo pasado. Y un honor también porque, aparte de ser uno de los más lúcidos observadores de la escena regional, Moldiz es un incansable militante de las mejores causas de Nuestra América. Es por ambas cosas que la dictadura que hoy sojuzga su querido país, Bolivia, lo mantiene enclaustrado en la residencia oficial de la embajada de México en La Paz: por la luz que arroja con sus escritos e intervenciones públicas y por el ejemplo que su militancia ofrece para las jóvenes generaciones.

Dicho esto paso a formular algunas breves acotaciones a este magnífico libro. Digo a propósito «acotaciones» porque comparto en lo esencial su argumento y el análisis que hace del Proceso de Cambio en Bolivia y su trágico desenlace. Los pocos puntos en donde existe algún desacuerdo — más bien una discrepancia parcial, de matices — no tienen la entidad suficiente como para plantear una tesis contraria a la que tan bien desarrolla en su libro.

Desde las primeras páginas se afirma que se subestimó la fortaleza, el arraigo y la voluntad revanchista de las fuerzas más reaccionarias de Bolivia. O, en caso de que no se hubiera incurrido en ese error, prevaleció una suerte de resignación ante lo que parecía la consumación inevitable de un proceso que tenía un plazo fijo de terminación. Este es un punto sobre el que volveremos más adelante, pero que remite a una caracterización epocal que realiza Moldiz. Si bien no lo dice con mucho énfasis, según nuestro autor lo que hubo en Bolivia fue una revolución. En un pasaje de su libro dice textualmente que «el gobierno de Evo fue reacio a transformar estructuralmente las Fuerzas Armadas y la Policía, tal como debe hacerlo toda revolución». Creo que sin menospreciar la amplitud y profundidad de los cambios que tuvieron lugar en Bolivia bajo los sucesivos gobiernos de Evo Morales, aquellos no alcanzan para decir que en ese país se había consumado una revolución. Diría, sin duda alguna, que se inició un tránsito por un sendero que podría concluir en una revolución pero que luego de 2010 se tomó un desvío, hubo un cambio de ruta, y el objetivo revolucionario otrora tan importante fue poco a poco siendo archivado, canjeado por las luces cegadoras de un formidable éxito económico, inédito en toda la historia boliviana.

Una de las grandes preguntas del caso boliviano es cuáles fueron las causas de ese viraje que a la larga terminaron por debilitar no solo el impulso revolucionario sino también la capacidad para leer adecuadamente las amenazas de la coyuntura. Viraje, hay que recordarlo, se produce poco después de que Evo Morales fuese reelegido con algo más del 64% de los votos. Aclaro, para que no se me malentienda, que el gobierno de los movimientos sociales contó siempre con mi apoyo porque el mismo fue, sin duda, como lo señala nuestro autor, «el

proceso de cambio más profundo de toda la historia boliviana». Pero lo que se trata de hacer ahora es comprender por qué terminó como todos sabemos.

Brevemente: el inicio de un tránsito revolucionario no siempre culmina en la realización de una revolución. Esta supone una profunda transformación de los aparatos del Estado, sobre todo los represivos: las fuerzas armadas, la policía y los servicios de inteligencia (su personal, su organización, su equipamiento, su ideología) y de la institucionalidad burguesa (el aparato judicial, el instrumental legal, etc.) heredada del pasado. Se hizo un esfuerzo enorme pero, desgraciadamente, no fue suficiente. Huelga aclarar, como lo enseñan con elocuencia los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que el tema de los aparatos represivos y su lealtad al nuevo proyecto es crucial para el curso de un proceso revolucionario, para garantizar el remate decisivo que ponga punto final al viejo orden y evitar el rebrote de la contrarrevolución. Obvio que, para lograr esto, se requiere contar con suficiente fuerza política y, como se desprende del libro de Moldiz, el gobierno de Evo Morales tenía un poco al comienzo pero luego la fue perdiendo.

Tal vez una clave para entender este desafortunado desenlace se encuentre en lo que nuestro autor dice cuando observa, atinadamente, la «sorprendente legitimidad y participación de fracciones de la pequeña burguesía y de sectores políticamente atrasados del campo popular que actúan reaccionariamente, lo que le da un rasgo fascistoide» a lo que, indudablemente, es un golpe de Estado, cosa que Moldiz fundamenta de modo irrefutable. No obstante, de lo anterior brota una pregunta insoslayable porque para cualquier observador más o menos atento de la realidad boliviana era evidente que amplios sectores de la pequeña burguesía y, sobre todo, las capas socialmente

ascendentes del capo popular habían desertado del proyecto masista y se acercaban rápidamente al bloque reaccionario que, de ese modo, le otorgaban un «toque plebeyo» a lo que indudablemente era un proyecto oligárquico, racista y neocolonial. ¿Cómo explicar esa sorpresa?

El libro ilustra con idoneidad el papel determinante del imperialismo norteamericano en este progresivo debilitamiento del gobierno masista, sobre todo una vez culminado, en el 2010, la «etapa heroica» del Proceso de Cambios. Esa irrupción (que se venía gestando desde fines del siglo pasado) del bloque indígena, campesino, obrero y popular fue víctima paradójica de su propio éxito. Por supuesto que la presión estadounidense no solo se intensificó sino que se diversificó cualitativamente, atrayendo hacia el campo de la reacción a amplios segmentos de aquel bloque deslumbrados por un progreso material que, lamentablemente, no tuvo como contrapartida un proceso de educación política e ideológica que frustrara los planes del imperialismo y la reacción local. Si en la «etapa heroica» el bloque popular pudo resistir a pie firme los embates de «la embajada», a cuyo frente estaba nada menos que un experto en secesiones como Philip Goldberg, artífice de la partición de la ex Yugoslavia, enviado a Bolivia para lograr la secesión del Oriente y actual embajador en Colombia, los hechos demostraron que esa voluntad se debilitó considerablemente a la vuelta de la primera década del siglo.

En algún pasaje del libro, Moldiz discurre, cautelosamente, en torno a si existía en el núcleo dirigente del bloque masista «voluntad política de avanzar hacia el poscapitalismo». Pregunta más que legítima pero que solo el liderazgo del proceso puede responder, cosa que hasta ahora no ha ocurrido ni pienso que vaya a producirse en lo inmediato. Pero de su preocupación

emana otra interrogante: suponiendo que tanto Evo Morales como su vicepresidente, Álvaro García Linera, hubieran cultivado esa voluntad de avanzar hacia el poscapitalismo, ¿existían en la sociedad boliviana las condiciones objetivas —o sea, la correlación de fuerzas y el grado de organización y educación político-ideológica de las clases populares— como para intentar avanzar por ese camino?

Mi impresión —y subrayo lo de impresión— es que no. Que no había potencia plebeya, como diría Álvaro García Linera, suficiente para intentar tomar el cielo por asalto; por debilidades internas pero también por las restricciones del marco internacional. Y traigo a colación una observación muy penetrante de Lenin a propósito de la dialéctica de las revoluciones que tal vez podría aplicarse al caso de Bolivia. En un pasaje luminoso de su intervención en el VII Congreso Extraordinario del Partido Comunista de Rusia (1918) dijo que en los países de la periferia capitalista, «en el país de Nicolás y de Rasputín... comenzar la revolución era tan fácil como levantar una pluma». El problema, seguía, era llevar la revolución a su conclusión y construir el socialismo. En *La enfermedad infantil del «izquierdismo» en el comunismo*, un texto de 1920, abunda en esta idea y asevera que en Rusia, «comenzar la Revolución Socialista fue sumamente fácil, a diferencia de lo que ocurre en los países europeos; pero continuarla y llevarla a término, le será a Rusia más difícil que a los países europeos». Tal vez los obstáculos advertidos por Lenin y que ocasionaron la frustración del proceso revolucionario en Europa se hicieron presente en Bolivia y descarrilaron la «etapa heroica» para dar comienzo a un momento de repliegue —¿inicio de un lento ocaso gubernamental, como dice Moldiz?— que durante diez años no pudo

revertirse y que condenó al proyecto emancipatorio masista a una insospechada derrota.

Una clave de esta larga agonía tal vez se encuentre en lo que nuestro autor, así como Isabel Rauber, caracterizan como la disipación del sujeto histórico de la etapa heroica, un sujeto plural y diverso que, en una atmósfera de prosperidad sin precedentes, o bien abandona sus viejos ideales para acomodarse a la ilusión del consumismo o va siendo despojado de aquellos por el aparato burocrático del Estado. Se concreta así la sustitución del bloque histórico arraigado en sus bases clasistas estructurales por un nuevo sujeto: el Estado y su funcionariado. El clásico fenómeno del «sustitutivismo», que como es bien sabido amenaza mortalmente a todas las revoluciones, pareciera haber jugado un papel importante en el caso boliviano.

Obviamente que esta constatación invita a preguntarse por las causas de este consentido despojo de protagonismo popular y Moldiz aporta algunas hipótesis al respecto: la llamativa disonancia entre los resultados prácticos de la gestión de Evo Morales en la presidencia y la erosión de su base política. Aquí interviene un elemento constitutivo de la cultura de los pueblos aymara y quechua. En uno de mis más recientes viajes a Bolivia hablé en la calle con personas de pueblo, de estas dos etnias, y les dije que estaba asombrado por las críticas que se le hacían al presidente. Ingenuo, les preguntaba: «¿no tienen ustedes un sentimiento de gratitud por todo lo que Evo ha hecho en su favor?». La respuesta me dejó congelado: «Él hizo lo que tenía que hacer, no hay nada que agradecer. Y lo mismo ocurre con nuestros caciques en las comunidades».

¿Podría haberse contrarrestado este sentimiento de ingratitud masoquista, que le abriría el paso a los racistas que luego tomarían por asalto el Palacio Quemado? Creo que sí, y Mol-

diz ofrece buenos argumentos para fundamentar esa respuesta. Una, el descuido del trabajo político-ideológico causado por la sobrecarga de la gestión; dos, la cómoda delegación en el presidente y el liderazgo estatal de actividades y tareas que deberían haber realizado los integrantes del desmovilizado y crecientemente apático bloque popular; tres, el debilitamiento de la relación entre el liderazgo y su base social, con contactos cada vez menos estrechos y frecuentes; cuatro, la casi inexistente capacidad de contraofensiva en el crucial terreno comunicacional dominado de manera abrumadora por los enemigos del proceso. Sin esto, la batalla cultural —simbolizada en la revalorización de la tradición de los pueblos originarios, el reconocimiento de sus instituciones políticas comunitarias y en la recuperación de la Pachamama y la Wiphala— demostró tener una penetración menor de lo que pensábamos. El discurso de la derecha y el imperialismo, montado sobre un fenomenal aparato comunicacional, tuvo más alcance y penetración, y eso se percibió muy claramente en los días que rodearon al golpe de Estado.

De la lectura del libro de Moldiz, así como de la observación minuciosa de los acontecimientos, surge claramente que el golpe de Estado podía haberse evitado; que no era el corolario inexorable del proceso, más allá de sus señaladas debilidades. Un error fue convocar al referendo el 21F de 2016, tres años antes de las elecciones presidenciales. Otro fue apostar tan fuertemente al litigio con Chile por la legítima reclamación de salida al mar de Bolivia y un eventual fallo favorable por parte de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, algo que cualquier observador bien informado sabía que no se iba a producir y que la sentencia final era lo máximo que se podía obtener en ese momento. Otro, creer que la OEA y el sinvergüenza

que funge como su secretario general, Luis Almagro, irían a ser neutrales en la futura contienda electoral. Otro, pensar que una política de relativo enfriamiento con —o cauteloso distanciamiento de— Cuba y Venezuela convencería a los hampones de Washington de no entrometerse en el proceso político boliviano y dejar que Evo Morales siguiera gobernando. Otro, hacer reposar la seguridad del presidente y su equipo de gobierno, su vicepresidente y sus ministros, en la lealtad de las fuerzas armadas y la policía, cuando era más que evidente que tanto aquellas como esta tenían su comando verdadero en Washington y no en La Paz. Era obvio que el gobierno tendría que haber organizado una mínima milicia popular, no para enfrentar al ejército pero sí para por lo menos defender la Plaza Murillo y el Palacio Quemado y que las bandas fascistas no se atrevieran a cometer sus tropelías con total impunidad. Sin el férreo apoyo de las fuerzas armadas y la policía, con la artillería mediática de la derecha disparando día a día munición gruesa y el imperialismo conspirando abiertamente, lo único que podía salvar el gobierno de Evo Morales era el control de la calle. Pero esta fue cedida sin luchar, casi como un obsequio, a la derecha.

Dilma no tenía el pueblo movilizado en la calle y fue fácil presa de los bandidos del Congreso; Fernando Lugo tenía la calle pero en el momento decisivo declinó convocarla, creyendo en la imparcialidad de la justicia burguesa y el rodaje de las instituciones republicanas en Paraguay. Así les fue. Díaz-Canel, Maduro y Ortega tienen ambas cosas: las fuerzas de seguridad y el pueblo movilizado y organizado en la calle. Por eso Estados Unidos no puede con ellos. Evo tenía la calle, pero por las razones que vimos más arriba la perdió, y con él, su gobierno.

Ver a un presidente, su vicepresidente y sus ministros, gentes honestas y probadas, que lideraron el mejor gobierno de

la historia de Bolivia; verlos indefensos ante las cámaras de la televisión, algunos aterrorizados con justa razón, sus casas saqueadas o incendiadas, sus nombres vapuleados impunemente por los medios y los opinólogos de todo el mundo; verlos abandonados por su propia gente y traicionados por militares y policías, a merced de una tropa de energúmenos fascistas neocoloniales, es una de las imágenes más tristes que ha producido la política latinoamericana en mucho tiempo.

La flagrante injusticia de esta situación clama al cielo y requiere de una profunda autocrítica para que una vez reanudado el ciclo de ascenso de las luchas populares todos estos errores no forzados sean evitados. Recordando aquel consejo premonitorio del Che cuando dijera que al imperialismo (y a la derecha, agregaría yo) no se le puede creer ni un tantito así, ¡nada! Tengo fundadas esperanzas de que este libro de Hugo Moldiz contribuirá a una mejor comprensión de ese extraordinario proceso vivido por el pueblo boliviano y que, una vez retornado al poder, no se cometerán los errores que terminaron por derrotarlo, perseguirlo y atormentarlo en las fatídicas jornadas de noviembre.

Atilio A. Borón

Buenos Aires, 18 de marzo de 2020.

Introducción

No queda duda que cada pueblo es su historia, no de las cortas que a veces adquieren la silueta difusa de algunos episodios, sino de aquella larga en la que se sintetizan las grandes batallas para construir un ser colectivo o constituir el apéndice de un cuerpo ajeno. Es la batalla —en sociedades fragmentadas social, cultural y étnicamente— entre fuerzas que apuestan, a veces instintivamente, por conquistar su emancipación, parcial o total, de las formas de dominación que las asfixian, y otras que no escatiman esfuerzos y recursos para mantener estructuras de poder material y simbólico que reproducen sus privilegios en todos los niveles.

Y como una sociedad es su historia, la formación social boliviana no escapa a esa regla. De hecho, el 10 de noviembre de 2019, a 39 años del último acontecimiento sangriento¹ del ciclo militar en el poder, en Bolivia se volvió a constatar que el golpe de Estado es la forma histórica predominante con la que, por lo general, se producen los cambios.

La situación política del último trimestre del año pasado no se vislumbraba fácil. Ni siquiera el más entusiasta que hiciera

¹ El 17 de julio de 1980 un golpe de Estado encabezado por el general Luis García Meza y el coronel Luis Arce Gómez daba por finalizada una coyuntura política en la que se pretendía hacer despegar la vigencia de la democracia representativa. A cada elección le prosiguió un golpe de Estado entre 1978 y 1980.

suyo uno de los pensamientos de Antonio Gramsci: «ante el pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad». La mayor parte de los bolivianos y bolivianas percibían la coyuntura electoral como compleja; con escenarios y resultados difíciles de predecir. En lo que coincidían todos los actores políticos de corte ideológico-político —de todos los colores con sus matices— y la propia percepción de la gente, era en que el país se iba a tensionar, ya fuese porque Evo Morales alcanzara su cuarto triunfo electoral consecutivo o porque, en una segunda vuelta, la continuidad del Proceso de Cambio quedara interrumpida por la victoria de Carlos Mesa, quien se mantuvo segundo en la preferencia de la gente desde que se hicieron los acostumbrados estudios de tendencia de intención de voto.

Pero la política es lo que no se ve. Es evidente que dentro de algunos de los sectores no solo había conciencia de que la tensión iba a elevarse de tono, sino que se avanzó en la preparación de medidas, no democráticas, con el objetivo de que el desenlace no fuera de celebración de victoria para los partidarios del Proceso de Cambio —aun cuando se diera el primer escenario—, sobre todo si las circunstancias ayudaban a que calara la matriz de duda y descrédito que se había construido meses antes de la realización de las elecciones generales. Estos son los sectores que, desde la segunda mitad de la presente década, apostaron por el cambio.

Pero la forma política del cambio llegó a través de la principal tradición histórica sobre la que escribe René Zavaleta: el golpe de Estado. En su reflexión y análisis, siempre acucioso de los hechos y acontecimientos históricos de la dramática historia boliviana, el estudioso de la Revolución Nacional de 1952 y del desarrollo contradictorio que tuvo el nacionalismo revolucionario hasta principios de la década de los ochenta, apunta a que el

golpe de Estado «es una suerte de costumbre colectiva o, más bien, es la manera que adoptan el cambio político y la sucesión en el poder en Bolivia».²

No hay lugar para querer endulzar los hechos de modo que parezcan más digeribles. El desenlace fue facilitado por la subestimación con la que el gobierno tomó el desarrollo de la coyuntura o quizás, más que minimización del peligro, la resignación de que no había posibilidad de evitar un hecho como ese si las fuerzas reaccionarias se lo proponían, a pesar de que Evo Morales había denunciado días antes de las elecciones la posibilidad de un golpe de Estado. Eso quiere decir, a manera de hipótesis, que la relación social de fuerzas, más allá de la agregación de votos por el candidato indígena, no estaba a favor ni del gobierno ni de la revolución en el campo de la sociedad.

La democracia, a secas, sigue siendo el principal espacio de disputa de proyectos, intereses, imaginarios y subjetividades. El tema está en que mientras para el imperialismo y la burguesía la democracia representativa, que es solo una de sus formas de dominación,³ está reducida al campo de la selección o elección de autoridades mediante el voto, para las clases subalternas representa un campo en el que existe la posibilidad de producir su autodeterminación.⁴

² René Zavaleta: «Las masas en noviembre», *Obra Completa*, tomo I, Plural Editores, La Paz, 2011, p. 102.

³ La historia muestra bastantes ejemplos de aquello que Lenin dijera a propósito de que democracia y dictadura son las dos formas de dominación de la burguesía.

⁴ Zavaleta desarrolló cuatro conceptos de democracia plenamente vigentes: la democracia como movimiento general de la época, como representación, como problema de la teoría del conocimiento y como autodeterminación de las masas. Haciendo énfasis en que la historia de las masas es siempre una historia contra el Estado, el intelectual boliviano sostiene que la autodeterminación es un acto revolucionario

Cuando ocurre lo último, existe el sujeto histórico en movimiento que es capaz de los actos más heroicos para defender su revolución o sus conquistas. Pero cuando se ha cercenado la democracia como autodeterminación desde el Estado y desde la propia fetichización del poder desde «los de abajo», se impone en el imaginario social una concepción individual de la democracia, donde un ciudadano es un voto y nada más.

Como se podrá ver más adelante, la desestructuración del sujeto histórico que hizo posible la Revolución Boliviana, deliberadamente o no, costó muy caro. Evo Morales se llevó la mayor parte de los votos en octubre y se lo escamotearon, pero ya no disponía de fuerza social autodeterminada, no conducida desde el Estado, para defender el proceso político que abrió las puertas que permitió avanzar hacia una forma de organización de la vida superior al capitalismo. Una misma persona no actúa de igual manera cuando asume la ecuación liberal de la democracia representativa: «un ciudadano, un voto», que cuando es parte de una fuerza social autodeterminada más allá de la democracia representativa, y que está dispuesta a defender un proceso político que le abre la posibilidad de conquistar su condición de igualdad y libertad sustantiva, como negación de la democracia representativa burguesa que solo le ofrece esa condición en la formalidad.

Y entonces, cuando se piensa en todo lo que pasó y se hace el esfuerzo por ordenar todos los hechos que sucedieron en el tiempo, unos más pausados y otros más rápidos, entre octubre y noviembre de 2019, las primeras imágenes y representaciones políticas que se vienen a la mente son varias, mas solo nos

y no legal de ninguna manera precedido por un escrutinio. Ver más en René Zavaleta: «Cuatro conceptos de democracia», *Obra Completa*, tomo I, Plural Editores, La Paz, 2011, pp. 513-529.

quedaremos con dos reflexiones: una del filósofo de Tréveris y otra de un sociólogo boliviano a propósito de la historia y de hechos que se pensaba superados. La historia, cuando se repite, lo hace como farsa o como tragedia.⁵ Y hay cosas que no deberían suceder en balde.⁶ Pero en Bolivia, en noviembre de 2019, la violenta interrupción del Proceso de Cambio que Evo Morales llevaba adelante desde enero de 2006, con envidiables resultados en la economía y la distribución de las riquezas, mostró que la dramática historia de este país sudamericano volvía a repetirse, esta vez como tragedia, y que experiencias político-históricas pasadas,⁷ propias y de otros países de la región que se registraron en la década comprendida entre 1960 y 1970, sí pasaron en balde.

⁵ «Hegel dice en alguna parte que los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa». Carlos Marx: «El 18 brumario de Luis Bonaparte», *Carlos Marx y Federico Engels. Obras escogidas en tres tomos*, tomo I, Editorial Progreso, Moscú, 1981, p. 404.

⁶ René Zavaleta, en un análisis de lo que ocurrió en el país desde la Asamblea Popular hasta el golpe fascista del 21 de agosto de 1971, sostiene que la izquierda despreció la guerra, pero el fascismo la venció por medio de la guerra, y que «las cosas, empero, no deberían suceder en balde». Ver más en René Zavaleta: «Por qué cayó Bolivia», *Obra Completa*, tomo I, Plural Editores, La Paz, 2011, p. 366.

⁷ Las violentas interrupciones de gobiernos democráticos que, salvo el de Salvador Allende en Chile, no se propusieron nunca superar los umbrales del capitalismo, fue respondida con la puesta en escena de la Doctrina de la Seguridad Nacional de Estados Unidos para América Latina. Los actores privilegiados fueron los militares. En Bolivia, la manifestación de esta forma de controlar el poder político fue más recurrente que en otros de la región desde 1964 a 1982, aunque en medio de esa ola militar hubo un intento de retornar a cierta autonomía relativa del Estado con Ovando y Torres. En este último se desarrolló la experiencia de la Asamblea Popular.

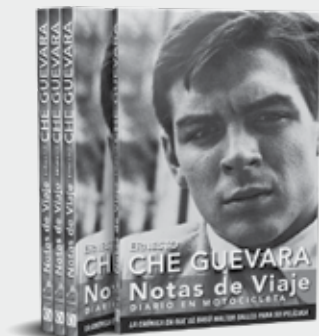
Y si de historia y costumbre se trata, cómo no recordar la sentencia que hiciera Ernesto Che Guevara tras una profunda relación de hechos y su respectivo análisis de la situación de América Latina en la década de los sesenta: la historia de América, como él llamaba a la región, es la historia de las intervenciones de Estados Unidos. Y el siglo XXI es testigo de que la intromisión imperial es igual o mayor a la registrada en el siglo anterior, pues encuentra a Estados Unidos en una situación de declinación hegemónica que no la había padecido anteriormente y que lo obliga a tomar medidas multidimensionales. Es desde esa perspectiva, no plasmada ni reflexionada en los grandes medios de comunicación, nacionales e internacionales, al servicio del capital transnacional, que se puede sostener que Evo Morales es el cuarto presidente derrocado en la región por métodos no democráticos en lo que va de la primera parte del siglo XXI. Igual suerte corrieron Manuel Zelaya de Honduras (2009), Fernando Lugo de Paraguay (2012) y Dilma Rousseff de Brasil (2016). Los cuatro, presidentes de países conducidos por gobiernos progresistas y de izquierda que no eran del agrado de Washington.

La estrategia de Estados Unidos para dominar esta parte del mundo siempre ha girado en torno al principio monroista de «América para los americanos», aunque sus tácticas algunas veces han sido diferenciadas en función del carácter de cada uno de los países donde les ha tocado desestabilizar o defender al gobierno de turno. De hecho, en un análisis comparativo, aunque desde distintos ángulos, del papel que Estados Unidos le asigna a su estrategia de desestabilización permanente de los gobiernos progresistas en América Latina, es posible encontrar diferencias en la táctica. Por ejemplo, los datos de la realidad muestran que no es lo mismo lo que se concibió y activó para

Bolivia que lo que se impulsó para otros países como Uruguay, en la estrategia global de dominación de Estados Unidos en la década de los setenta. Los *think tank* también toman en cuenta la historia. Zavaleta se pregunta a propósito de los planes de intervención estadounidense, ¿por qué el imperialismo se dirige en primer término al proceso electoral en el Uruguay y en primer término a la conspiración militar en Bolivia?⁸ La respuesta es clara. En el primer país se prioriza la alienación electoral porque el electoralismo no es solo una formalidad sino una verdadera tradición histórica del cambio político. En el segundo, no ocurre lo mismo. Desde un ángulo distinto de aproximación, el político e intelectual Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado y desaparecido el 17 de julio de 1980, expresa —a propósito de «los principios flexibles de una moral laxa»⁹ del presidente estadounidense Jimmy Carter en relación con la vigencia de los derechos humanos y las libertades democráticas— que su embajador en La Paz anunciaba, para 1977, «un substancial aumento de la ayuda militar a Bolivia», que ya en 1976 fue 30 veces superior que en Uruguay.

⁸ Ver más en René Zavaleta: «¿Por qué cayó Bolivia?», *Obra Completa*, tomo I, Plural Editores, La Paz, 2011, p. 364.

⁹ Es el título de un artículo en el que el destacado político boliviano pone al descubierto la doble moral de Carter, quien en su gobierno diseñó y garantizó la ruta de repliegue de los militares a sus cuarteles para impulsar una democracia restringida. Ver más en Marcelo Quiroga Santa Cruz: *Hablemos de los que mueren*, Plural Editores, La Paz, 2012, p. 58.



ERNESTO CHE GUEVARA

Notas de viaje

Diario en motocicleta

Libro sugerente e inspirador de la película Diarios de motocicleta, donde el Che narra las aventuras y primeras reflexiones de su viaje inicial por América Latina, realizado desde fines de 1951 hasta mediados de 1952 en compañía de su amigo Alberto Granado.

168 páginas + 24 páginas de fotos, 2004, ISBN 978-1-920888-12-1



ERNESTO CHE GUEVARA

Otra vez

Ya graduado de Medicina, en 1953, Ernesto emprende su segundo viaje por el continente. La lectura del diario nos revela su inmenso humanismo identificado en esos primeros pasos con el hombre latinoamericano.

208 páginas + 32 páginas de fotos, 2007, ISBN 978-1-920888-78-7



AMÉRICA LATINA **Despertar de un continente**

ERNESTO CHE GUEVARA

COMPILACIÓN, EDICIÓN Y PRÓLOGO DE MA. DEL CARMEN ARIET
Antología imprescindible para comprender la manera en la que el joven Ernesto se acerca a la realidad de América Latina, desde la historia a sus vivencias más inmediatas, su sentido de pertenencia y su probado latinoamericanismo, expresado en su lucha solidaria e internacionalista para alcanzar su plena emancipación.

504 páginas, 2017, ISBN 978-1-925019-92-6 (segunda edición)



PASAJES DE LA GUERRA **REVOLUCIONARIA (CONGO)**

ERNESTO CHE GUEVARA

EDICIÓN REVISADA POR FIDEL CASTRO
PRÓLOGO DE ALEIDA GUEVARA MARCH

Páginas sobre una contienda que no logró alcanzar la victoria. Sin embargo, a pesar del lenguaje ríspido de algunos pasajes, del sabor amargo de la derrota, el Che logra entregarnos el aliento vital de un futuro a construir con una concepción de unidad y de validación de sus tesis tercermundistas.

296 páginas + 28 páginas de fotos + 2 páginas de mapas, 2017,
ISBN 978-1-925317-37-4 (segunda edición)



EL DIARIO DEL CHE EN BOLIVIA

ERNESTO CHE GUEVARA

INTRODUCCIÓN DE FIDEL CASTRO RUZ
PRÓLOGO DE CAMILO GUEVARA MARCH / COMPILACIÓN Y NOTAS
DE MA. DEL CARMEN ARIET

Diario escrito durante la contienda guerrillera en Bolivia de noviembre de 1966 a octubre de 1967. Testamento histórico de una epopeya que forma parte de la gesta libertaria de la América Nuestra.

304 páginas + 32 páginas de fotos, 2006,
ISBN 978-1-920888-30-5

¿De qué tipo de golpe estamos hablando y por qué?

El golpe de Estado contra Evo Morales no ha sido cualquiera. Por su forma, es la primera vez que se logra una participación compleja, en distintos tiempos, de las dos fuerzas que monopolizan la cualidad de la coerción estatal. Los militares y los policías, junto a los grupos paramilitares, resultaron decisivos para que el golpe de Estado fuera distinto al registrado en Honduras, Paraguay y Brasil. No podía ser de otra manera. La oposición no contaba con ningún tipo de mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, absoluta o relativa, para destituir al presidente indígena con algo de aparente legalidad, como lo hizo en Brasil y Paraguay de manera más nítida, ya que en el caso de Honduras primero los militares sacaron por la fuerza a Zelaya de su casa rumbo a la base militar estadounidense en ese país José Enrique Soto Cano y de ahí a Costa Rica.

En Bolivia la sucesión constitucional está viciada de nulidad. El presidente de la Cámara de Diputados fue obligado a renunciar pues los grupos civiles tenían en su poder a su hermano, y la presidenta del Senado también renunció, en otro de los errores estratégicos cometidos por Evo Morales. La dimisión de Adriana Salvatierra fue aprovechada por la derecha para darle mediáticamente un barniz legal al golpe de Estado; si no lo hubiera hecho, los golpistas no habrían desistido de

sus planes y la salida no democrática a la crisis impulsada por Estados Unidos y el bloque opositor iba a ser más evidente ante los ojos del mundo. Tras 21 días de ininterrumpido asedio por parte de la oposición —que no respondía a una reacción generada espontáneamente ante un hipotético hecho político que se lo llegó a posicionar mediáticamente, dentro y fuera del país, de irregular y fraudulento—, el presidente Evo Morales anunciaba, con una carga de dramatismo difícil de disimular, que renunciaba a su condición de jefe del Estado Plurinacional para evitar que la violencia se apoderase del país y afectara la tranquilidad de las bolivianas y los bolivianos,¹ a pesar de que había triunfado, por cuarta vez consecutiva, en las elecciones generales que se celebraron el domingo 20 de octubre, obteniendo una ventaja de más de 10 puntos sobre su inmediato competidor.²

Evo Morales pagaría muy caro, de esta manera, no haber cambiado el aparato de Estado³ —militar y policial— que,

¹ «Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos dirigentes, autoridades del MAS [Movimiento al Socialismo], no sigan hostigados, perseguidos, amenazados. Quiero decirles la lucha no termina acá, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad y la paz. Lamento mucho este golpe», afirmó Evo Morales en el Trópico de Cochabamba, desde donde partiría horas después a México.

² El Tribunal Supremo Electoral, el 25 de octubre, informaba que Evo Morales había obtenido el 47,08% de la votación frente al 36,51% de Carlos Mesa, con lo que la diferencia del primero respecto del segundo era del 10,57% (más de 600 000 votos). El presidente indígena, triunfaba, de esa manera, por cuarta vez consecutiva, aunque con menos votación que la alcanzada en las tres anteriores.

³ El aparato de Estado implica, según la concepción leninista, el tipo de organización y las funciones de coerción, administrativas, políticas, técnico-económicas e ideológicas, y también los cuadros militares, policiales y la burocracia. Ver más en Nicos Poulantzas: *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista*, Siglo XXI Editores, 23 edición, México, 1986, p. 142.

desde 1964,⁴ se alineó completamente a Estados Unidos. El hecho de que ambas fuerzas, que tienen el monopolio de la fuerza represiva del Estado, hayan incorporado el ¡Patria o Muerte! en su saludo oficial, expresaba un acomodo táctico más que un cambio estratégico que el gobierno no lo tomó en cuenta y más bien lo subestimó. El gobierno de Evo fue reactivo a transformar estructuralmente las Fuerzas Armadas y la Policía tal como debe hacerlo toda Revolución.⁵ Y las Fuerzas Armadas y la Policía aparentaron un acomodo a los principios del gobierno indígena que no era tal. El peso de la institucionalidad labrada a la imagen del Estado burgués y la impronta de las estrategias estadounidenses pesaron más que la buena relación de Morales con los oficiales de alto rango, los cuales, en su mayoría, hicieron un uso pragmático de esa amistad.⁶ La experiencia histórica de Bolivia da ejemplos de la importancia que tiene resolver la cuestión militar desde una perspectiva de

⁴ La influencia de Estados Unidos sobre las Fuerzas Armadas de Bolivia se remonta a 1960, pocos años después de que el gobierno de MNR desactivara las milicias obreras y campesinas que habían derrotado al ejército de la oligarquía. Ya en 1964, de la mano del general René Barrientos, la Doctrina de la Seguridad Nacional se pone en vigencia absoluta. La embajada estadounidense le retribuyó los favores a Barrientos colocándolo como presidente luego del golpe de Estado contra Víctor Paz Estenssoro.

⁵ Entendemos que en Bolivia se produjo una «revolución política» con un horizonte de «revolución social» a la que no se pudo avanzar por la ausencia de estrategia y tácticas correctas. En la «revolución política» se produce el desplazamiento del bloque en el poder, que es lo que sucedió en Bolivia, y no la podemos llamar «revolución social» porque si bien se cambió la forma de distribuir la riqueza, no se transformó la estructura económica y mucho menos las relaciones de producción.

⁶ Sobre todo, los militares sacaron provecho de su relación con Morales al ser designados, tras pasar a reserva, en cargos diplomáticos y otros de jerarquía dentro del aparato estatal.

un proyecto de emancipación. Lo hizo en 1952 en doble sentido: en un primer momento, cuando bajo la hegemonía del proletariado minero las masas obreras y campesinas estaban armadas al principio y con la iniciativa política en todos los campos; y en un segundo momento, cuando se reconstituyó el Ejército regular en desmedro del desarme de las masas y que allanó el derrocamiento de Víctor Paz Estenssoro en 1964, con una revolución a la que solo le quedaba el nombre. O en la experiencia de la Asamblea Popular de 1971⁷ que fue derrotada, junto al gobierno populista de Juan José Torres, quien se resistió a armar al pueblo ante la arremetida fascista que, orquestada por Estados Unidos, finalmente impuso la dictadura militar-empresarial del septenio (1971-1978) a través del entonces coronel Hugo Banzer Suárez.

La Policía jamás logró controlar la creciente violencia de los grupos paramilitares y aprovechó la demanda reivindicativa —no satisfecha por el gobierno de facto, de nivelación salarial y jubilación del 100%—, para desencadenar un motín (huelga). Es evidente que había más de acción política que de reivindicación en el motín policial.

Tampoco los organismos de inteligencia alertaron al gobierno de los movimientos sospechosos de civiles buscando a militares y a mandos policiales, para forzar la caída de Morales. La inteligencia policial y militar, si funcionaron, fue más

⁷ La Asamblea Popular se instaló a impulso del bloque popular bajo hegemonía obrera en 1971. Independientemente de si dio o no lugar a un «doble poder», esta gran experiencia del pueblo pecó de debilidad al no resolver la cuestión militar, por lo que —salvo la heroica resistencia armada de militantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de los recién constituidos Partido Socialista-1 (PS-1) y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)—, el proyecto fascista de Banzer se impuso tras una sangrienta represión.

para que los que estaban en la otra frontera, en la que se encontraba el presidente indígena. Los militares no se inmutaron con la situación de peligro del presidente indígena, pero sí fueron en un primer momento lo suficientemente hábiles, por decir lo menos, para usar la *no violencia* como método de derrocamiento, y luego, en un segundo momento, para volcar una desproporcional violencia contra la protesta social.

Es verdad que el presidente indígena también renunció, lo que es aprovechado por quienes no miran a más de cinco centímetros de profundidad, para afirmar que el orden democrático no fue alterado. El argumento empleado no es más que una caricatura. Si bien se dieron las renunciaciones de Evo Morales, Álvaro García Linera y los dos presidentes de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), es evidente que lo hicieron en un contexto de coacción estatal y de las masas reaccionarias sublevadas. Los candidatos en las elecciones de octubre no quisieron ir a ningún diálogo con el gobierno y solo pedían su renuncia, las fuerzas militar y policial estaban amotinadas, los grupos paramilitares azuzaban a las fracciones de clase media conservadoras para ejercer violencia contra las autoridades y dirigentes del MAS, ni siquiera cuando se conoció la dimisión de Morales se llamó a la paz y la tranquilidad para instalar la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional con la intención de aprobar la renuncia y garantizar una sucesión ordenada, como sí se hizo en octubre de 2003, cuando el presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada renunció y salió del país rumbo a Estados Unidos. Es obvio que la derecha no quería un escenario así ante la posibilidad de que el MAS optara para que Salvatierra asumiera la presidencia interina. Por eso entonces mantuvieron el acoso contra los legisladores del MAS, le cerraron el paso a Salvatierra para que no ingre-

sara a las instalaciones del Legislativo, a pesar de que había renunciado. Sin *quorum*, Jeanine Áñez se autonombró presidenta del Senado, primero, y presidenta del Estado después. Por lo demás, en una mezcla bastante compleja de desorientación política, oportunismo de unos, cooptación⁸ de otros y cierto respiro de libertad de acción ante lo que calificaron como mandatos no consensuados,⁹ la Asamblea Legislativa Plurinacional no está jugando el papel de contrapeso del gobierno de facto y se hace funcional a los planes antipopulares y antinacionales, lo que facilita las medidas autoritarias que se llevan adelante contra la población.

Pero no es solo la forma de «no elección» de Áñez lo que le da un carácter al golpe de Estado, sino tres factores adicionales que no pueden escapar de ninguna consideración al momento de evaluar la situación.

En primer lugar, durante 48 horas no había ninguna autoridad civil visible al frente del Estado. Fueron las horas del terror que azolaban a la población con grupos paramilitares, vándalos y policías de civil, según se supo después. Las únicas víctimas eran autoridades del derrocado gobierno, incluso locales, y dirigentes del MAS. Pero detrás de ese aparente vacío estaba la derecha más reaccionaria, tomando decisiones. El moderado Mesa terminó siendo presa de su conocido odio a Morales antes que ser consecuente con sus principios liberales.

⁸ La exministra de Comunicación de Áñez, la periodista Rozana Lizagarra, reveló que la presidenta del Senado, Eva Copa, tiene una relación muy estrecha con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

⁹ Senadores y diputados del MAS justificaron su contradictoria y desleal posición en varios temas de coyuntura posgolpe, como la Ley de Garantías y la lectura de la renuncia de Evo Morales, criticando la forma en que, antes del 10 de noviembre, eran tratados por una cúpula parlamentaria directamente vinculada al presidente indígena.

En segundo lugar, los militares tenían el control del país, directa o indirectamente, lo que ha llevado a estudiosos como Emir Sader a considerar que de esta manera se consolidó un golpe militar más en Bolivia y que no importan las historias que vayan a contar.¹⁰

En tercero, la propuesta del presidente del Comité Pro Santa Cruz, el 10 de noviembre, de cesar de funciones a todas las autoridades del Estado en general y la conformación de una «junta de gobierno transitorio conformada por notables».¹¹ Es evidente que las fracciones predominantes que encabezaron la interrupción no democrática del gobierno indígena no disimularon, ni en su propuesta (junta de gobierno), ni en sus métodos (violencia paramilitar), para parecerse mucho a los justificativos y recursos empleados por las dictaduras militares del pasado.

¹⁰ No importan las historias que van a contar. Es un golpe, que rompe con la continuidad democrática existente desde la primera victoria electoral de Evo Morales, en 2005. La renuncia de Evo se hace bajo la presión militar, de acciones violentas de comandos de la derecha. Ver más en: <https://www.pagina12.com.ar/230320-golpe-en-bolivia-la-derecha-hace-lo-que-sabe-hacer>

¹¹ Es evidente que si Evo Morales no renunciaba o dimitía él pero no Adriana Salvatierra, la propuesta de la junta de gobierno hubiera sido abanderada por los sectores de ultraderecha que se habían colocado en escena política ante la pasividad y la mirada cómplice de sectores menos radicales e incluso liberales. Ver más en <https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/10/camacho-agradece-al-pueblo-policia-ffaa-propone-conformacion-de-gobierno-transitorio-236990.html>

El golpe de Estado¹² del 10 de noviembre combinó viejos y nuevos métodos, y desató una feroz persecución política¹³ con una sorprendente legitimidad y participación de fracciones de la pequeña burguesía y de sectores políticamente atrasados del campo popular que actúan reaccionariamente,¹⁴ lo que le da un rasgo fascistoide.¹⁵ De hecho, apenas posesionado una parte del gabinete del gobierno de facto, uno de sus ministros anunció, textual, que iba a «cazar»¹⁶ a dos exautoridades del gobierno

¹² Hay al menos tres argumentos fuertes que respaldan la tesis del golpe de Estado en Bolivia: primero, el pedido de renuncia que las Fuerzas Armadas le hicieron al presidente Evo Morales el 10 de noviembre; segundo, el vacío de poder civil durante 48 horas en el que las decisiones de cómo y quién iba a suceder a Evo las tomaron los poderes factuales; y tercero, la posesión de Jeanine Áñez como presidenta del Senado y luego como presidenta del Estado Plurinacional sin que existiese el *quorum* reglamentario en ninguna de las cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

¹³ De acuerdo a un reportaje a fondo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), al menos cuatro grandes organismos de derechos humanos (ONU, CIDH, Human Rights Watch y Amnistía Internacional) hacen referencia a la violación de derechos humanos y la persecución política después de la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre.

¹⁴ Acudiendo a un estudio del fascismo, Zavaleta recuerda que el fascismo se funda en un movimiento de masas reaccionarias y que su pretensión es la construcción de una suerte de «hegemonía negativa», que es cuando el pueblo cree que su opresión es legítima. René Zavaleta: «La reforma del Estado en la Bolivia postdictatorial», *Obra completa*, tomo II, Plural Editores, La Paz, 2011, p. 673.

¹⁵ Uno de los rasgos clásicos de los gobiernos fascistas o con tendencias fascizantes es la participación de la pequeña burguesía o de fracciones de la misma que anteponen modalidades de ejercicio de autoridad antes que apego a los valores y prácticas democráticas.

¹⁶ El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sostuvo a la prensa nacional e internacional en las puertas de Palacio Quemado que iba a cazar a Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, Hugo Moldiz, exministro de Gobierno, y a Raúl García Linera (hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera) por sedición y terrorismo.

de Morales y a un activista político. Una de las características del escenario no democrático que se construyó con vigorosa fuerza desde los medios de comunicación y las redes sociales fue la disponibilidad o permisibilidad al ejercicio de la violencia estatal y paraestatal, con detenciones arbitrarias, persecuciones inexplicables y apertura de procesos forzados, lo que ha conducido a que se esté hablando de un Estado de no derecho.

Lo que sorprende no es lo que hicieron las fuerzas conservadoras para liberarse de un gobierno al que rechazaban por abrir la puerta grande de la historia para la participación políticamente efectiva de las mayorías, sino la indefensión en la que se encontraba la Revolución Democrática y Cultural. El abrupto y violento corte de la Revolución, en medio de una realidad geopolítica en la región caracterizada por una ofensiva imperial y conservadora de la derecha, encontró al gobierno y al bloque indígena, campesino, obrero y popular sin capacidad de defenderse, desde el Estado y desde su base social, ante un plan de desestabilización y ruptura que se respiraba en el ambiente en los tres últimos años de manera general y, con mayor nitidez, un mes antes de las elecciones de octubre. Es evidente que la dirección política de uno de los procesos más profundos de la historia boliviana,¹⁷ no esperaba encontrarse con un clima de convulsión social urbana de tal magnitud que tuviera efecto estatal abiertamente contrario a su perspectiva de continuidad, ni mucho menos observar la soledad en la que estuvo las últimas 72 horas ante la lenta reacción de las orga-

¹⁷ La Revolución Democrática y Cultural surge de la cuarta crisis estatal de la historia boliviana (2003) que por primera vez se resuelve a favor de lo nacional-comunitario-popular. Las tres que le precedieron: la llamada Guerra Federal (1899-1900), la del agotamiento del Superestado minero-feudal (1932-1952) y la de agonía del nacionalismo revolucionario (1982-1985).

nizaciones sociales. Más allá del nombre —la sustitución del Estado Mayor del Pueblo por el Consejo Nacional para el Cambio (CONALCAM)—¹⁸ se le quitó a las organizaciones sus cualidades de auto-organización y auto-representación, y con ello las convirtieron en «menores de edad» que solo hacían lo que desde el gobierno se les pedía. Otra hubiera sido la historia, en los días anteriores al golpe de Estado, si el país hubiese contado con organizaciones sociales llenas de vida, autodeterminadas y con autonomía.¹⁹ Es más, una masiva movilización de aymaras²⁰ de La Paz se registró el 11 de noviembre en defensa de la Whipala que había sido sacada de Palacio Quemado por el ultraderechista Camacho un día antes y arrancada de sus uniformes por los policías después. Indignados por lo que se hizo con la bandera de las naciones indígenas, que además está reconocida constitucionalmente, lanzaban la consigna de «guerra civil» y en ningún momento pedían el regreso de Evo Morales.

A propósito del derrocamiento de Víctor Paz Estenssoro en 1964 y lo que se ha vivido en octubre y noviembre de 2019, «hemos de ver que se trató de un golpe de Estado proyectado por la política norteamericana, ejecutado en parte por agentes

¹⁸ El Estado Mayor del Pueblo, fundado antes de la victoria de Evo Morales, estaba integrado por las organizaciones y movimientos sociales, además de partidos de izquierda, que se autoconvocaban para la defensa del Proceso de Cambio. La CONALCAM no se reunía sin alguien del gobierno, ni siquiera para hacer análisis de coyuntura.

¹⁹ Antes que el Estado Mayor del Pueblo fuera disuelto, se zanjó el debate de si independencia o no de clase frente el gobierno de Morales. Se acordó que la independencia de clase es frente a un gobierno que no es del pueblo, lo que no era el caso del gobierno indígena y popular, pero sí mantener grados de autonomía como forma de ejercicio del poder «desde abajo».

²⁰ De las 36 naciones originarias o pueblos indígenas de Bolivia, los aymaras y los quechuas son demográficamente los más numerosos.

de ese país y con su dinero, con la creación fulgurante de una figura política, eliminando del campo de juego a una Revolución desprevenida y sometida, que no atinó a su defensa porque hacía años que había perdido la convicción de sí misma».²¹ Lo que menos se puede hacer es reflexionar sobre la forma trágica en que se repitió la historia.

El golpe de Estado, que como señala René Zavaleta, es la principal forma en que se presentan los cambios en Bolivia,²² encontró en la teoría del fraude —hecho que no ha sido comprobado— el motivo para expulsar del gobierno a Morales, con el discurso de la democracia y el Estado de derecho, cuando en realidad existen causas mucho más profundas que explican el por qué la derecha optó por recurrir de nuevo a su acostumbrado viejo método para retomar la titularidad del Estado, al que no demoraron en colocarle el sello de la blanquitud.

Ya no hay duda que los gobiernos «permanente» y «temporal» de Estados Unidos²³ no iban a tolerar, por factores políticos y geopolíticos, la continuidad del Proceso de Cambio, aunque el mismo no se haya cansado de dar señales de agotamiento y de ralentización a partir de 2010, pocos meses después de

²¹ René Zavaleta: «La caída del MNR», *Obra Completa*, tomo I, Plural Editores, La Paz, 2013, p. 243.

²² En un análisis del comportamiento de obreros y campesinos, aunque también de fracciones progresistas de la pequeña burguesía, en medio de una situación previa al golpe de noviembre de 1979, Zavaleta sostiene que el golpe de Estado es «una suerte de costumbre colectiva o, más bien, es la manera que adopta el cambio político y la sucesión en el poder en Bolivia». René Zavaleta: «Las masas en noviembre», *Obra completa*, tomo II, Plural Editores, La Paz, 2013, p. 102.

²³ En Estados Unidos el «gobierno permanente» es el complejo militar-industrial y el «gobierno temporal» es el ocupante ocasional de la Casa Blanca.

haber conquistado la mayor votación en las urnas.²⁴ El golpe de Estado, calificado de policial-cívico-militar por Morales, en realidad contó, como muestra recurrentemente la historia de América Latina, con el firme apoyo de Estados Unidos. El gobierno popular no tuvo capacidad de reacción y la derecha lo aprovechó muy bien. Por eso mismo, hay que reconocer dos cosas que las señala el intelectual Boaventura de Sousa en un balance de la Revolución Boliviana: «La intervención imperial aprovechó los errores internos para neutralizar en un país más» y, en alusión a la forma como se cayó, apunta: «nunca un gobierno antimperialista ofreció tantas oportunidades a la interferencia imperial y se rindió tan rápidamente (en claro contraste con Venezuela)».²⁵

Emulando a las experiencias fascistas en la Europa de Hitler, Mussolini y Franco, fracciones de la burguesía y pequeña burguesía de extracción o posición blancoide, nunca han escondido, dadas las características de la formación social boliviana, su absoluto desprecio por los indios, ya sean estos obreros, trabajadores, campesinos, comerciantes o, incluso, empresarios. La forma colonial como se estructuró el poder en Bolivia ha sido sobre la base del color de la piel (real o simbólica) y la naturaleza del apellido, que es, ciertamente, una forma de fascismo. No toda dictadura es fascista, pero el fascismo sí es una dictadura. Pues bien, de los gobiernos del ciclo militar desde los sesenta, es el gobierno de Hugo Banzer Suárez (1971-1978) el que aspiraba a desarrollar un proyecto fascista en el país. Para alcanzar ese objetivo había que contar con un movi-

²⁴ Morales alcanzó en 2005 el 53,74%, en 2009 el 64,22%, en 2014 el 61,36%, y en las elecciones anuladas de octubre de 2019 el 47%.

²⁵ Boaventura de Sousa Santos presenta un primer balance del proceso boliviano con el título «Evo Morales: el indio fuera de lugar». El texto fue publicado en varios espacios alternativos.

miento de masas fascistizado, asentado en las clases medias y los sectores atrasados de la clase obrera y el campo popular, y montar una estructura de poder fascista.²⁶ El dictador —que fracasó en ser candidato presidencial en las elecciones de 1978 por los niveles de resistencia popular y la oposición de fracciones dentro de las Fuerzas Armadas, aunque fue electo presidente en 1997 en virtud de la «democracia de pactos»— se propuso, en su periodo dictatorial, en alianza con los empresarios agro-exportadores, sustituir los sindicatos por coordinadores laborales e impulsar una política migratoria colonizadora con la llegada de 150 mil rhodesianos. Esto último lo hizo a través de Strauss, de inocultable ascendencia germana, como el propio Banzer.²⁷ Sin embargo, el pretender cambiar un sistema de mediación entre el Estado y los sindicatos mineros fracasó. Los coordinadores nunca fueron aceptados y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) mantuvo plena vigencia y papel de referencia en la lucha antidictatorial.

Para hablar de fascismo, es importante tener en cuenta tres componentes sin los cuales no es posible instalar un régimen fascista sino solo un gobierno de tendencia fascistoide o de modalidades fascistizadas; estos son: un proyecto fascista, un movimiento de masas y una estructura de poder.²⁸ Todas las dictaduras latinoamericanas se han inspirado en proyectos fas-

²⁶ El fascismo requiere de una estructura de poder, distinta a la vigente, para dar cabida al movimiento de masas que lo respalda y para desarrollar su proyecto.

²⁷ El carácter fascistoide del plan de migración es analizado en detalle por el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, como un caso de «enajenación absoluta» de la burguesía boliviana. Ver más en Marcelo Quiroga Santa Cruz: *Hablemos de los que mueren*, Plural Editores, La Paz, 2012, pp. 257-260.

²⁸ Zavaleta hace un análisis sobre el fascismo que aporta valiosos elementos para la comprensión de la coyuntura actual de Bolivia. Ver más

cistas, pero no han logrado construir ni movimiento de masas ni estructuras de poder y mucho menos obtener legitimación ideológica en amplios sectores de la población.

Tomando como referencia lo anteriormente señalado a propósito de los rasgos del fascismo, es evidente que, a partir del 21 de febrero de 2016, cuando el gobierno de Morales no supo leer bien lo que implicaba el rechazo popular al cambio constitucional, se desarrolló una matriz autoritaria en amplias fracciones de la clase media que se tradujo, como todo, en prácticas no democráticas, de modalidad fascistizante. Y cuando uno observa el comportamiento de esas fracciones de clase, a las que se sumaron otras capas urbanas atrasadas políticamente, encuentra algunos rasgos de legitimidad ideológica que no pueden pasar inadvertidos. Es más, el respaldo o indiferencia en las ciudades al accionar de los grupos paramilitares que perseguían mujeres y hombres de origen indígena, desde el día siguiente de las elecciones y que se mantuvo en alto grado —lo que ha disminuido, pero no desaparecido— hasta cumplido el mes de la instalación del gobierno de facto, abre la hipótesis de que existe en Bolivia un movimiento de masas fascistoide. Es decir, hay en curso la estructuración de una fuerza social fascistizada que realiza acciones, con la complicidad del gobierno, de acoso a embajadores, residencias de embajadas y a otras exautoridades y militantes del campo nacional-comunitario-popular. Es a este sector fascistizado —principalmente pequeño burgués, decadente o no— al que el actual gobierno —cuyo partido nunca superó el 7% de respaldo— busca apelar con sus medidas de fuerza y discurso radical.

en René Zavaleta: «Notas sobre el fascismo», *Obra completa*, tomo II, Plural Editores, La Paz, 2011, pp. 459-469.

En esa dirección cada día hay señales de que el gobierno de facto está desarrollando esa tendencia fascistoide. Las señales van desde el contenido radical de sus mensajes hasta prácticas concretas. A pesar de cierta retórica democrática, se observa un gobierno que pasa por encima de la mínima legalidad y genera un ambiente de permanente temor para los que piensan distinto. Veamos algunos ejemplos no menores: primero, hace oídos sordos de la censura de la Asamblea Legislativa Plurinacional al ministro de Defensa, quien tendría, por norma, que ser destituido y no vuelto a posesionar como titular de la misma cartera;²⁹ segundo, califica a los movimientos sociales como violentos y como objetivos a ser identificados, perseguidos, cercados y derrotados.³⁰ El ministro de Gobierno no deja de emplear un discurso ofensivo para justificar todo lo que pasa. Además, en la línea de lo que ocurrió en la década de los setenta —con una Operación Cóndor³¹ que tenía a los organismos represivos de los países bajo dictadura militar como mecanismos de coordinación internacional—, Áñez sostuvo que las agencias

²⁹ En una extraña e ilegal figura jurídica, el 9 de marzo Áñez dejó sin efecto la designación de Luis Fernando López como ministro y al día siguiente lo volvió a posesionar como ministro de Defensa, en una demostración de fuerza y desafío a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

³⁰ Jeanine Áñez, al clausurar un congreso de agencias de inteligencia en La Paz, en las que participaron Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos, sostuvo que se había vencido a los movimientos sociales a los que calificó de violentos. Ver más en https://www.la-razon.com/nacional/Postura-Jeanine_Anez-violentos-movimientos_sociales-Bolivia_0_3324867508.html y <https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200305/anez-dice-que-vencio-violentos-autodenominados-movimientos-sociales>

³¹ La Operación Cóndor consistió en intercambio de información y presos, detenciones extraterritoriales sin legalidad y asesinatos en la década de los setenta, cuando la mayor parte de los países de América Latina, sobre todo Sudamérica, estaba gobernada por militares.

de inteligencia de países como Estados Unidos, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, debían compartir información para evitar actos violentos contra los gobiernos de la región. Y obviamente todas esas acciones cuentan con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, por lo que no es ninguna casualidad el silencio de Trump a los excesos que comete el gobierno boliviano a nombre de la democracia, ni el comunicado emitido junto a Bolsonaro, el 8 de marzo pasado, para apoyar «las elecciones libres y democráticas en Bolivia».³² «Mientras un gobierno de derecha y proestadounidense de Bolivia reprime, amenaza y encarcela a sus oponentes de izquierda, Estados Unidos ha permanecido en gran medida en silencio, al igual que durante los abusos de las dictaduras latinoamericanas que apoyaron la Guerra Fría»,³³ expresa una nota publicada en *The Washington Post*.

Otro rasgo central del alto grado de subordinación del gobierno boliviano a Estados Unidos es que la línea de la «guerra total y permanente»³⁴ contra los gobiernos y movimientos progresistas y de izquierda de América Latina, está contenida en los discursos de la presidenta y de sus principales ministros. Dentro de la línea de formulación y práctica político-militar está «la construcción del enemigo», esta vez, interno y externo,

³² Ver más en: <https://www.paginasiete.bo/planeta/2020/3/8/trump-bolsonaro-renuevan-apoyo-guaido-bolivia-248980.html>

³³ La nota completa se puede ver en: <https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/7/el-washington-post-critica-el-silencio-de-trump-ante-una-ola-de-persecucion-del-gobierno-de-anez-248907.html>

³⁴ Rodríguez Rejas realiza una profunda investigación sobre el grado de influencia de los presupuestos teóricos y de los principales documentos que Estados Unidos puso en marcha desde la década de los setenta en América Latina. Ver más en María José Rodríguez Rejas: *La norteamericanización de la seguridad en América Latina*, Akal, México, 2017.

que permanentemente hacen los ministros de Gobierno y Defensa. Es poco probable que conozcan los presupuestos teóricos de las distintas estrategias que Estados Unidos ha desplegado hacia América Latina, tales como los documentos Santa Fe y otros, pero cumplen al pie de la letra lo que les dicen los consejeros de la embajada estadounidense.

Como bien señala Rodríguez Rejas, la construcción de ese enemigo se ha perfilado a través de varios momentos. Hasta los noventa el enemigo era el comunismo:

A inicios de los noventa, los enemigos eran las guerrillas de los países periféricos que amenazaban la consolidación de las democracias pactadas, como en el caso de América Latina. Después se definió al narcotráfico como nuevo enemigo internacional y, de esta manera, los procesos de militarización en la periferia se dispararon. A partir de 2001 y después de los ataques a las dos Torres Gemelas, el enemigo, en el que confluyen las anteriores concepciones, será el terrorismo.³⁵

Veamos, a manera de ejemplo, de qué formas se plasma la construcción del enemigo en el gobierno. Primero, la promulgación del decreto supremo 4116 que autoriza al Ministerio de Defensa para la adquisición, en el extranjero, de material bélico de uso militar se justificó de la siguiente manera:

El país está amenazado, y el boliviano y la boliviana están amenazados permanentemente por gente del exterior armada, por narco-terroristas y por un expresidente (Evo Morales) que permanentemente está incitando al odio y la

³⁵ María José Rodríguez Rejas: *ob.cit.*, Akal, México, 2017, p. 135.

violencia, el terrorismo y la sedición. Debemos estar preparados para eso.³⁶

Segundo, lo que dijo Áñez de los movimientos sociales al calificarlos de «grupos violentos» e ir abonando el terreno para el regreso de la DEA al sostener que hay grupos de la mafia organizada como el Primer Comando de la Capital, carteles de Sinaloa y los Zetas de México, Sendero Luminoso del Perú, mafias rusas y presencia de elementos residuales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).³⁷ En la lista de «enemigos» se ha incluido, como era de esperarse, de manera grosera a Cuba y Venezuela, y en menor medida a Rusia. Con tan mecánica amplificación del libreto estadounidense, está claro que los conceptos de narcoterrorismo y terrorismo son tan abstractos que su uso práctico solo sirve para meter a todos en la misma bolsa, entre ellos, a los luchadores sociales.

Ahora, a más de cuatro meses de la principal, si no única, forma política de seleccionar autoridades dentro de la democracia representativa —que sigue siendo mucho más importante que las otras democracias reconocidas e incorporadas en la Constitución Política del Estado Plurinacional—, la idea del fraude con la que se montó la justificación del derrocamiento del presidente indígena, sigue gozando de apoyo en aquellas

³⁶ El 17 de diciembre de 2019 el ministro de Defensa, Luis Fernando López, sostuvo que el gobierno tiene indicios de narcoterrorismo y terrorismo en el país. Ver más en: <https://www.paginasiete.bo/seguridad/2019/12/18/gobierno-justifica-compra-de-material-belico-ante-riesgo-de-terrorismo-240726.html>

³⁷ El 28 de febrero, en un encuentro antidrogas, Áñez señaló que su gobierno no dejará que Bolivia sea un santuario para la realización de las actividades del narcotráfico. Ver más en: <https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/2/28/anez-denuncia-presencia-grupos-criminales-mafias-en-bolivia-248044.html>

clases y fracciones de la burguesía, así como de grupos sociales relacionados con las mismas, que nunca vieron con buenos ojos la condición de posibilidad de avances efectivos que se hicieron en más de una década, sobre todo en el periodo 2006-2009, para desmontar los pilares materiales y simbólicos, aún dentro del capitalismo, de la caduca estructura de la colonialidad del poder.³⁸

En otro porcentaje de la población, también de capas urbanas que al principio creyeron en la matriz del fraude y ante el hecho de que hasta ahora no se han presentado pruebas materiales del delito, la opinión política empieza a cambiar. Es más, la hipótesis del fraude no ha sido probada, sino cada vez más cuestionada por organismos prestigiosos.³⁹

³⁸ La Bolivia anterior al ascenso de Morales a la presidencia, como síntesis de un proceso político forjado «desde abajo» por las clases y fracciones subalternas, se caracterizó por la configuración y reproducción de un poder basado en la racialización material y simbólica que despreciaba la «indianidad» en contraposición a la exaltación de lo blancoide, y, en lo externo, de una abierta subordinación del país a los designios de Estados Unidos.

³⁹ *The Washington Post* citando una investigación del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), afirma que en Bolivia no hubo fraude. La investigación realizada por un equipo grande de esa prestigiosa universidad y escrita por John Curiel y Jack R. Williams, quienes sostienen «no hay ninguna evidencia estadística de fraude que podamos encontrar», tras la suspensión del conteo, y señala además que «las tendencias en el conteo preliminar, la falta de un gran salto en el apoyo a Morales después del alto [en el conteo] y el tamaño del margen de Morales parecen legítimos; con todo, el análisis estadístico y las conclusiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) parecerían profundamente defectuosos». (Fuente: <https://www.perfil.com/noticias/internacional/segun-una-nota-del-washington-post-no-hubo-fraude-electoral-en-bolivia.phtml>). Otros organismos como el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) y

Ahora, para ir cerrando esta parte, es necesario identificar las causas del golpe de Estado. En términos generales podemos mencionar las siguientes:

Primero, acabar con una experiencia que resultó exitosa en materia de concepción y manejo de la economía. Independientemente del debate sobre el por qué el gobierno boliviano se estancó en los últimos años en el posneoliberalismo y que no había indicios de que existiera voluntad y decisión política para avanzar hacia un horizonte poscapitalista, no es posible negar que el carácter de la economía con crecimiento, distribución y justicia social representaba un mal ejemplo para Estados Unidos y las élites locales, pues demostraba que la izquierda y el progresismo tenían la capacidad de ser buenos y eficientes.

Segundo, terminar con un Proceso de Cambio que, al darle al Estado el control de los recursos naturales, interrumpía el ciclo de rotación del capital transnacional en las condiciones del siglo XXI, donde lo que más se quiere es el libre e ininterrumpido movimiento del capital sin que factores políticos lo alteren. Ahí están, por ejemplo, los ojos puestos en las reservas de litio que posee Bolivia, las más grandes del planeta y que representan una valiosa fuente de energía no fósil de gran apetencia para las transnacionales.

Tercero, recuperar, a partir de cómo se quiere que funcione y se mueva el capital en su fase de reproducción ampliada, el poder político para los que nunca perdieron el poder económico. Detrás de un proyecto o una medida política existe, por lo general, una determinación económica. Se trataba, por lo tanto, de evitar que en Bolivia se pasara de la revolución política a la revolución social propiamente dicha, lo que habría sido, en el

estudiosos de temas electorales se han pronunciado en la misma dirección.

caso hipotético de que ese fuese el proyecto del gobierno de Morales, difícil de interrumpir más adelante. Un nuevo periodo de gobierno es algo que ya era intolerable. No hay que olvidar que en el capitalismo todo se presenta como no es, de su lado aparente, y esta no es la excepción. La oposición a la postulación de Evo Morales para las elecciones de 2019 y luego, como no pudieron impedirlo, la construcción de la matriz del fraude, representan los dos cascarones que cubren un tema de fondo: el temor al avance de los pueblos hacia su emancipación. Había que restablecer plenamente, pues tampoco se desmontó a plenitud, la colonialidad del poder. Y uno de sus fundamentos es el racismo que es «el mito fundacional de la modernidad, en cuanto proyecto civilizatorio. Esto quiere decir que, sin racismo no hay sociedad moderna y tampoco capitalismo».⁴⁰ La burguesía y las fracciones aristocráticas de la pequeña burguesía (clase media), incluidas las que el gobierno de Evo acogió y les dio protagonismo, jamás aceptaron que los indios ocupasen los espacios de poder material y simbólicos que los consideraban suyos.

Cuarto, convertir a Bolivia en un aliado en la región sin que cambie su condición de país «tapón» en la subregión. En la geopolítica un país vale no solo por los recursos naturales que tenga y su ubicación geográfica, que en el caso de Bolivia es importante, sino por la voluntad y/o capacidad política de su Estado o gobierno. Con Morales, este pequeño país, ubicado en el corazón de Sudamérica, estaba empezando a jugar un papel activo en el campo internacional sin sometimiento a Estados

⁴⁰ Rafael Bautista, en un interesante artículo a propósito del golpe de Estado desvela la naturaleza colonial de ese acto contrarrevolucionario. Ver más en: <https://argentina.indymedia.org/2019/12/30/bolivia-a-confesion-de-golpe-relevo-de-fase-por-rafael-bautista-s/>

Unidos. En dependencia de los temas de la agenda mundial, Bolivia se movía entre un país «pivote» y un «jugador estratégico» que, ciertamente no era del agrado de Estados Unidos y sus fracciones enajenadas de burguesía y pequeña burguesía bolivianas.

Para Bautista,

con el golpe en Bolivia, que es, en realidad, el inicio de un golpe continental, las «formas aparentes» transitan a una reconfiguración del diseño centro-periferia: el nuevo mapa-mundi del Pentágono, es decir, partir el mundo en dos, el orden y el caos, o sea, en lenguaje evangélico, el cielo y el infierno, pero en la tierra. Por eso no es ilógico la implantación, vía golpe, de un régimen inconstitucional en Bolivia; porque esa es la antesala de la «anomia estatal» que se precisa para socavar la soberanía nacional y provocar, sin alternativa posible, la feudalización de los Estados periféricos.⁴¹

Por todo lo anteriormente señalado podemos decir que es un equívoco, que puede tener efectos concretos al momento de formular una estrategia y tácticas adecuadas para vencer al golpismo, el pensar que se está frente a un régimen fascista. A la reflexión de Zavaleta en sentido de que para instaurar un Estado fascista es necesario la convergencia de un proyecto fascista, una estructura fascista y un movimiento de masas fascista, hay que añadir algunos rasgos adicionales que el politólogo y filósofo argentino Atilio Borón puntaliza: la existencia

⁴¹ A propósito de las relaciones de dominación/subordinación del orden colonial que busca mantener Estados Unidos, ver más en Rafael Bautista: «Del Estado aparente a la anomia estatal», en: <https://www.alainet.org/es/articulo/204290>.

de una burguesía nacional, una ampliación de la intervención estatal en la economía y una política exterior nacionalista.⁴² El gobierno de la autonombrada Ññez tiene una mirada anties-tatal y de identificación absoluta con el capital transnacional, a los que les viene abriendo las puertas a pesar de su carácter transitorio; en Bolivia no existe una burguesía nacional, que fue el sueño no cumplido por la Revolución de 1952; y lleva adelante una política exterior subordinada a los postulados de Estados Unidos. Ha logrado contar con un amplio respaldo de las capas urbanas que reaccionaron furiosas contra todo lo que olera a masismo e izquierda, y también lleva adelante una persecución ferozmente sistemática de la oposición, pero eso no lo convierte en régimen fascista. Es un gobierno de ultra-derecha, conservador, autoritario y con rasgos fascistoides que lleva adelante modalidades fascistizantes de acción política que es otra cosa.

El golpe de Estado que cortó el hilo de la continuidad constitucional e institucional en Bolivia debe ser leído, si no se quiere que situaciones como esa vuelvan a repetirse en otro momento de la historia, no solo desde una firme posición de condena, a la que incluso los sectores más apegados a la ideología democrático-burguesa deberían sumarse sin la menor duda —aun discrepando radicalmente con los cerca de 14 años de gobierno del MAS—, sino también desde una perspectiva crítica de lo que pasó y de sus causas más profundas, de parte de los que apostaron con esperanza a que este proceso político deviniera un horizonte emancipador poscapitalista, aunque en condiciones complejas de un capitalismo por vez primera claramente

⁴² Para un estudio del fascismo en profundidad ver más en: Atilio Borón: *Estado, capitalismo y democracia en América Latina*. Clacso, Argentina, 2003. pp. 39-83.

planetario. Muchas cosas, buenas y malas, positivas y negativas, de avance y retroceso, han sucedido en 14 años de gobierno liderado por Evo Morales de los que hay que obtener lecciones que sirvan para una valoración objetiva en la academia y, sobre todo, para tomarlas en cuenta desde el campo de la política, que finalmente es donde se condensa y se resuelve la práctica de la lucha de clases, ya sea desde el llano o de nuevo como bloque en el poder. Pero hay una cosa que no se podrá negar al momento de escribir la historia larga: el Proceso de Cambio y el liderazgo de Evo Morales es el más profundo de la historia boliviana.

DIÁLOGOS EN CONTEXTO



ESTADOS UNIDOS Y LA «GUERRA 4G» CONTRA VENEZUELA

Rafael González Morales

El texto evalúa los factores determinantes en la peligrosísima escalada contra Venezuela a inicios de 2019 y analiza cómo se ha desplegado la llamada «guerra de cuarta generación».

52 páginas, 2019, ISBN 978-1-925756-41-8



BOLSONARO Y TRUMP 100 DÍAS DE ALIANZA CONTRA NUESTRA AMÉRICA

Rafael González Morales

Este libro explica los fundamentos de la alianza entre Bolsonaro y Trump partiendo de sus convergencias ideológicas y concepciones del mundo, lo que constituye la base que sustenta sus vínculos personales.

76 páginas, 2019, ISBN 978-1-925756-52-4



BARACK OBAMA **Y EL RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS**

Jesús Arbolea Cervera

Tiene el propósito de seguir el itinerario de uno de los «misterios» que más repercusión ha tenido en los últimos años, dígame la inesperada iniciativa de Barack Obama de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba.

134 páginas, 2019, ISBN 978-1-925756-62-3



DONALD TRUMP **Y LA VUELTA AL PASADO**

Jesús Arbolea Cervera

La victoria y la posterior conducta de Donald Trump son el reflejo de la crisis por la que atraviesa el sistema político norteamericano; la política hacia Cuba también ha sido víctima de esta condicionante.

180 páginas, 2019, ISBN 978-1-925756-78-4



LA CULPA ES **DEL QUE NO ENAMORA**

Jesús Arencibia Lorenzo

Entrevistas a Gabriel Kaplún, Juan Villoro, Luis Ramiro Beltrán, Guillermo Cabrera Álvarez, José Ignacio López Vigil, Pedro Miguel, Julio García Luis, Stella Calloni, Alberto Salcedo Ramos y Miriam Rodríguez Betancourt.

122 páginas, 2019, ISBN 978-1-925756-61-6



MIRADAS **AL PASADO RECIENTE DE CUBA**

Rodolfo Romero Reyes y Arlette Vasallo García

Las entrevistas a Jacinto Valdés-Dapena, María del Carmen Ariet, Alberto Prieto, Aurelio Alonso y Abel Prieto dan vida a estas páginas en las que se reviven momentos importantes de la historia reciente de Cuba.

68 páginas, 2019, ISBN 978-1-925756-57-9

Los periodos de la Revolución Boliviana y la injerencia de Estados Unidos

Como se ha señalado, el Proceso de Cambio —el más profundo de toda la historia de Bolivia por el carácter de la crisis estatal que lo precedió y el momento constitutivo que surgió de la misma, por la composición social de sus actores y la naturaleza inicial de su proyecto— ha atravesado por distintos periodos que, a la hora de hacer un balance preliminar y después otro más acabado, será importante tomarlos en cuenta. En cada uno de estos, se han desarrollado distintas formas de injerencia estadounidense, con el objetivo de evitar el ascenso de la lucha social a niveles que pongan en riesgo sus intereses estratégicos o de desestabilizar al gobierno nacional-comunitario-popular de Evo Morales. Por lo demás, en cada uno apreciaremos la relación dialéctica entre revolución y contrarrevolución, que es el rasgo característico cuando los pueblos abren momentos de posibilidad para forjar su emancipación.

Nada más que por razones metodológicas vamos a dividir en tres periodos la Revolución Boliviana del siglo XXI: un primer gran periodo, heroico a todas luces, que abarca del año 2000 al 2009 (dividido en dos subperiodos: 2000-2005 y 2006-2009); un segundo periodo, de la ralentización (2010-2016), y, finalmente, el tercer periodo: ocaso del gobierno y golpe de Estado (2016-2019). A cada uno de estos periodos y subperiodos

corresponde una determinada forma de injerencia estadounidense y de desestabilización llevada adelante junto a los sectores opositores. Es más, podríamos decir que, ya en el gobierno, el bloque nacional-comunitario-popular enfrentó dos grandes estrategias: una para el derrocamiento de Evo Morales y la otra para el desgaste del presidente indígena.

Momento heroico

El primer periodo, al que no es una exageración bautizar como «momento heroico» de la Revolución, se caracteriza por varias cosas: representa el momento constitutivo¹ del bloque indígena, campesino, obrero y popular; se produce un desplazamiento de la hegemonía del bloque burgués-oligárquico-colonial profundamente vinculado a Estados Unidos; la iniciativa política y la capacidad de dirección están del lado del bloque de las clases subalternas, que irrumpe con fuerza en la escena política después de cerca de 15 años de resistencia desorganizada al neoliberalismo, y que ya en función de gobierno demuestra su capacidad de resistir y derrotar la ola contrarrevolucionaria imperial-burguesa-colonial. Es, por lo demás, el periodo en el que se nacionaliza el gobierno, se recupera el control estatal de los hidrocarburos, se lleva adelante la Asamblea Constituyente, se conquista la independencia política ante Estados Unidos y se da nacimiento al Estado Plurinacional.

El primer subperiodo abarca desde 2000 hasta 2005. Es un error metodológico y político bastante frecuente situar la Revo-

¹ Para René Zavaleta «todo acto fundacional tiene un requisito de masa», además del desplazamiento de la hegemonía ideológica del bloque en el poder.

lución indígena, obrera y popular en 2006, que es cuando las clases subalternas toman el gobierno e instalan la condición de posibilidad de construir su propio poder. La Revolución en realidad se inicia en el año 2000 cuando el pueblo, construyendo hegemonía nacional-comunitaria-popular, abre una coyuntura en la cual la iniciativa política está de su lado frente a un bloque burgués en el poder cada vez más arrinconado. El país es escenario de una crisis combinada en la «sociedad política» y en la «sociedad civil»,² sin que todavía aparezca de manera nítida el germen de un proyecto alternativo al orden vigente desde las clases y grupos subalternos. La hegemonía de las clases dominantes empieza a resquebrajarse en la sociedad civil por el fracaso del modelo neoliberal y de las expectativas generadas por la «teoría del rebalse». Se presenta en desarrollo una tendencial «crisis de autoridad»³ o, si se quiere, una crisis de hegemonía regresiva en el gobierno y en sus parlamentos, producto de una falta de representatividad y de legitimidad en la sociedad civil. Esto quiere decir que existen grandes dificultades para mantener en orden la vida social, ya sea a través de los aparatos de dominación (policía y fuerzas armadas) y, peor aún, mediante

² «Por ahora se pueden fijar dos grandes planos superestructurales, el que se puede llamar de la “sociedad civil”, que está formado por el conjunto de los organismos vulgarmente llamados “privados”, y el de la “sociedad política o Estado” y que corresponden a la función de “hegemonía” que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad y a la de “dominio directo” o de comando que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico». Antonio Gramsci: *Los intelectuales y la organización de la cultura*, Buenos Aires, 1984, p. 16.

³ Gramsci entiende por «crisis de autoridad» cuando «la clase dominante ha perdido el consentimiento, o sea, ya no es “dirigente”, sino solo “dominante”, detentadora de la mera fuerza coactiva, ello significa que las grandes masas se han desprendido de las ideologías tradicionales, no creen ya en aquello en lo cual creían, etc.». Manuel Sacristán: *Antología Gramsci*, Editorial Siglo XXI, México, 1970, p. 313.

los aparatos de hegemonía. La «democracia de pactos» ha fracasado y el sistema de partidos ya no convoca a nadie.

La irrupción de las clases y grupos subalternos objetivan, de manera nítida, la ampliación de una crisis de hegemonía del bloque en el poder, cuyas medidas para intentar revertir la crisis hacen mayor énfasis en la represión policial y militar. «Los de abajo» van unificando sus pliegos y sus luchas, sus sueños y sus esperanzas. También van articulando sus métodos de lucha. Pero la insurgencia de «los de abajo» tiene efecto estatal. La sociedad civil, pero entendida como un espacio en disputa, va teniendo primacía, desde el punto de vista de los intereses de las masas sublevadas, sobre la sociedad política.

Ya no es la lucha reivindicativa lo principal — pues tampoco se descarta la conquista de beneficios concretos —, sino que en la mira está el Estado, quizás a veces como algo fetichizado o como «comunidad idealizada», como decía Marx, pero ya está en la mira. La lucha social se va fundiendo con la lucha política. El núcleo hegemónico de la irrupción de «los de abajo» es el sujeto indígena-campesino, el método de lucha asumido es el político-electoral y la forma de participar en la democracia representativa es por la vía del Movimiento al Socialismo (MAS) que, para apegarse a la verdad histórica, es una sigla que se le traspa al instrumento político que cinco organizaciones indígenas campesinas bautizaron como Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) en marzo de 1995.

En este subperiodo se valida la afirmación gramsciana de que: «un grupo social puede y hasta tiene que ser dirigente ya antes de conquistar el poder gubernativo».⁴ La iniciativa está en las calles y en las comunidades. La política se produce

⁴ Gramsci sostenía, además, que esta es una de las condiciones para la conquista del poder.

fuera de los centros institucionalizados del poder. La democracia participativa y directa adquiere predominio respecto de la democracia representativa, que se ha convertido en un mero instrumento procedimental para la selección de autoridades, pero tampoco la niega como una puerta de salida institucional a la crisis. Los grupos sociales subalternos, que ya actúan como dirección sin ser todavía dominantes, orientan su energía irradiante a la construcción de un nuevo sistema hegemónico para desplazar al anterior. La característica más importante de que eso está sucediendo, es que ya se ha producido una «escisión» en el sistema hegemónico. Hay una ruptura de los grupos subalternos con la ideología dominante y su proceso de unificación en la lucha le otorga «personalidad histórica», es decir, conciencia histórica de lo que debe hacerse y cómo debe hacerse para destruir el poder del enemigo e iniciar el proceso de construcción de su propio poder.

Cinco grandes protestas sociales y un resultado electoral expresan la magnitud de la crisis estatal y muestran que es el momento de las masas: la llamada «guerra del agua» y la movilización de septiembre, ambas en el año 2000, luego «febrero negro» y la «guerra del gas» de octubre de 2003, y las movilizaciones de mayo-junio que derrotaron la intención de la embajada de Estados Unidos de colocar como presidente de Bolivia a Horlando Vaca Díez. Desde el punto de vista electoral, aunque en el fondo trasciende lo democrático representativo para poner en evidencia el lento proceso de autodeterminación de las masas, es el sorpresivo segundo lugar que el MAS obtiene en las elecciones de 2002 al conquistar el 22,94% de los votos válidos y que lo coloca a menos de dos puntos de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien tuvo que renunciar a la presidencia y fugarse del país en octubre de 2003.

A este primer subperiodo corresponden dos claras acciones de injerencia de Estados Unidos, tanto desde su embajada en La Paz, como de sus propios organismos de inteligencia: La primera la expuso abiertamente el entonces embajador Manuel Rocha, quien en un acto público, en el Chapare, en junio de 2002, y a poco de realizarse las elecciones generales, llamó a no votar por Morales pues se colocaba en riesgo la asistencia económica y para el desarrollo que su país le daba a Bolivia. La embajada de Estados Unidos apostaba claramente por Gonzalo Sánchez de Lozada, quien luego de conformar una coalición fue electo en el Congreso para ser presidente de Bolivia para el periodo 2002-2005.

La segunda acción de intromisión la llevó adelante el embajador David Greenlee, quien, a pocos meses de reemplazar a Rocha, no pudo evitar que la sublevación democrática de «los de abajo», forzara la renuncia y posterior huida a Estados Unidos de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003, ni pudo lograr que el presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, asumiera la conducción de Bolivia en junio de 2005, cuando Mesa, preso de sus propias contradicciones, renunció. Inútiles fueron las reuniones que impulsó el gobierno estadounidense para ampliar la coalición que había conseguido la elección de Sánchez de Lozada, sumando aliados de último momento; vanos fueron los esfuerzos para evitar que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, asumiera, en cumplimiento de la línea de sucesión que establecía la anterior Constitución Política, la presidencia del país entre junio de 2005 y el 22 de enero de 2006, cuando Evo Morales juramentó como presidente.

El segundo subperiodo del «momento heroico» (2006-2009) de la Revolución Boliviana del siglo XXI es la «toma del poder»

de «los de abajo» y el inicio de la configuración de un nuevo bloque histórico, es decir, de la construcción de vínculos de nuevo tipo entre la estructura y los distintos niveles de la superestructura.

Lo primero que se hace es nacionalizar el gobierno.⁵ Resulta, por tanto, una lectura objetiva de este subperiodo afirmar que es el momento de máximo despliegue de la capacidad hegemónica del insurgente bloque en el poder. En el campo de la política se nacionaliza el gobierno y en el campo de la economía se adoptan las medidas antineoliberales y antimperialistas de mayor trascendencia: la nacionalización del petróleo, la recuperación de las empresas estatales entregadas al capital transnacional durante la época neoliberal y el control de los recursos naturales.

Es precisamente la constitución de un nuevo tipo de relaciones que lleva a caracterizar al proceso de Bolivia como una revolución política.⁶ El bloque social alternativo a los partidos de la derecha pasa de su condición de «dirigente» a «dominante», sin dejar de ser al mismo tiempo «dirigente». Es el momento más representativo de la hegemonía labrada y alcanzada desde «abajo». Y entonces adquiere sentido la reflexión de Gramsci cuando sostiene que cuando ese grupo social «ejerce el poder, y aunque lo tenga firmemente en las manos, se hace dominante, pero tiene que seguir siendo dirigente».

⁵ Zavaleta, retomando la tesis de Sergio Almaraz, que sostenía que antes que nacionalizar el petróleo había que nacionalizar el gobierno, sostiene: «La toma del poder es, por eso, una verdadera nacionalización del poder». René Zavaleta: «El desarrollo de la conciencia nacional», *Obra completa*, tomo I, Plural Editores, La Paz, 2011, p. 186.

⁶ Para una conceptualización actualizada de los conceptos de revolución, véase a Claudio Katz: *Las disyuntivas de la izquierda en América Latina*, Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2008, pp. 31-38.

La configuración de un nuevo bloque histórico allana su camino, como ocurriera con Venezuela y Ecuador, con el cambio de su Constitución por la vía de la Asamblea, que no es otra cosa que una de las expresiones del proceso constituyente.

El resultado de una Asamblea Constituyente es una nueva Constitución Política del Estado. En Bolivia, de un Estado aparente, que nunca representó el «interés general» de toda la sociedad en el plano de lo político-ideológico, se da paso a la creación del Estado Plurinacional. El resultado del proceso constituyente es la configuración de un nuevo poder. Ambos son importantes, pues dan lugar a un nuevo bloque histórico, por tanto, a un nuevo tipo de vínculo entre la estructura y la superestructura, y entre la sociedad civil y la sociedad política.⁷ Es más, no es exagerado afirmar que las revoluciones en América Latina en el siglo XXI se han dado hasta ahora bajo la forma de proceso constituyente.

En el campo de la estructura social, si bien no se han alterado las relaciones de producción capitalistas, la recuperación estatal de los recursos naturales, la apropiación colectiva (a través del Estado) de los excedentes y su redistribución en beneficio de las inmensas mayorías, ya implica, en el contexto de un capitalismo verdaderamente planetario, una afectación al ciclo de rotación normal del capital y un cambio sustancial en el largo recorrido hacia una sociedad no capitalista.

En el campo de las superestructuras quizás valga apuntar dos aspectos centrales. Primero, hay un proceso de construcción

⁷ Como señala Poulantzas, aquí «la superestructura política del Estado» asume «la función de ser el factor de cohesión de una formación y donde la lucha política de clases tiene como objetivo el Estado». Nicos Poulantzas: *Poder político y clases sociales en el estado capitalista*, Siglo XXI Editores, 23 edición, México, 1986, p. 87.

de una nueva estatalidad que condensa la nueva relación de fuerzas y el nuevo bloque histórico. Sin embargo, este proceso es paralelo al proceso de desmontar la vieja institucionalidad estatal en condiciones distintas a las revoluciones producto de las armas. Por eso el Estado es un campo de lucha. Segundo, el bloque en el poder, «dominante» y «dirigente», está bañando con una nueva cosmovisión surgida desde la memoria larga de los pueblos indígenas y una novedosa forma de concebir el mundo, al conjunto del nuevo orden social. Ambas cosas son una forma de ampliación permanente de la hegemonía. Hay que subrayar que la hegemonía no es algo muerto y estático, es algo vivo y en permanente movimiento. La instalación de un nuevo sistema de creencias ha sido tal que no solo se discute cómo se resiste a la nueva contraofensiva imperialista, sino cómo se construye el Socialismo Comunitario o Vivir Bien en Bolivia.

La configuración de un nuevo bloque histórico se ha producido en torno a la dirección de los movimientos sociales, particularmente indígena campesinos. El nuevo bloque en el poder actúa como «dominante», aunque con grandes dificultades por un aparato estatal (burocracia, ejército y policía) con enorme influencia de la desplazada clase dominante y Estados Unidos, pero lo hace sobre todo como bloque «dirigente». La combinación de esta doble condición, de la «guerra de posiciones» y la «guerra de movimientos», le permiten derrotar varios intentos de desestabilización, particularmente, el golpe de Estado «cívico-prefectural» de septiembre-octubre de 2008, cuando la ultraderecha pretendía partir al país en dos. La Revolución Democrática y Cultural ha pasado por varios momentos que van desde la defensa de lo conquistado en el Estado viejo, hasta la irradiación territorial y en profundidad del Estado Plurina-

cional. Claro, después de resolver a su favor, en una «guerra de posiciones», el equilibrio inestable de fuerzas que se mantuvo hasta 2008. Durante todos estos momentos, el bloque en el poder ha logrado combinar su papel de «dominante» y de «dirección» al mismo tiempo. Fuerza y firmeza hacia los enemigos que no se cansan de conspirar con apoyo directo de Estados Unidos, y expansión hegemónica hacia otros grupos sociales, particularmente, de clases medias.

Pero, en política no hay casualidades. Habrá que anotar que en la segunda parte de este primer periodo, la fuerza con la que emergió este proceso desde antes que «los humildes» se hicieran gobierno impide apreciar, en su real magnitud, la indefinición estratégica que ya es observada por círculos más pequeños cuando se sugiere que el horizonte más próximo de la revolución sería la edificación del capitalismo andino-amazónico. Esta propuesta de Álvaro García Linera, que finalmente es lo que se llevó adelante, encasillando al Proceso de Cambio dentro del umbral del posneoliberalismo y sin voluntad política de avanzar hacia el poscapitalismo, es algo que debe ser pensado para identificar las causas. Sin embargo, si se trata de un elemento de la teoría de la transición para países como el boliviano o una reconceptualización del proyecto nacionalista de crear un capitalismo nacional autónomo frente al imperialismo y su respectiva burguesía de carácter pluri-nacional, como etapa previa a la edificación del socialismo, es algo que tampoco quedó claro en las palabras del segundo hombre del país.

Pues bien, este segundo subperiodo se ha ganado con creces el apelativo de «heroico» no solo por las profundas medidas de cambio que tomó el gobierno, sino por la resistencia a los actos de injerencia de Estados Unidos. Ya con las clases

subalternas como gobierno, las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos fueron tensas debido a las distintas formas con las que los diplomáticos estadounidenses conspiraban. La intromisión del embajador Philip Goldberg se hizo manifiesta por el financiamiento, mediante la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) a prefectos y grupos de activistas de oposición que, bajo las banderas de la democracia y los derechos humanos, empezaron a tratar de aglutinar y movilizar a fracciones de las clases medias urbanas. No menos activos fueron los servicios de inteligencia montados en décadas bajo la cobertura de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Goldberg, un diplomático de extrema derecha que cumplió hasta la última coma el proyecto secesionista de Yugoslavia, no se andaba con cuentos y se mostraba mucho más eficiente que su predecesor. Desde el principio de su gestión se dedicó a explorar alternativas al liderazgo de Morales. A dos meses de su llegada a Bolivia, organizó un encuentro en el oriental departamento de Santa Cruz en el que participaron dirigentes cívicos, empresariales y sindicales. Con claridad sobre la misión a cumplir, desestimó al campesino Alejo Veliz y se mostró más partidario del alcalde de la ciudad de Potosí, René Joaquino. Está claro que Jorge Quiroga y el empresario Samuel Doria Medina no estaban entre sus prioridades.

Goldberg había sido un activista político. Su relación con la oposición cívico-política-mediática pasó por distintos niveles y ritmos. Sin poder evitar que la Asamblea Constituyente aprobara el nuevo texto constitucional en Oruro, en diciembre de 2007, con la presencia del MAS y otras diez fuerzas políticas, dio el visto bueno para que se llevaran adelante los referéndums por los estatutos autonómicos en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.

No importaba que la comunidad internacional, la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y los países vecinos, desconocieran esas consultas por su carácter inconstitucional. Estados Unidos las aprobaba, a pesar de su silencio inicial y de sus declaraciones abstractas.

La conspiración continuó. Sin consulta alguna, en coordinación solo con Jorge Quiroga, de Podemos, Goldberg hizo que el Senado aprobara la Ley del Referéndum Revocatorio de Mandato Popular que la oposición había archivado durante más de cinco meses. Al embajador estadounidense, que no había coordinado esas acciones con el bloque cívico-prefectural, no le importaba sacrificar a algunos de los prefectos, como Manfred Reyes Villa de Cochabamba, con tal de afectar a Evo. El cálculo, según reconocerían parlamentarios polemistas, apuntaba a la derrota del presidente y líder indígena o, al menos a que, aun manteniéndose en el gobierno, no superara la votación del 50%, lo que iba a ser aprovechado para pedir el adelanto de elecciones generales.

Todos los huevos fueron puestos en la canasta. Goldberg juntó a los dirigentes cívicos y prefectos opositores, coordinó con los propietarios de los grandes medios de comunicación, armó una intensa campaña sucia con los denominados «pacifistas» y agencias de publicidad, una de las cuales se negó a continuar trabajando cuando se enteró que el financiamiento provenía de Estados Unidos. Parte de la coordinación era con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, actualmente prófugos de la justicia boliviana y refugiados en Estados Unidos.

Como el referéndum constitucional registró un resultado contrario a los planes desestabilizadores, la embajada de Estados Unidos, que fue criticada por los opositores en reuniones

con su Consejero Político, puso en marcha la estrategia del «golpe suave»⁸ que el presidente Hugo Chávez de Venezuela enfrentó en abril de 2002, y que el pueblo de ese país sudamericano derrotó. El plan consistía en promover la sedición de los departamentos de la Media Luna, donde una combinación de toma de instituciones públicas y acciones armadas de grupos civiles arrojaría muertos, cuestionaría el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía, y terminaría con la renuncia de Morales y la convocatoria a elecciones anticipadas.

Dice el refrán que «al mejor cazador se le va la liebre». Las actividades conspirativas de Goldberg fueron descubiertas. El jueves 21 de agosto se reunió clandestinamente con el prefecto de Santa Cruz y cuatro parlamentarios estadounidenses que venían a reforzar los planes desestabilizadores de la democracia boliviana. Descubierto en sus afanes, no ocultó su identificación con los opositores cívicos y prefecturales que ejecutaban los planes diseñados en el Departamento de Estado. El lunes 25 de agosto se volvió a reunir con el prefecto cruceño y luego con Sabina Cuellar de Chuquisaca. Sobre el alto nivel de partici-

⁸ «Estados Unidos, a través del embajador Philip Goldberg, puso en marcha en Bolivia la estrategia del “golpe suave”, una readecuación burda del plan desarrollado contra el presidente Hugo Chávez de Venezuela, con el objetivo de crear un clima de ingobernabilidad, y generar desestabilización y violencia para evitar que se apruebe el proyecto de Constitución Política del Estado y si es posible para “sacar al indio” del gobierno. La estrategia del “golpe suave” ha sido creada por el politólogo estadounidense Gene Sharp, y se ejecutó con éxito en el derrocamiento del presidente georgiano Edward Shevernadze, en noviembre de 2003, y la ascensión al poder de Victor Yuvshenko en Ucrania, en diciembre de 2004». Hugo Moldiz: «Estados Unidos despliega su tercer gran intento desestabilizador contra Evo», semanario *La Época*, 30 de julio de 2018, pp. 10-11. <https://www.la-epoca.com.bo/2018/07/30/ee-uu-despliega-su-tercer-gran-intento-desestabilizador-contra-evo/>

pación de Estados Unidos, los cables confidenciales WikiLeaks revelan que ese 21 de agosto la entonces vicepresidenta Hillary Clinton preguntaba a su embajada en La Paz: ¿qué tan preparada está la oposición para usar la violencia en caso necesario? ¿Tiene algún plan para contrarrestar las fuerzas de seguridad con fines defensivos u ofensivos? Como se sabe, no es la primera vez que se develaba el interés estadounidense. En otro cable, el 10 de septiembre de 2009, Hillary insistía: «¿los líderes o grupos de la oposición planean protestar o manifestarse si sospechan de un fraude en las elecciones? ¿Tienen un plan para abstenerse de votar o intentar cometer fraude?».⁹

De acuerdo a una denuncia del exdiputado socialista Walter Vásquez Michel:

el 2 de septiembre, dando exhaustivo cumplimiento a esa agenda golpista, dos funcionarios norteamericanos por encargo de Goldberg, sostuvieron otro encuentro conspirativo con cuatro generales en retiro, en la casa del general Elías Eduardo, encargado de la seguridad de la Prefectura de Santa Cruz y hombre de toda confianza del prefecto Rubén Costas. Entre los militares estuvieron el general (SP) Ontiveros, el general (SP) Marcelo Antezana y el general (SP) Herlán Viestrox.¹⁰

Tres días después

⁹ Alex Anfruns: «El golpismo del siglo XXI y sus crímenes contra la humanidad», *Rebelión*, 13 de diciembre de 2019.

¹⁰ Walter Vásquez Michel: «Operación Media Luna, el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales», *La Época*, 28 de septiembre de 2008, p. 7.

el encargado de asuntos militares de la embajada de Estados Unidos conversó en Santa Cruz con el comandante de la Octava División, el general Antonio Bracamonte, el teniente coronel Dieter Claure y otros, para planificar una entrega de las unidades militares a los grupos paramilitares. Con ese se esperaba tensionar más la situación y dar la sensación de que el gobierno había perdido el control de las Fuerzas Armadas.¹¹

Estas acciones en síntesis aconsejaban: la ejecución de atentados terroristas en todo el país con la asesoría directa de la CIA, asaltar las instituciones del Estado asentadas en la Media Luna con el fin de hacer colapsar al gobierno, paralizar la totalidad de las carreteras que ingresan y salen de esta zona así como las salidas internacionales para neutralizar cualquier tipo de apoyo exterior, crear escasez de productos básicos alimenticios para irritar a la población y llevarla a la realización de actos callejeros contra el gobierno, asalto de cuarteles y módulos policiales con efectivos reducidos, generar violencia en movilizaciones populares con vistas a producir heridos y muertos de cualquier bando, y otras actividades desestabilizadoras que terminarían, según sus propósitos, por hacer real una situación de golpe de Estado.

Además de las actividades conspirativas, Goldberg reforzó la presencia de las actividades secretas. De acuerdo a una información, no desmentida por la embajada de Estados Unidos, ni por su titular, altamente comprometido con el separatismo en Kosovo, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que según se estima tiene en Bolivia la base más importante de agentes después de México, ha realizado operaciones de espionaje a tra-

¹¹ Ídem.

vés del Centro de Operaciones Especiales (COPES), un grupo irregular de inteligencia que actuaba al margen de la ley y con financiamiento estadounidense.

En marzo de 2008 John van Schaick, un joven becario del programa Fullbright, denunció ante el canciller boliviano David Choquehuanca, a un asesor de seguridad de la embajada de Estados Unidos, Vicent Cooper, por haberle pedido «recaudar información» de ciudadanos cubanos y venezolanos con los cuales eventualmente iba a cruzarse al momento de realizar su trabajo voluntario. El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó de «error» y de violación de la política establecida por ese país la intención de Cooper de usar a becarios o voluntarios estadounidenses en Bolivia como fuentes de inteligencia.

Las operaciones clandestinas de los servicios secretos de Estados Unidos en Bolivia quedaron plenamente confirmadas el 5 de febrero de 2006, cuando el director de la CIA, Michael McConell, informó ante un Comité de la Cámara de Representantes de ese país sobre las «actividades desestabilizadoras» que cubanos y venezolanos desarrollaban contra la democracia boliviana. Por su parte, el gobierno boliviano negó la valoración de la inteligencia estadounidense sobre la cooperación cubano-venezolana y el presidente Morales pidió a los diplomáticos, en una clara señal a Goldberg, no jugar a la oposición.

Acumuladas todas las acciones conspirativas organizadas con apoyo de Estados Unidos, Morales tomó la decisión de expulsar a Goldberg. No hay duda que esa medida, decidida el jueves 12 de septiembre, tensionó más las relaciones bilaterales entre ambos países.¹² Así lo ha advertido el Departamento

¹² El Departamento de Estado de Estados Unidos y el embajador Philip Goldberg declararon que la expulsión de este último de Bolivia, decidida por el presidente Evo Morales, tendría graves consecuencias

de Estado y lo ha reiterado el funcionario que quedó al mando de esa legación diplomática. Pocos meses después, el mismo Departamento estadounidense descertificará a Bolivia en su lucha contra el narcotráfico y el Congreso de ese país la excluirá de los beneficios de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina (ATPDEA, por sus siglas en inglés).

La ralentización

El segundo periodo (2010-2016) se caracteriza por la ralentización del Proceso de Cambio. Esta desaceleración no se presenta en el campo de la economía, donde más bien se empieza a consolidar el modelo económico que, a diferencia del neoliberal, expande la inversión pública, genera excedentes y los distribuye para beneficio de la sociedad, principalmente de los más necesitados, a través de distintos mecanismos como el incremento sostenido de los salarios y una política de bonos sociales. De hecho, los excelentes resultados en la economía provocan una desviación economicista en todos los niveles del gobierno y en los principales dirigentes de los movimientos sociales que años después tendría enormes consecuencias negativas, pues se olvida la autonomía relativa de los niveles del modo de producción capitalista y del enorme riesgo, ya advertido por Marx, de tergiversar el concepto de «determinación en última instancia» de la economía sobre la superestructura.

La relación de equilibrio que se había logrado entre la sociedad civil y la sociedad política en los primeros años de ejercicio del gobierno da señales peligrosas de ingresar a un escenario

para esa nación. Ni un mes después, el presidente George W. Bush dio la orden de incluir a Bolivia en la lista de países peligrosos.

no deseado. La aspiración de largo plazo de que la comunidad vaya sentando condiciones para desplazar al Estado de su carácter restringido, para dar lugar a un Estado integral o ampliado, que no es otra cosa que una superación del tipo de Estado capitalista, se va debilitando. Se empieza a transitar de una «relación de correspondencia armoniosa», de óptimo social,¹³ a una fase de «relación no armoniosa».¹⁴

Uno de los efectos de este desencuentro es la desaceleración o ralentización de los procesos revolucionarios. Estos rasgos no son propios del proceso boliviano, por lo que se hacen muy válidas reflexiones y aportes de intelectuales orgánicos de la izquierda, como Roberto Regalado, que en una visión crítica de lo que hizo la izquierda en el gobierno se pregunta si ¿alternativa o reciclaje?,¹⁵ y de la intelectual argentina cubana Isabel Rauber que lanza la interrogante de: «¿conservar logros o profundizarlos y ampliarlos?».¹⁶

El rasgo más importante de ese momento de «correspondencia no armoniosa» es el siguiente: el Estado, a través de sus principales líderes, se va convirtiendo en el actor fundamental del proceso, mientras el sujeto histórico de la revolución — plural y diverso, como diría Isabel Rauber — ingresa a un camino

¹³ Para Zavaleta, el óptimo social se produce cuando se revela una relación de correspondencia entre el poder y la sociedad. Podríamos decir cuando hablan, desde distintas posiciones, el mismo idioma.

¹⁴ Por «relación de correspondencia armoniosa» y por «relación no armoniosa» vamos a entender los encuentros y desencuentros entre el gobierno y la sociedad. En la segunda las causas pueden ser atribuidas a ambos, ya que, a pesar de compartir un mismo objetivo, los agarran distintos ritmos o se mueven en campos diferentes.

¹⁵ Roberto Regalado: *La izquierda latinoamericana en el gobierno: ¿alternativa o reciclaje?*, Ocean Sur, 2012.

¹⁶ Isabel Rauber: *Refundar la política. Desafíos para una nueva izquierda latinoamericana*, Ediciones Continente, Buenos Aires, 2017, p. 16.

que le va quitando su condición de manera progresiva, aunque no planificada. Los sectores populares van pasando del protagonismo a la pasividad y el Estado empieza a actuar como sujeto de la revolución. El sujeto histórico, en su doble condición (bloque en el poder y bloque dirigente de la sociedad), se va burocratizando, aburguesando y pierde su horizonte estratégico emancipador. Sigue siendo clase o bloque dominante, pero ha dejado de ser dirigente.¹⁷

El sujeto histórico, que siempre es el resultado histórico concreto de una situación históricamente determinada, y no «una cosa» predestinada o preexistente como lo entiende cierto marxismo, no solo no actúa al ritmo y en la profundidad que requiere los desafíos del Proceso de Cambio, sino que va retornando a sus intereses particulares de corto plazo. La lucha estratégica es desplazada por la lucha reivindicativa. Esto significa que el sujeto de la revolución, que durante años de resistencia e irrupción a la escena política fue construyendo un nuevo «sentido común» en torno a un interés y necesidad generales, abandona esa visión universal y empieza a fragmentarse y retornar a sus intereses particulares. Por tanto, deja de ser sujeto histórico. Las masas, otrora protagonistas de la historia, asumen una actitud pasiva y solo esperan la llegada de los «beneficios» de parte del Estado.

Por su parte, el Estado, siempre proclive y amenazado por el burocratismo, hace gala de su tendencia a la monopoli-

¹⁷ Gramsci sostiene que «una clase es dominante en dos formas, es decir es dirigente y dominante. Es dirigente en relación a las clases aliadas, y dominante en relación a las clases adversarias. Por ello, una clase puede (y debe) ser dirigente antes de tomar el poder. Una vez en el poder se convierte en dominante, pero continúa siendo dirigente». Ver más en: Christine Buci-Glucksmann: *Gramsci y el Estado*. Siglo XXI Editores, México, 1978, p. 83.

zación de las decisiones y se aproxima, aún sin el deseo de sus máximos conductores, a la línea divisoria entre la sociedad política y la sociedad civil propia de los gobiernos burgueses. El Estado asume el papel de actor político en todos los ámbitos de la realidad. La burocracia —aquel grupo de intelectuales encargados de la gestión pública, que en una parte más o menos considerable provenía de la burocracia del viejo Estado y, por lo tanto, educada en la concepción de las viejas clases dominantes—, vuelve a sus prácticas elitistas y excluyentes de las mayorías. Este desencuentro o «relación de correspondencia no armoniosa» alienta el resurgimiento de una subjetividad «aristocrática» en sectores que administran el Estado, olvidando que «no son las instituciones, ni los funcionarios, ni las leyes, ni los partidos políticos, los sujetos del cambio, sino los pueblos».¹⁸

La causa más importante de ese desencuentro no antagonizado entre el Estado y la sociedad es la «fetichización» del poder. Los protagonistas y forjadores de este momento de nuestra historia sienten que se ha logrado todo, que se trata de gozar de los beneficios de la conquista del poder y delegan, en los hechos, la «administración» del poder a un grupo de especialistas y profesionales del manejo de la «cosa pública». Entretanto, las autoridades del Estado, de la que no se escapan sus máximos conductores, aunque en menor medida, asumen como suyo el gran reto de «satisfacer» las necesidades crecientes de la población. Es decir, desde ambos lados —el Estado y la sociedad— se va registrando no solo una fetichización del poder en su sentido y concepción tradicionales, sino que se va abriendo una potencial fisura que es mortal para el proyecto emancipador.

¹⁸ Ibídem, p. 25.

En una anterior publicación,¹⁹ en la que hicimos una evaluación del curso que iba tomando el Proceso de Cambio en Bolivia nos preguntamos: en términos generales, ¿cuáles son las manifestaciones de este desencuentro y desaceleración respectivas, sin que ello signifique, reiteramos, la proximidad «por efecto automático» de una crisis de carácter estatal?

Una primera manifestación es la no relación entre los resultados de la gestión y el comportamiento electoral y político de la población. No hay una correspondencia entre los resultados positivos de la economía y la posición política de la población, entre los niveles de aprobación de la gestión del gobierno y la intención de voto. Esto se explica por dos razones bastante genéricas: por un lado, al priorizar tanto la gestión y convertir al Estado en el único actor del proceso, ha profundizado el descuido del trabajo político-ideológico para seguir desmontando los fundamentos de la cultura capitalista predominante todavía por su carácter planetario; por otro lado, amplios sectores de la población observan como normal lo que al principio les parecía una novedad: la capacidad de trabajo del presidente Morales y de sus colaboradores.

Una segunda manifestación es que los gobiernos no han encontrado los suficientes mecanismos para impedir que la idealizada concepción de la alternancia democrática, que es uno de los componentes de la estrategia de las oposiciones para debilitar a los gobiernos de izquierda, sea no solo refutada por no corresponder a la verdad, sino superada desde una perspectiva de ampliación de la democracia. Estos pro-

¹⁹ Hugo Moldiz: «Las revoluciones en la América Latina del siglo XXI: limitaciones, potencialidades y desafíos». En Roberto Regalado (comp.): *Los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina*, México, 2018, pp. 67-107.

cesos han surgido de otro tipo de democracias distintas a la democracia representativa. En rigor, la construcción de hegemonía y la capacidad de ser dirección sin ser todavía gobierno, y mucho menos bloque dominante, han surgido de las democracias participativa, directa y comunitaria. Y luego estas «otras» democracias, se han expresado a través de la democracia representativa.

Una tercera manifestación, es que la hegemonía política no se ha traducido en una hegemonía cultural que cambie radicalmente la concepción del mundo en los sujetos históricos y por tanto en el resto de la sociedad. Esto quiere decir que los grandes actores del Proceso de Cambio tenían plena conciencia de lo que no querían, pero no necesariamente de lo que querían, ni mucho menos tenían una adhesión consciente a un proyecto alternativo al capitalismo. Esta doble realidad: descuido del trabajo ideológico en todos los niveles y el carácter planetario del capitalismo, no solo como modo de producción sino como modelo de cultura, ha impactado negativamente en la población, sobre todo en los jóvenes.

Las máximas manifestaciones de estos quiebres parciales y que afectaron en el plano de los imaginarios al gobierno son: el enfrentamiento entre campesinos en el Norte de La Paz por el lugar de instalación de una planta procesadora de frutas en enero de 2010, la marcha de 2011 en rechazo a la construcción de una carretera para unir Cochabamba y Beni que iba a atravesar territorio indígena y el intento de nivelar el precio de los hidrocarburos en 2011.

Quizás valga la pena recordar que no es posible hablar de la historia de América Latina, sin registrar la injerencia de Estados Unidos. Sin embajador en La Paz, ese país nunca dejó de entrometerse en los asuntos internos ni de alentar con sus servi-

cios secretos operaciones de inteligencia y contrainteligencia. A diferencia del primer mandato del gobierno indígena-popular, en la que Estados Unidos y la derecha —nacional e internacional— pusieron en marcha la estrategia para el derrocamiento de Evo Morales y la reversión del Proceso de Cambio por métodos no democráticos y violentos, cuyo pico se dio en septiembre y octubre de 2008, en este periodo se lleva adelante la estrategia de desgaste para la derrota política del cambio y de su máximo conductor. Con la primera se le quería «expulsar» antes que cumpliera el mandato constitucional. Con la segunda se apostaba a que el líder indígena llegase «sin aliento» a las elecciones de 2014.

Para avanzar en esa dirección confluyeron perfectamente la campaña de deslegitimación de las elecciones judiciales de octubre —con el argumento de que el MAS quiere controlar todo el Estado— y la marcha por la defensa del TIPNIS —con el discurso de que Evo no cree en la Madre Tierra—. La marcha de un sector de los indígenas del TIPNIS, que rechazaban la construcción de una carretera que uniera Villa Tunari (Cochabamba) con San Ignacio de Moxos (Beni), fue aprovechada por la oposición interna y Estados Unidos para ir construyendo una matriz de opinión en la que colocaban a Morales como antindígena. No hay duda que insistir en ese proyecto, que finalmente no se concretó, fue un error del gobierno, pero eso no quita el espacio que encontró Estados Unidos para intentar desestabilizar. La embajada estadounidense coordinó estrechamente con una fracción de la CONAMAQ, encabezada en ese momento por Rafael Quispe, un indígena-campesino que tras su distanciamiento con Evo Morales estuvo muchas veces cerca de las formulaciones de los dirigentes de la Media Luna y de parlamentarios de Podemos en el periodo 2006-2009 y de Con-

vergencia Nacional a partir de enero de 2010. El dirigente indígena mantuvo durante esa marcha una relación estrecha con la embajada. Dentro de los actores que se oponían a la construcción de la carretera estaban los partidarios del «capitalismo verde» y de Estados Unidos a través de una influencia directa en ONG que, directa e indirectamente, estaban conectadas a los financiamientos de la USAID y de su proyecto de control regional: la Iniciativa para la Preservación de la Cuenca Andino Amazónica.

Una segunda acción de desgaste en la que participaron agencias de inteligencia de Estados Unidos es el «caso Sanabria». El 24 de febrero de 2011, una operación antidrogas montada por agentes de Estados Unidos, Chile, Paraguay y Panamá, logró la captura en el último país del general de Policía, René Sanabria, quien luego fue trasladado dos días después a Miami, Estados Unidos, donde —según se dijo— tenía una demanda abierta de hace tiempo y con orden de captura internacional.

De acuerdo a una investigación del semanario *La Época* de Bolivia, una semana antes de que se realizara el operativo de la DEA en Panamá contra Sanabria —que en el pasado fue un activo colaborador de la DEA—, Tillery participó en una reunión secreta en la embajada estadounidense en La Paz, donde también estuvo presente el señor Rodney Delano Smith, alto oficial de la CIA en Bolivia, bajo fachada de primer secretario de la misión estadounidense a cargo de asuntos regionales. En esa reunión secreta fue precisamente Delano el que —luego de evaluar la situación— propuso a la oficina central de la CIA en Virginia la pertinencia de la operación de detención de Sanabria en Panamá.

En la mencionada reunión y a sugerencia de Tillery, se acordó la participación directa del oficial DEA radicado en

Paraguay, Andy Banks, en el operativo de detención de Sanabria. Banks es un viejo compinche de Tillery. Desde 2007 hasta febrero de 2009 estuvo radicado como oficial de la DEA en Cochabamba, al igual que otros agentes se dedicó más a la labor subversiva y de espionaje contra el gobierno popular de Evo Morales que a colaborar con las autoridades bolivianas para combatir el narcotráfico.

El general Sanabria, a quien la DEA tenía como un cercano colaborador, fue convertido de la noche a la mañana en un narcotraficante por los servicios especiales estadounidenses, con el objetivo de poder presentar un supuesto testigo de este nivel, que le permitiera a Washington montar una nueva campaña difamatoria contra el gobierno boliviano, alegando la existencia de supuesta corrupción y vínculos con el narcotráfico en sus más altas esferas. Llama la atención como de forma inmediata la DEA ha colocado a Sanabria en el llamado programa de protección de testigos, prometiéndole total inmunidad (y quién sabe si una nueva cantidad de dólares), a cambio de declaraciones contra el presidente Evo Morales y otros miembros de su gobierno. De hecho, si bien el general de policía al principio se declaró inocente, todo indicaba que al acercarse una de las más decisivas audiencias, en junio de 2011, se iba a declarar culpable como parte de la estrategia formulada. Y así sucedió.

El objetivo estadounidense de desgastar al gobierno de Morales por la vía de construir una matriz de opinión de ser permisible con el narcotráfico continuó. Otra investigación de *La Época* dio cuenta del ingreso clandestino de dos agentes de la DEA, Salvador Leyva y Edgar Fernando Fritz, que en mayo de 2013 ingresaron a territorio boliviano, como turistas, para ejecutar una operación secreta, con la fachada de un curso antidrogas organizada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narco-

tráfico (FELCN) y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos (NAS), para involucrar al viceministro Felipe Cáceres en actividades de narcotráfico y golpear políticamente al presidente Evo Morales.

Hasta ahora no es posible saber el grado de relación con una decisión tomada en la Casa Blanca pero, a escasas 24 horas de la publicación de un artículo²⁰ que puso al descubierto el operativo encubierto por este mismo medio, la embajada de Estados Unidos en La Paz anunció el retiro de la NAS, luego de cerca de tres décadas de presencia. Los dos agentes de la DEA —una agencia que fue expulsada de Bolivia por el presidente Evo Morales en 2008, acusada de hacer espionaje político antes que cumplir con su misión—, arribaron a Bolivia el 11 de mayo, a las 21:56 horas, en un vuelo comercial de la línea Copa CM 125, procedente de la ciudad de Panamá, y salieron rápidamente, antes de lo previsto, el sábado 18 de mayo, en el vuelo CM 245 de la misma línea aérea, con destino a Panamá.

El descubrimiento del operativo encubierto ha provocado gran revuelo en Washington y en la embajada norteamericana en La Paz, y hasta ha evidenciado serias contradicciones y conflictos de competencias entre las agencias CIA, DEA y NAS.

El objetivo real de la misión de los dos agentes encubiertos era aportar con su experiencia de largos años en actividades de espionaje a la fabricación de elementos materiales de prueba contra el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, por actividades de narcotráfico, en el marco de un plan más amplio para dañar la imagen del presidente Evo, quien a pesar del asedio permanente, dentro y fuera de su país, expresaba un liderazgo que contaba con el respaldo de la mayor parte de la

²⁰ La CIA y la DEA llevan adelante una nueva conspiración contra Bolivia. Ver más en: <http://www.la-epoca.com.bo/index.php?opt=front&mod=detalle&id=2523>

población. En el operativo participaron dos oscuros personajes que bajo la fachada de hombres de negocios radicados en la ciudad de Santa Cruz, venían realizando su labor encubierta como agentes de la CIA y la DEA desde hacía varios años. Se trataba de los norteamericanos David Wayne Paiz y Bert Davi Castorino. El primero era un viejo agente de la CIA y la DEA, quien, por orientación de estas agencias, se radicó en Bolivia varios años atrás, luego de contraer matrimonio con una joven boliviana y obtener ciudadanía de este país.

La historia de la intromisión estadounidense en asuntos bolivianos no cesó. Otras acciones se llevaron adelante entre diciembre de 2015 y febrero de 2016. La conducción de la embajada de Estados Unidos fue asumida, en su condición de encargado de negocios, por Larry Memmott quien, a pesar de priorizar la línea política, tuvo que cargar varias veces con las huellas dejadas por la CIA en operaciones realizadas contra el gobierno de Morales. Al diplomático tampoco le fue bien; junto a su segundo hombre, Mitchel Ferguson, tuvo no más de diez días para abandonar el país. No fue Evo quien lo expulsó, sino el Departamento de Estado que se lo llevó sorpresivamente.

Entre Memmott y Peter Brennan hubo pocos meses de transición a cargo de otro encargado de negocios, Aruna Amirthanayagam, cuya tarea única y fundamental fue «limpiar la casa», para garantizar una actuación predominante de las agencias para la subversión y la inteligencia. Fue necesario apenas dos meses para cumplir esa tarea.

En la gestión Brennan dentro del periodo de la ralentización, hay dos grandes acciones abiertas y encubiertas contra el Proceso de Cambio y el presidente Morales.

La primera, la participación de Brennan en el caso Zapata. Frente al proyecto gubernamental de modificar vía referén-

dum el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, para habilitar el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera, para las elecciones de 2019, una conspiración político-mediática activada por Estados Unidos a través de Carlos Valverde —exdirector nacional de inteligencia del gobierno de Paz Zamora (1989-1993) y una fuente de consulta permanente para Estados Unidos, según lo confirman los wikileaks—, logró romper el vínculo emocional de un porcentaje de la población que hasta ese momento siempre había votado por Morales (2005, 2009 y 2014). El presidente boliviano denunció el día y la hora en que el encargado de negocios Peter Brennan y Carlos Valverde se habían reunido en Santa Cruz para afinar el plan que ponía en duda la autoridad moral del máximo conductor de la Revolución Boliviana. Varios errores cometidos en el afán de aclarar la denuncia —que finalmente resultó siendo falsa—, contribuyeron a la confusión y facilitaron el revés electoral para el oficialismo. Varios técnicos en informática llegaron desde Estados Unidos para formar parte de la operación.

Segunda, una acción permanente y típica de subversión encubierta en algo que, a simple vista no desvela nada: la llamada «diplomacia de pueblo a pueblo», como dijo Brennan en su discurso al celebrar la independencia de Estados Unidos. Con este método se ha llegado a comunidades de la provincia Omasuyos, particularmente Achacachi, y de Los Yungas de La Paz, donde «extrañamente» han brotado voces contra las políticas públicas del gobierno. De ahí que no sea una casualidad la buena relación entre la embajada estadounidense con algunos dirigentes cocaleros de Los Yungas.

Ocaso del gobierno y el golpe de Estado

El tercer periodo del Proceso de Cambio (2016-2019) se caracteriza por el ocaso del gobierno y el golpe de Estado. En este momento se acentúa la separación, aunque no al grado de ruptura, entre el Estado y la base social que hizo posible la Revolución Boliviana. El primero se ha convertido en el único actor de la política y el sujeto histórico del proceso ha devenido en actor pasivo y no pocas veces alienado. Es más, podríamos decir que no hay sujeto y si existe todavía ya no es hegemónico en el bloque en el poder. Por si fuera insuficiente, el buen comportamiento de la economía, que ubica a Bolivia por cinco años consecutivos en el país de mayor crecimiento en Sudamérica y el segundo en la región, no amortigua en grado suficiente el surgimiento y desarrollo de una línea de creciente cuestionamiento al gobierno y al liderazgo de Evo Morales, a partir de poner en duda su carácter democrático y la calidad de la gestión.

Aunque se ha tratado de explicar este dato de la realidad, a manera de justificar el excesivo protagonismo del Estado en desmedro de la base social del Proceso de Cambio, con el argumento de que en los sectores sociales se acentuó el retorno a sus intereses particulares de corto plazo y el consiguiente abandono de los intereses comunes de largo plazo, lo cual es cierto, y si bien en los países de la periferia el Estado juega un papel unificador de la sociedad,²¹ mayor del que desempeña en los países

²¹ René Zavaleta a propósito del papel del Estado en América Latina sostenía: «Está a la vista que es arbitrario sostener que todo momento estatal es reaccionario tanto como suponer que toda determinación popular es progresista. Por el contrario, en determinadas instancias la única forma de unidad de lo popular es lo estatal». René Zavaleta: «El Estado en América Latina», *Obra completa*, tomo I, Plural Editores, La Paz, 2011, p. 621.

del capitalismo central, lo que no se incorpora al análisis es el reconocimiento de que los efectos perversos de esa práctica en el desarrollo de cualquier proyecto revolucionario y que sobre esa situación se va montando una pequeña burguesía que en sus fracciones mayoritarias no precisamente se orientan a la edificación de una sociedad poscapitalista, sobre todo cuando el polo contrario a ese paradigma se va rearticulando y fortaleciendo.

Que el Estado se convierta en el sujeto del cambio no es algo que deba criticarse en sí mismo. Pero lo que llama la atención son las formas en que se releva ese papel: por un lado, el predominio de la lógica de gestión gubernamental por encima de todo y, por otro, pero complementario, es que esa tarea, que es parte de la responsabilidad estatal, está llevada adelante por la pequeña burguesía, decadente y emergente, que desde sus fracciones más conservadoras en los hechos se ha convertido en la mantenedora²² del aparato estatal, con afectación de intelectuales y profesionales de origen indígena, campesino, obrero y popular, y con clara posición política de izquierda.

La influencia negativa de esa masa indeterminada²³ en el desarrollo de la Revolución Boliviana se tradujo en dos grandes

²² Es la clase o fracción de la que se recluta el personal político, burocrático y técnico para hacer las tareas del Estado. Ver más en Nicos Poulantzas: *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista*, Siglo XXI Editores, 23 edición, México, 1986, p. 324.

²³ Zavaleta denominó así a la pequeña burguesía al momento de evaluar su papel en la revolución de 1952. Sostiene que «las capas medias, en cambio, hacen un grupo que, por su indeterminación, se parece al campesinado pero que, a diferencia de él, proporciona un gran número de individualidades. Mientras el campesinado resiste y se mueve como multitud, el proletariado actúa en cuanto clase y el hombre de las capas medias vive socialmente como un individuo». René Zavaleta: «El desarrollo de la conciencia nacional», *Obra completa*, tomo I, Plural Editores, La Paz, 2011, p. 153.

terrenos: el primero, en el político, pues sus posiciones ambivalentes y de temor ante el crecimiento del bloque opositor la condujo a incidir en el gabinete de Morales en la definición de temas de política interna e internacional que hasta antes de 2016 no estaban en duda. En lo interno, a una mayor subestimación de las organizaciones sociales en la toma de decisiones, y en lo externo a sugerir cierta distancia de los gobiernos de Cuba y Venezuela, sobre todo del último, para no irritar a Estados Unidos y, por tanto, evitar sus efectos adversos en Bolivia. También, resultado de una combinación del discurso marketinero de que el 33% de la población anteriormente pobre ha pasado a ser parte de la clase media entre 2006 y 2018, lo que implica pasar de 3.3 a un total de 7 millones de personas, y otro discurso ideológicamente ajeno a la tradición de la izquierda que apuesta por la emancipación, lejos de ser un factor de «empoderamiento» de los trabajadores, más bien jugó un rol desestructurante en lo político e ideológico.

La influencia creciente de la pequeña burguesía en el gobierno impactó negativamente en la práctica política de la dirigencia de las organizaciones sociales, quienes «clasemedianizaron» su teoría y práctica. Es evidente que no por acceder a mayores ingresos y servicios, los trabajadores, de la ciudad y el área rural, han dejado de ser tales, ni mucho menos se ha modificado la relación capital/trabajo que explica el funcionamiento de la formación social con predominio del modo de producción capitalista. Pero, en el mundo del capitalismo, a todos les cae bien este tipo de discursos.

El sello pequeño burgués también impactó en el terreno de la gestión. Como consecuencia de sus posiciones aspiracionales, que son más espejismos que otra cosa, los planes de desarrollo y las obras se fueron bañando con el «sentido común» de que

Bolivia podía ser, en unos años, el país moderno²⁴ que se quería y que las desplazadas clases dominantes no pudieron lograr. Así un proceso de «blanqueamiento» del Estado y sus operadores era inevitable, dejando para la retórica, si es que había espacio para eso, la propuesta del Socialismo Comunitario o del paradigma del Vivir Bien.

Los efectos de esta notoria «clasemedianización» del gobierno empezaron a jugar en contra. En las movilizaciones del MAS se hacía más que notoria la presencia de funcionarios públicos, una gran parte de ellos provenientes de la burocracia que acompañó a los gobiernos neoliberales y que luego se acomodó al gobierno de turno para transmitirle su experiencia en la gestión. Las organizaciones sociales estaban ausentes en gran medida, lo que sumado a la inexistencia de la lógica de partido o estructura política agravaba la situación, ya sea en la perspectiva, siempre presente, de profundizar la Revolución o de defenderla, como se evidenció en las semanas que precedieron a la consumación del golpe de Estado. Lo grave no fue la incorporación de la indeterminada clase media²⁵ al Proceso de Cambio, sino que el bloque indígena, campesino, obrero y popular perdiera su condición hegemónica, como ocurrió tempranamente en la Revolución de 1952.

²⁴ En su informe del 6 de agosto de 2007 ante el todavía Congreso Nacional, un año y medio después de asumir la presidencia, Evo Morales decía que en diez años, es decir, el 2017, Bolivia sería la Suiza de América Latina.

²⁵ «Clase media significa negativamente no-pueblo, es decir, no obreros y campesinos; significa positivamente las capas intelectuales, los profesionales, los empleados». Antonio Gramsci: *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*, Nueva Visión, Buenos Aires, 2003, p. 178.

Sobre la base de las limitaciones en las que había ingresado el Proceso de Cambio, más que por desgaste natural por el desplazamiento del umbral con el que surgió (de la izquierda o nacional-comunitario-popular hacia el centro), por las contradicciones dentro del bloque en el poder y debido a que nunca se aceptó la presencia de un presidente indígena y lo que él representaba (a los vilipendiados, como gusta decir Evo Morales), Estados Unidos y los sectores más conservadores van montando toda una estrategia de desestabilización, nacional e internacional, que finalmente resulta exitosa en octubre-noviembre de 2019.



CONTEXTO LATINOAMERICANO

Una revista de Ocean Sur

www.contextolatinoamericano.com

 **ContextoLatinoamericano**

La versión digital de Contexto Latinoamericano actualiza semanalmente cada una de sus espacios dedicados a la actualidad, la opinión y el debate, al tiempo que ofrece una síntesis diaria del acontecer noticioso en América Latina y el Caribe.

PROYECTO EDITORIAL CHE GUEVARA

www.cheguevaralibros.com

 **LibrosCheGuevara**

Los títulos publicados en español e inglés propician el conocimiento de la vida, el pensamiento y el legado del Che a través de un ordenamiento temático por medio del cual se accede íntegramente a sus múltiples facetas.



La desestabilización y la ofensiva contra Evo

La estrategia de desestabilización del Proceso de Cambio y de la continuidad del presidente Evo Morales se articuló entre actores externos e internos, con la inocultable e injerencista dirección de Estados Unidos y en el contexto de una ofensiva general contra los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina, así como contra los movimientos sociales, sindicales y políticos que resisten las políticas neoliberales y las violaciones de la soberanía nacional en varios países de la región.

La intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos del área forma parte de la historia larga de América Latina, considerada acertadamente por varios estudiosos de la geopolítica como la zona de retaguardia del imperialismo y que adquiere en el actual momento un valor estratégico por razones de acceso a los recursos naturales y por el papel que puede desempeñar, en función de la relaciones de fuerza que se construyan en la región, en la resolución de la actual fase de transición hegemónica mundial. No es lo mismo, para el porvenir de Estados Unidos, gobiernos que tengan autonomía, relativa o absoluta, respecto de sus estrategias globales, que gobiernos con políticas exteriores abiertamente subordinadas a sus intereses.

Bolivia, hay que decirlo, no podía ser la excepción. La historia de América Latina muestra que Estados Unidos, al amparo de la doctrina Monroe, nunca dejó de intervenir en la región y que incluso gobiernos de tímida orientación reformista han

sido víctimas de sus estrategias de desestabilización, como ocurrió con mayor fuerza desde la década de 1960 al influjo de la Doctrina de la Seguridad Nacional con la que se quiso impedir otras revoluciones similares a la cubana. Solo algunos ingenuos dentro del gobierno de Evo Morales pensaron que, mostrando una cara desdibujada de antimperialismo, se podría detener o al menos calmar el deseo de dar por finalizado el proceso político que, con todos sus errores, quedará registrado como el más profundo de este país.

Como hemos probado a lo largo de todo el texto, Estados Unidos nunca ha dejado de intervenir en Bolivia. En el último periodo del gobierno de Evo Morales, dos son los encargados de negocios que, a su turno, han llevado adelante la tarea de desestabilización del presidente indígena y del Proceso de Cambio: Peter Brennan y Bruce Williamson.

Brennan, que ya tuvo una activa participación en lo que hemos calificado como periodo de la ralentización (2010-2016), continuó en el camino de priorizar a las «plataformas ciudadanas» antes que a los partidos en el plan general de debilitar a Morales, para lo que aseguró el apoyo financiero de agencias estadounidenses como el Instituto Nacional Demócrata (NDI), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED). En una de sus últimas acciones públicas, antes de cumplir su misión, en julio de 2017, al festejar la independencia de su país y en el que curiosamente no estaba ninguno de los jefes de la oposición, Brennan sostuvo:

la libertad; la libertad de prensa y expresión; un poder judicial independiente, no partidista y seleccionado mediante un proceso justo y transparente; ser libres de sufrir persecuciones; la protección de las minorías; y el carácter inaceptable

del encarcelamiento, la represión o el hostigamiento de los opositores políticos y de aquellos que no se ajustan a la línea de un partido (...) son ideales, principios, intereses comunes y valores universales en los que nosotros en Estados Unidos creemos firmemente y que, estoy seguro, también compartimos con la gran mayoría de los bolivianos.¹

Preparado el camino por Brennan, el nuevo encargado de negocios, Bruce Williamson, se dedicó a trabajar en la estructuración de un frente internacional injerencista, a través de la OEA y la CIDH, el gobierno y el Congreso de Estados Unidos, pero también la articulación de medios de comunicación y columnistas de renombre internacional. Por eso no es casual que a fines de noviembre de 2018 la Administración Trump y la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen se hubieran pronunciado en contra de la sentencia constitucional que, sobre la base de la Constitución y la Convención Americana, habilitaba a todas las autoridades electas, nacionales y subnacionales, a postularse para la reelección indefinida.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, un activo militante contra la revolución venezolana y los gobiernos de izquierda, también se pronunció contra la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). «En realidad, el artículo 23 de la Convención Americana de DD.HH. [Derechos Humanos] citado en sentencia del #TCP de #Bolivia no contempla el derecho a perpetuarse en el poder. Además, la reelección presidencial fue rechazada en referendo por voluntad popular en #21F de 2016», escribió en su cuenta de Twitter. La elaboración de un informe por parte de la Comisión de Viena a pedido de la OEA, donde se afirma que la reelección no es

¹ Ver más en: <https://m.eldiario.net/index.php?n=76&a=2017&m=11&d=09>

un derecho humano, forma parte de las condiciones en las que buscaba apoyarse la derecha boliviana para deslegitimar la postulación de Morales.

Lo que sí llamaba la atención en ese momento es que desde 2006, era la primera vez que el Departamento de Estado daba a conocer un comunicado en el que instaba a Morales a desistir de ser candidato en 2019. «El pueblo de Bolivia ha hablado claro. Estados Unidos les apoya e insta al actual gobierno de Bolivia a que respete el resultado de esos referendos», dice textualmente la Administración Trump, al afirmar que hay un «paso atrás en la democracia» boliviana. En la misma dirección se pronunciaba la congresista republicana Ros-Lehtinen, quien señaló que Estados Unidos no debe quedarse callado y que debe enviar un mensaje claro de apoyo al pueblo boliviano. La legisladora estadounidense se pronunció casi con las mismas palabras injerencistas el 7 de diciembre de 2017 y el 21 de julio de 2018.

Bruce Williamson tuvo la capacidad de juntar a «moros y cristianos» tras el objetivo de arremeter contra Evo Morales. Si bien se ha cuidado mucho de no ser descubierto «con las manos en la masa», como ocurrió con el embajador Philip Goldberg, en 2008 —por lo que fue expulsado ese año—, el alto diplomático estadounidense ha mantenido reuniones con Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Rubén Costas. Ni qué decir de la ardua actividad de funcionarios estadounidenses y bolivianos que trabajan para ese país. Desde el Departamento de Estado la relación ha sido directa con Jorge Tuto Quiroga, uno de los operadores de Estados Unidos contra las revoluciones cubana, venezolana y nicaragüense.

No hay que ser brujos para detectar que esta dura arremetida de la derecha boliviana, respaldada por Estados Unidos, formaba parte de la nueva estrategia general de deses-

tabilización que se ha desarrollado contra Evo Morales desde el 21 de febrero de 2016, cuando una inédita forma de conspiración político-mediática logró impedir que en un referéndum se diera visto bueno a la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para habilitar al líder indígena para las elecciones de 2019.

El resultado de ese referéndum — en la que tuvo una activa participación la embajada de Estados Unidos, cuyo encargado de negocios, Peter Brenann, se reunió con Carlos Valverde, quien hizo detonar el llamado «caso Zapata» semanas antes de la consulta— cargó de excesivo optimismo a la oposición. Convencidos de que Morales estaba debilitado, en las dos siguientes semanas a ese acto electoral, las demandas para que renunciara el presidente del Estado Plurinacional no cesaron, aunque estaban focalizadas en reducidos grupos de opinadores con cobertura mediática y dirigentes políticos con escasa representación.

El debate de alta intensidad sobre la legitimidad de Evo Morales después del referéndum del 21 de febrero subió de tono en septiembre de 2017 cuando un grupo de diputados y senadores del MAS presentó un Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad ante el TCP para habilitar a Evo Morales para las elecciones de 2019, sobre la base de derecho preferente establecido en la CPE y en la Convención Americana. El 28 de noviembre de ese mismo año, una sentencia constitucional dio curso favorable al recurso constitucional.

La carta empleada por el gobierno y el MAS, de otras cuatro que tenía a mano para lograr el mismo resultado (renuncia de Evo tres meses antes de las elecciones, convocatoria a dos tipos de referéndum y el llamado a una nueva Asamblea Constituyente), dejó desubicada a la oposición por unas sema-

nas, que solo atinó a volver a la queja como método de oposición. Empero, si bien la habilitación de Morales se ajustaba a la legalidad y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, donde el derecho político a participar sin restricciones es uno de ellos, la legitimidad de la medida estaba seriamente cuestionada.

De ese dato de la realidad la oposición nunca dejó de agarrarse. Luego este bloque de oposición, conformado por partidos de derecha, medios de comunicación, jerarquía católica, algunos empresarios, dirigentes cívicos y plataformas ciudadanas, dio paso a una nueva escalada de su ofensiva contra el Proceso de Cambio. Su estrategia giró en torno a cuestionar la legitimidad y legalidad de la sentencia constitucional, posicionar la matriz de que Bolivia estaba gobernada por un dictador y que las elecciones de 2019 iban a ser administradas por un Tribunal Supremo Electoral (TSE) funcional a los intereses de reproducción del régimen.

Tres son los frentes desde donde la oposición llevó adelante esta nueva fase de la estrategia anti-Evo: el internacional, el político-conspirativo interno y el mediático nacional.

En el plano internacional, el primer actor, aunque solapado a veces, fue Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, el Senado estadounidense y sus organismos de inteligencia como la CIA. Pero también figuran en el frente la OEA y otros organismos internacionales. Los dos primeros, cada uno, por separado, emitieron declaraciones en las que le pedían a Evo Morales respetar el resultado del 21 de febrero y le instaba —el primero— a no presentarse en las elecciones. En el caso de la presencia de sus organismos secretos, una nutrida presencia se instaló en Bolivia con agentes que, se estima en más de cuatro

decenas, llegaron a la Expocruz en calidad de «empresarios» y «turistas».

Emulando el papel de Estados Unidos en la situación venezolana, el 17 de enero un grupo de senadores estadounidenses hizo público su pedido a Morales para que no se presentara en las venideras elecciones. La resolución, firmada por los senadores de ambos partidos (demócratas y republicanos), Ted Cruz, Bob Menéndez y Dirck Durbin, pasó a consideración del Comité de Asuntos Exteriores del Senado norteamericano para que, una vez aprobado en esa instancia, adquiriera fuerza ejecutiva para ser trasladado al gobierno de Donald Trump. El contenido de la resolución sostenía que en Bolivia se debe respetar los límites de los mandos presidenciales y «se insta» a Morales a no ser parte de los que compitan en las elecciones. El senador Cruz sostuvo, en un comunicado adicional, que Bolivia se encamina en una dirección muy peligrosa, aliándose a regímenes ilegales e ilegítimos, incluido el de Maduro en Venezuela. La resolución, de 8 puntos, fue finalmente asumida por el Senado. En esta se pide además cumplir con el límite al periodo de mandatos establecido en la Constitución Política del Estado (una sola reelección) y no se le dé curso a la repostulación de Evo Morales.

El 10 de abril, otro grupo de parlamentarios de la oposición envía una carta² al presidente Donald Trump en la que le piden su participación para evitar la postulación de Evo Morales y defender el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016. Además de esos dos elementos, lo que se solicita es tomar

² La iniciativa provocó el rechazo del gobierno de asambleístas del oficialismo y de muchos líderes de opinión, incluso contrarios a Evo Morales, lo que obligó a Carlos Mesa y Samuel Doria Medina a manifestar su desacuerdo con la carta.

medidas políticas y diplomáticas contra miembros del gobierno boliviano, similar a las adoptadas contra venezolanos y nicaragüenses. Estamos hablando de retirarles visas y congelar sus cuentas en caso de que tuvieran en Estados Unidos. La copia de la misiva fue enviada también al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence; al secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo; al asesor en Seguridad Nacional, John Bolton, y a los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz. La carta llegó a manos de Trump a través de la participación de una consultora de nombre Dark Horse Political, una ONG conservadora que es dirigida por Cristopher Gergen y Eva Sara Landau, quienes además de esposos son los que mantienen relaciones políticas estrechas con los sectores de ultraderecha de Estados Unidos.

El presidente Evo Morales rechazó categóricamente la resolución del Senado. A través de su cuenta de Twitter sostuvo: «La resolución del Senado de EE.UU. pretende violar la soberanía de Bolivia y atenta contra el principio de no injerencia y respeto a la voluntad democrática de los pueblos, consagrado en la Carta de la ONU. El pueblo boliviano es libre y digno y rechaza toda forma de intromisión». El jefe de Estado indicó que Estados Unidos «no tiene moral para hablar de respeto a los derechos humanos», y cuestionó que, ahora, su Senado hable de respeto a la democracia. «Si están preocupados, los invitamos a presenciar las elecciones en octubre. El pueblo boliviano les puede enseñar cómo toma decisiones con dignidad y soberanía».

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una resolución en la que se señala: «Bolivia, como miembro pleno de la Organización de Estados Americanos, en ejercicio de su soberanía

nía y su dignidad, no acepta ni aceptará ningún acto de intromisión de países extranjeros en sus asuntos internos».

El segundo actor internacional, decisivo en el desenlace de noviembre, fue la OEA. Y hay que decirlo, el gobierno de Morales, inducido por colaboradores que tienen una lectura infantil de las relaciones internacionales y una gran ignorancia de la historia de Estados Unidos y la OEA en América Latina, pecó de una ingenuidad muy grande. Con una sobreestimación del liderazgo de Evo Morales en el plano internacional y los acercamientos que se lograron con el secretario general, Luis Almagro, de parte de algunos de sus colaboradores, se pensó que se tenía neutralizada cualquier acción injerencista de ese organismo regional. Es más, a Almagro se le bautizó como «hermano»³ en su visita a Bolivia, donde afirmó que no había ninguna razón para impedir la participación del presidente indígena en las elecciones, ya fijadas en ese momento para el 20 de octubre.

Pero las equivocaciones no terminaron en el coqueteo con Almagro. El gobierno firmó un convenio para que se enviara una Misión de Observación Electoral, que dio la primera bofetada en el informe que presentó pocos días después de las elecciones generales, y luego le pidió que enviara una misión para hacer una auditoría técnica del resultado electoral, con efecto vinculante, que finalmente fue el motivo, pero no la causa, del golpe de Estado. Sin presentar ninguna prueba hasta el día de hoy, esa misión de observadores electorales y el equipo de auditores electorales solo jugaron el papel de «gatilladores» de la

³ El presidente Evo Morales y el embajador de Bolivia ante la OEA, José Alberto Gonzales, llamaron «hermano» al secretario General de la OEA, Luis Almagro, al anunciar su visita el 17 de mayo de 2019. Ver más en: http://www.la-razon.com/nacional/Visita-luis-almagro-oea-bolivia-17-mayo-evo-morales_0_3144285543.html

movilización social urbana contra la continuidad de Morales y de legitimadores del amotinamiento policial, de la intervención militar y de la violencia con la que actuaron grupos de paramilitares en contra de autoridades y dirigentes del MAS y la izquierda.

El tercer actor lo conformaban Colombia y Brasil, dos países que forman parte de los aliados incondicionales de Estados Unidos en la región. El primero desempeña un papel geopolítico estratégico para Estados Unidos desde hace décadas y ha sido, por eso mismo, pieza clave para el desarrollo de la estrategia multidimensional contra la Revolución Bolivariana de Venezuela, así como país «tapón» para evitar la influencia regional de Brasil en los años gobernados por Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Una vez derrocada Rousseff, a través de una de las modalidades de los «golpes de nuevo tipo», encarcelado Lula y posesionado Jair Bolsonaro como presidente de ese país, la estrategia de Estados Unidos para Bolivia contaba con dos operadores de primer nivel.

El 2 de mayo, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó que en un encuentro con el canciller del Brasil, Ernesto Araujo, se concretó el envío de una carta del gobierno de Bolsonaro a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con el objetivo de consultar a sus magistrados si la reelección indefinida es un derecho humano, tal como establece la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilita a Evo Morales para las elecciones del 20 de octubre. El primer paso en la misma dirección se dio en Colombia cuando el expresidente Jorge Tuto Quiroga y el líder cívico le pidieron al expresidente colombiano Andrés Pastrana aceptar ser «embajador del 21 de febrero». El exmandatario colombiano aceptó la designación y se compro-

metió a que el presidente Iván Duque también se sumara a la iniciativa.

El cuarto grupo lo constituyeron organismos privados de derechos humanos con vínculos con la derecha continental, analistas y medios de comunicación internacional. Entre los más importantes, conocidos por sus posiciones contra los gobiernos de izquierda están, la Human Rights Watch, IDEA Internacional para América Latina y el Caribe,⁴ el Centro de Estudios para América Latina (CASLA, Institute),⁵ y periodistas como Andrés Oppenheimer y Jaime Bayly.

En el orden interno, no obstante, no se concretó la visión común de organizarse y apuntar juntos los misiles contra Morales; la derecha nunca pudo superar su división, y la competencia entre las plataformas ciudadanas reproducía el mismo malestar. Esta fragmentación se hizo evidente aún antes de que se promulgara la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y se acentuó apenas se lanzó la convocatoria a las elecciones primarias para enero de 2019. El resultado, ocho partidos de oposición registraron sus candidatos para las primarias.

⁴ El 8 de diciembre de 2018, el Foro no Gubernamental Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) emitió un pronunciamiento firmado por 20 expresidentes que pide a la OEA y a la Unión Europea tomar medidas contra el gobierno boliviano por la ruptura del orden democrático. Los expresidentes, entre los que figuran Felipe González de España, Oscar Arias de Costa Rica, Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, sostienen en su pronunciamiento: «Instamos, respetuosamente a los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE), a mantenerse vigilantes y disponer de medidas preventivas y efectivas necesarias y apropiadas a la ruptura del orden constitucional y democrático ocurrido en Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales».

⁵ Con sede en República Checa y con clara orientación conservadora.

Lo que sí, en el plano interno, las protestas de las plataformas devenían en violencia contra militantes del MAS o contra sedes del Tribunal Supremo Electoral en La Paz y Santa Cruz. La primera, fue el 10 de junio, una marcha acordada en la ciudad de Santa Cruz a fines de mayo a iniciativa del Comité Pro Santa Cruz, se desarrolló en la ciudad de La Paz. Dirigentes cívicos, políticos y activistas de plataformas ciudadanas se concentraron en la ciudad de El Alto y de ahí descendieron hasta la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ubicado en la plaza Abaroa de la residencial zona de Sopocachi. La principal consigna y objetivo político de los opositores fue el pedido de «inmediata» renuncia de todos los vocales del órgano electoral, quienes habrían perdido total credibilidad para administrar las elecciones de octubre. La marcha contó con la presencia de los candidatos Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC), Oscar Ortiz de Bolivia Dice No, Víctor Hugo Cárdenas de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Virgilio Lema del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), además de otros candidatos a vicepresidente de esas organizaciones políticas. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue el encargado de entregar una carta al TSE por el que se pedía la dimisión de los vocales.

La segunda acción conjunta de la oposición fue el paro de 24 horas que se hizo en el departamento de Santa Cruz el 9 de julio de 2019 y que contó con la adhesión política de los otros departamentos en los que cívicos, activistas y organizaciones de derecha pensaban llevar adelante una medida similar en las próximas semanas. El paro convocado por el Comité Pro Santa Cruz fue acatado disciplinadamente por la mayor parte de las organizaciones cívicas de ese departamento, principalmente de la ciudad, aunque organizaciones sindicales como

la Central Obrera Departamental (COD) no se plegaron a la medida. De nuevo, la acción permitió juntar en un mismo escenario a los candidatos Carlos Mesa, Oscar Ortiz y Víctor Hugo Cárdenas.

El tercer frente es el mediático. Si bien no existe nada que pueda probar sobre la existencia de un mecanismo de coordinación a nivel de medios de comunicación, es evidente que medios y periodistas claramente opositores, además de columnistas y analistas, coincidían en golpear al presidente Evo Morales con el tema del 21F, la corrupción y el narcotráfico. La Guerra de Cuarta Generación está orientada a la disputa de sentidos a partir de una determinada aprehensión de la realidad objetiva, para subjetivamente desestructurarla, y luego armar otra realidad, radicalmente diferente, para que los sentidos la capten y la sientan como verdad. La mente como campo de batalla.

De hecho, en los casi 14 años de mandato del presidente Morales, medios de comunicación, nacionales e internacionales; periodistas y analistas, bolivianos y extranjeros alineados a Estados Unidos, y activistas en las redes sociales, han montado al menos seis matrices de opinión, sistemáticamente construidas: «Evo dictador», «Evo enemigo de los indígenas», «Evo, enemigo de la Madre Tierra», «Evo, permisible con las actividades del narcotráfico», «Evo, amigo de los gobiernos terroristas» y «Evo, totalitario y autoritario».

La recta final, en dos tiempos

Después de más de dos años desarrollando la estrategia de desestabilización del gobierno de Evo Morales, pero sin haber impedido que el presidente indígena se presentara para participar en las elecciones de octubre de 2019, ni aguantar su enojo

por el resultado de todas las encuestas de intención de voto que mostraban al candidato del MAS en primer lugar, el bloque opositor ajustó el plan para evitar, por todos los medios posibles, la continuidad del Proceso de Cambio.

Mientras esa tendencia se profundizaba, dejando mal parado al exvicepresidente del gonismo y presidente de octubre de 2003 a junio de 2005, Carlos Mesa, un desastre natural, provocado o no, afectó el crecimiento electoral del candidato oficialista y eventualmente lo hizo retroceder unos puntos. Los incendios en la Chiquitanía le dieron a la oposición una forma efectiva para sensibilizar a sectores de la población y crear la imagen distorsionada de que Evo Morales es el mayor depredador de la historia de Bolivia. El bloque opositor aprovechaba el tema de los incendios para generar una plataforma de conflictos, como los protagonizados por el Comité Pro Santa Cruz —que en su cabildo del 4 de octubre levantó las banderas del federalismo y de la desobediencia civil si Evo Morales triunfaba producto de un supuesto fraude electoral—, por el Colegio Médico —que se oponía al acceso de la gente a la salud con más de 30 días de paro indefinido—, por los cívicos de Potosí —que pedían mayor regalía por la explotación del litio, a pesar de que recién se estaban organizando los pasos iniciales de esta histórica reivindicación—, por un sector de los indígenas de las tierras bajas —que en una marcha hacia La Paz demandaba que se levante el decreto de ampliación de la frontera agrícola—, y por un sector de los cocaleros de Los Yungas de La Paz, que cuestionaban la Ley General de la Coca.

El inicio y la propagación del fuego con alta intensidad en la Chiquitanía⁶ le cayó a la oposición como anillo al dedo. Con cierta habilidad se ha montado en el hecho y, mientras sus fracciones más democráticas guardan silencio cómplice frente al accionar de esos grupos incendiarios, lo que hizo es colocar a «expertos» medioambientalistas para instalar la idea de que Bolivia nunca había tenido en su historia un gobierno tan depredador de la naturaleza como el de Evo Morales. Los esfuerzos por posicionar esa matriz de opinión en el imaginario colectivo urbano —muy sensible ante temas medioambientalistas independientemente de su inclinación política—, partieron de la realidad política de que el gobierno de Evo Morales llegó al gobierno con la propuesta paradigmática de lograr un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, pero que fue —y ahí entra la construcción ideológica y mediática de otra realidad por parte de los ideólogos y operadores de la derecha—, el que más medidas adoptó para ampliar la frontera agrícola y la «quema controlada» a costa de afectar parques naturales y áreas forestales en general.

La derecha desplegó estos años un ejército en función de la naturaleza del combate. Para su «cara verde» contaba con «activistas medioambientalistas» como, por ejemplo, Jhanisse Vaca Daza, una joven cruceña que cursó estudios en Estados Unidos, recibió capacitación en instituciones estadounidenses donde estuvieron otros jóvenes que tienen una activa participación en la desestabilización de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. La «activista», que tuvo asesoramiento directo de cuatro personas enviadas por la USAID durante dos semanas a

⁶ La Chiquitanía es una zona de tránsito entre el Chaco y la Amazonía boliviana, y soportó más de siete mil focos de incendio entre agosto y septiembre de 2019.

Bolivia, empleaba el hashtag #SOSBolivia para generar comentarios de los opositores bolivianos y de no pocos activistas de izquierda en el mundo. Esta misma activista de Estados Unidos en Bolivia fue una de las promotoras de la llamada «resistencia pasiva» al gobierno de Evo después de las elecciones del 20 de octubre y todos sabemos lo violenta que fue. Lo perverso de este discurso — más por las redes sociales, pero también por los medios de comunicación — es que manipula la subjetividad de la gente para atribuirle al gobierno su directa responsabilidad en la quema de extensas zonas forestales de la Chiquitania con el solo objetivo de «entregar» esas tierras a campesinos cocaleros y comunidades interculturales (antes conocidas como colonos) que quieren, según ese relato, cambiar la vocación del uso del suelo. Poco ha servido que Morales decretara «pausa ecológica» en esa región, lo que implica la prohibición total de asentamientos humanos y/o emprendimiento de actividades agrícolas. La derecha sigue usando los incendios en esa región para descalificar al gobierno indígena.

Pues bien, la estrategia general para desestabilizar a Evo Morales ingresaba en su recta final y esa ofensiva tenía dos tiempos: antes y después de las elecciones del 20 de octubre.

En la etapa previa a las elecciones, el objetivo seguía siendo impedir que Evo Morales fuese reelecto en primera vuelta (ya que una segunda vuelta le sería mucho más difícil). El eje central de la conspiración, al margen de seguir potenciando todo conflicto que fuera posible activar, giraba en torno a la matriz del fraude electoral y le desobediencia civil como respuesta. Desde el punto de vista electoral, Comunidad Ciudadana (CC) de Mesa logró concentrar una parte del voto contrario a Morales con el concepto de «voto útil» y ciertamente le dio

resultado, aunque no el suficiente, como para ganar a Evo en primera vuelta.

En la etapa posterior a las elecciones, con un Evo Morales que se había ubicado en primer lugar, para los sectores duros de la oposición no había margen a la duda. En la noche del 20 de octubre, luego de una jornada tranquila, la segunda parte de la desestabilización fue activada por los distintos actores de la oposición, quienes rechazaron el anuncio de Evo Morales de que el pueblo había triunfado por cuarta vez consecutiva. Minutos antes, Mesa, en conferencia de prensa, le aseguraba al país que se había logrado una victoria: ir a una segunda vuelta.

Un «grueso error» del Tribunal Supremo Electoral activó la bomba que se tenía preparada. El TSE emitió, a las 20 horas, un primer boletín, con el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en el que al 83% Evo Morales se colocaba en primer lugar con un 45,7% y Carlos Mesa con 37,8%. Por tanto, la segunda vuelta era una gran posibilidad pues no había más de 10% de diferencia entre el primero y segundo, como establece la Constitución, para ganar en primera vuelta. Sin embargo, restaba computar por el TREP un 17% de la votación. El TSE no cumple con su anuncio de dar a conocer un segundo boletín a las 22 horas e interrumpe el TREP con el argumento de que ya había empezado el cómputo oficial en los tribunales departamentales. La gran duda que el TSE instaló en la población al interrumpir el TREP y la temprana salida de Morales para anunciar su victoria, desencadenaron una generalizada protesta en la oposición, que tuvo la gran habilidad de arrastrar y sacar a las capas urbanas a las calles con movilizaciones, asedios permanentes al Palacio en La Paz y bloqueos contundentes en varios capitales de departamento. La matriz

del fraude se apoderó de un alto porcentaje de la población y con eso se dio pie a la propuesta de la desobediencia civil y el pedido de nuevas elecciones.

Las protestas de las capas urbanas opositoras empiezan a tomar forma. El viernes 1ro. de noviembre se llevan adelante cabildos en las ciudades capital. En todas se pide la renuncia de Evo Morales, anular las elecciones y cambiar a todo el Tribunal Supremo Electoral. De todos los cabildos, el más importante se registra en Santa Cruz, donde el presidente del ente cívico, Luis Fernando Camacho, sostiene que Evo Morales tiene 48 horas para renunciar. El lunes, con un tono de espectacularidad, el líder opositor, en otro cabildo en la capital cruceña, anuncia que se trasladará a la ciudad de La Paz, con una carta de dimisión que el presidente indígena solo debe firmarla. Estas son las palabras de la breve, pero contundente y reveladora intervención en la masiva concentración:

Hemos decidido hacer que usted cumpla su palabra y renuncie. Sobre la base de todo lo anterior, adjunto a la presente (misiva) el borrador de su carta de renuncia, así usted ni siquiera tendrá que redactarla.

Usted tuvo la oportunidad de renunciar cuando era el primer servidor público de la nación. Ahora su renuncia será sin Estado que gobernar.

Están de acuerdo con paralizar desde las 00:00 horas de mañana, todas las instituciones estatales y fronteras de Bolivia de manera pacífica, pero firme y comprometida con la única salvedad de dejar expeditos nuestros aeropuertos internacionales, servicios básicos y emergencias médicas.⁷

⁷ Ver artículo completo en: <https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/4/camacho-llegara-la-paz-con-carta-de-renuncia-de-evo-morales-236385.html>

La violencia se va apoderando de Bolivia. Camacho —que de lejos ya había desplazado a los políticos tradicionales, y prácticamente colocado fuera de escena a Carlos Mesa— no puede ingresar a La Paz debido a un cerco masivo de leales al Proceso de Cambio y retorna a Santa Cruz, pero solo sería por un par de días. El miércoles 6, anuncia que se iba a trasladar de nuevo a la sede de gobierno con la carta de renuncia de Evo Morales. Pero, lo que deja sorprendido a todos y el gobierno no atina a responder es que asegura que los policías y militares estarían del lado del pueblo. La Policía Nacional se amotina desde el jueves 7 en Cochabamba, Santa Cruz y Potosí. El sábado 8 se suma La Paz y no hay fuerza pública que proteja al Palacio de Gobierno. Las horas del gobierno de los movimientos sociales están contadas. En la tarde del domingo 10, las Fuerzas Armadas, a la cabeza de su comandante general Williams Kaliman, emiten un comunicado público en el que piden la renuncia de Evo Morales. El texto es por lo demás sugerente:

Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunican a la opinión pública que ante la escalada de conflictos que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad del artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizadados deponer las actitudes de

violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor y luto a nuestras familias.⁸

La posición de las Fuerzas Armadas no representaba ninguna improvisación. La pasividad con que reaccionó el alto mando militar ante el movimiento impune de los grupos paramilitares que azolaban las principales ciudades del país, tenía una explicación: la «no intervención» para defender la paz y la estabilidad de la que habla su comunicado es la forma de allanar los planes golpistas. Esto sería luego corroborado el 28 de diciembre cuando, reunido ante un grupo de sus seguidores, Luis Fernando Camacho hizo importantes revelaciones:

Fue mi padre quien cerró con los militares para que no salgan (a reprimir); fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos, a coordinar todo, fue Fernando López, actual ministro de Defensa. Es por eso que él está de ministro de Defensa, para cumplirles los compromisos.

La Policía de la misma manera. Fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir fue que dimos las 48 horas, pedimos las 48 horas porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a La Paz, era ahí el problema (...). Yo creo que fue el momento más duro de los que pasamos.⁹

⁸ La lectura del comunicado la hizo el comandante de las Fuerzas Armadas bolivianas, Williams Kalliman, quien nunca perdía la oportunidad para mostrar en público su incondicionalidad al presidente Evo Morales, un comportamiento más o menos frecuente. El error, haberle creído.

⁹ Ver más en: http://www.la-razon.com/nacional/camacho-padre-policias-militares-video-evo-golpe-arreglo_0_3284071576.html

El presidente indígena dimite ese mismo día tras conocerse el informe preliminar de la auditoría de la OEA en la que establece profundas irregularidades en el acto electoral. Si bien el informe no habla de fraude, dada la sensibilidad de la coyuntura, es la gota de agua que rebalsa el vaso de agua. Está claro que a Morales se le había agotado el tiempo político. Como señala acertadamente Boaventura de Sousa,

tenemos entonces un primer momento en que los golpistas se aprovecharon de la legítima movilización ciudadana en democracia para fomentar la violencia (como la quema de cinco tribunales electorales departamentales); un momento explícitamente golpista, de interrupción forzada del mandato presidencial, por obra de agentes externos (Estados Unidos a través de la OEA de Almagro) y de actores internos (operadores cívico-políticos, Policía, Fuerzas Armadas, élites locales).¹⁰

Lo que sí llama la atención es que ese informe, filtrado a la prensa el sábado 9, no fue presentado ante el Consejo Permanente de la OEA el martes 12 o miércoles 13. El informe final se conoció en la primera semana de diciembre, pero todavía no considerado oficialmente por ese organismo regional. Es decir, el informe fue filtrado dos tres días después del plazo establecido por la OEA, que tampoco fue cumplido.

El lunes 11 y en gran parte del 12, no hay gobierno civil pues tras la renuncia de Evo Morales, la Asamblea Legislativa Plurinacional no se reúne para garantizar la línea de sucesión establecida por la Constitución. El 11 de noviembre, grupos civiles

¹⁰ Boaventura de Sousa Santos presenta un primer balance del proceso boliviano con el título «Evo Morales: el indio fuera de lugar». p 9. El texto fue publicado en varios espacios alternativos.

organizados toman como rehén al hermano del presidente de la Cámara de Diputados para que Víctor Borda renuncie. La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, también renuncia. En esas casi 48 horas, grupos civiles organizados proceden a quemar la casa de los gobernadores de Potosí, Oruro y Chuquisaca; igualmente lo hacen con la casa del ministro de Minería, César Navarro, y saquean dos casas de Evo Morales en Cochabamba y del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en La Paz.

El 12 en la tarde, la oposición fuerza la convocatoria a sesiones en las cámaras de diputados y senadores para elegir a la presidenta de la segunda cámara y así designarla como presidenta del país. Ya Evo Morales había salido del país rumbo a México, donde fue recibido en calidad de asilado. Las sesiones se instalan, pero no se establece el *quorum* necesario. Los asambleístas del MAS, que son mayoría en ambas cámaras, no asisten. A pesar de no contar con el número de diputados y senadores suficientes para ser designada presidenta del Senado y abrir la puerta de la sucesión constitucional, la vicepresidenta segunda —no primera— del Senado, Jeanine Áñez, jura primero, como presidenta del Senado, y luego como presidenta del Estado Plurinacional. Un MAS desorientado y asambleístas confundidos por la renuncia de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, nada pueden hacer. Luego se sabría que Evo y Álvaro, otra vez en una decisión equivocada, le dijeron que también renunciaría. El golpe de Estado se ha consumado.

A propósito del golpe de Estado, la activista María Galindo, a quien no se le puede atribuir simpatía alguna por el gobierno de Evo Morales, contaba en una de sus columnas —titulada

«Janinne no cayó del cielo para salvar la democracia boliviana»¹¹ y censurada por el diario *Página Siete* —, el cómo se orquestó la designación «desde arriba» de la persona que iba a suceder al presidente indígena.

Fue en una reunión en la Universidad Católica que una vez más se mancha de sangre y vergüenza donde se reunieron: el embajador de Brasil como representante de los intereses norteamericanos y de Bolsonaro, Tuto Quiroga como representante de la CIA, Fernando Camacho como cabeza del fascismo y como dueño del proceso de derrocamiento de Evo Morales, no estoy segura pero parece ser que Carlos Mesa también estuvo allí metiendo la pata, Waldo Albarracín y seguramente alguno más pisoteando toda institucionalidad, con la bendición de la cúpula de la iglesia católica, decidiendo a puerta cerrada quien debía suceder a Evo Morales.

Necesitaban alguien funcional a todos, dispuesto a matar gente por si hubiera alguna revuelta, dispuesto a asumir el cargo con los militares en las calles, alguien que se dejara imponer gabinete de asesinos y asaltantes, necesitaban una persona manejable que funcione como trapo de piso con cuyo nombre limpiar el golpe de estado. Es ahí que suena el nombre de Janine Áñez; una senadora periférica de la derecha, que jamás había jugado papel alguno que no sea defender a sus jefes, hacer declaraciones racistas y obedecer. Tuto Quiroga la llama, le manda un avión y Áñez acepta siempre y cuando se le pague entre 200 a 300 mil dólares por el riesgo de vida que suponía asumir el cargo.

Se le paga, se le imponen los ministros y el machito de Camacho entra con ella al Palacio, llevando la Biblia en alto,

¹¹ Ver la columna completa de la radical feminista boliviana en: <https://www.lavaca.org/notas/sedicion-en-la-universidad-catolica/>

que se utiliza una vez más en la historia como instrumento de legitimación y manipulación al mismo tiempo.

Pero si de errores se trata, hay muchos de parte del gobierno de Evo Morales. La respuesta al desconocimiento del resultado electoral y la desobediencia civil en marcha tuvo tres características: primero, una táctica policial de contención y no dispersión de la protesta social urbana de clase media; segundo, no sacar a las Fuerzas Armadas por ningún motivo ni tener bajo control el alto mando; y, tercero, no movilizar a su base social dura de los movimientos sociales y solo resguardar Palacio con los militantes dentro del aparato estatal.

La naturaleza defensiva de la estrategia no dio resultados. La protesta fue en aumento. La oposición había tomado las calles y se daban señales de una peligrosa situación de ausencia de gobierno, de debilidad en el uso legítimo de la fuerza pública y de un Proceso de Cambio que no tenía masa que saliera a defenderlo en las calles. Evo Morales subestimó lo que estaba sucediendo en las calles y no tomó medidas que le hubieran colocado en otro escenario complejo pero manejable.

Es más, vistos los hechos desde la distancia, relativa todavía, se puede anotar lo siguiente: a) una tardía convocatoria al diálogo con los partidos que habían obtenido representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mesa y Ortiz la rechazaron exigiendo la segunda vuelta; b) La convocatoria al diálogo no contemplaba a los verdaderos actores de la movilización, que eran los comités cívicos y otras organizaciones aglutinadas en el Comité de Defensa de la Democracia (CONADE); y, c) un tardío anuncio de anular las elecciones, convocar a otras y cambiar a todo el Tribunal Supremo Electoral. La idea de la renuncia ya había ganado más fuerza en la opinión pública.

La represión y el no derecho

El carácter del golpe de Estado se fue haciendo más evidente en la medida que pasaban los días. La presidente de facto Jeanine Áñez, que juramentó en tres días distintos a su gabinete, públicamente asumió el compromiso de impulsar un «gobierno de transición» que iba a tener como tareas la pacificación del país, la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y convocar a elecciones generales, cuyo plazo no debería ser superior a los 120 días.

La desorientación en las propias filas de la derecha era tal que, ante la imposibilidad de seguir el hilo constitucional para la sucesión, la segunda vicepresidenta del Senado, en los hechos, terminó autoproclamándose presidenta del país.

Aquí se está ante una sucesión constitucional originada en la vacancia de la presidencia del Estado ante la ausencia definitiva del presidente y vicepresidente, lo que significa que conforme al texto de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato como Presidenta del Estado, disposición prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país.¹²

La figura política fue tan forzada que ninguna de las causales establecidas en el artículo 170 de la Constitución Política del Estado se había materializado: muerte, renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ausencia o impedimento. Morales había renunciado, verdad, pero la ALP

¹² Ver más en: <https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/12/anez-asume-la-presidencia-para-pacificar-el-pais-237195.html>

no la había aceptado o rechazado. Pero, quien piense que las interrupciones no democráticas de los mandatos constitucionales alguna vez se apegaron a la institucionalidad, no sabe lo que es un golpe de Estado, más aún como el registrado el 10 de noviembre, cuando se reeditó la forma clásica del golpe y se la combinó con un barniz de forzada legalidad al colocar como figura a la senadora beniana. El golpe de Estado es, por tanto, un hecho político y no jurídico.

La motivación de venganza y odio del gobierno no logró ser escondida. Apenas posesionado el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció en declaraciones en las puertas de Palacio Quemado que iba a desplegar una «cacería» para dar con las personas, exautoridades y dirigentes del MAS que estaban cometiendo delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. En el grupo hay ocho hombres y una mujer relacionados en la lista de perseguidos políticos que el ministro de Gobierno anunció que iba a «cazar», de acuerdo con las denuncias. Entre ellos se encuentran Juan Ramón Quintana, el exministro de gobierno Hugo Moldiz y Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera.¹³ Que sus palabras no fueron un gafe lo demuestra otra declaración en un programa de televisión, en la que dijo textualmente:

Si te digo las acciones que se van a tomar ya no serían acciones del Ministerio de Gobierno. Ustedes las van a ver en las próximas horas en la calle, todas las acciones que vamos a tomar, pero vamos a dar seguridad al pueblo de Bolivia (...). Sabemos lo que está pasando en El Alto, sabemos

¹³ Ver más en: <http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/12/21/continua-la-persecucion-politica-del-gobierno-de-facto-en-bolivia/#.Xmj8DBdZ2jQ>

lo que pasa en Yapacaní, sabemos lo que pasa en Cochabamba. Todo esto está siendo manejado por sediciosos con recursos económicos y la mayoría por agentes extranjeros que están siendo monitoreados y recibiendo órdenes de Juan Ramón Quintana, Raúl García Linera y entendemos que también está Hugo Moldiz de por medio. Se les dio la oportunidad, se les dijo, ahora actuaremos con todo el rigor de la ley y no les va a quedar a todos los sediciosos otro lugar que ir a la cárcel de Chonchocoro, porque no vamos a permitir que esta gente nos desestabilice el país.¹⁴

Además de la persecución de exautoridades del gobierno de Evo Morales y dirigentes del MAS, lo que sí establece definitivamente el límite de demarcación entre el uso legítimo de la fuerza pública y la represión —como mecanismo político para querer resolver mediante el uso desproporcionado de las armas de fuego la falta de apoyo social, que es una de las características de un gobierno con modalidades fascistizantes— han sido las masacres de Sacaba¹⁵ y Senkata.¹⁶

Una visita de una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Bolivia, a pedido del propio gobierno, y tras entrevistar a autoridades del Ejecutivo, fiscales, representantes del Órgano Judicial, Defensoría del Pueblo, familiares de los muertos, presos y otros, emitió un informe que habla por sí mismo. En lo referente a las masa-

¹⁴ Declaraciones de Murillo en el programa televisivo *Que no me pierdas*.

¹⁵ La violenta represión a campesinos cocaleros del Trópico de Cochabamba, ubicado en el central departamento de Cochabamba, se registró el 15 de noviembre.

¹⁶ La represión en Senkata, en la ciudad de El Alto, se produjo el 19 de noviembre.

cres del 15 y 19 de noviembre sostiene textualmente en sus partes más importantes:

*Masacres y asesinatos*¹⁷

En el contexto de la crisis y hasta el 27 de noviembre, la comitiva de la CIDH tuvo noticia de 36 personas que perdieron la vida en Bolivia. Durante su visita, la delegación de la CIDH recibió abundante información sobre dos masacres cometidas en Sacaba y en Senkata, los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, en las cuales perdieron la vida por lo menos 18 personas.

La masacre de Sacaba ocurrió el 15 de noviembre. La Comisión recibió información testimonial según la cual miembros de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba llegaron en una manifestación pacífica al municipio de Sacaba, exigiendo el retorno al gobierno de Evo Morales y rechazando al gobierno interino. A la altura del puente Huayllani, en el kilómetro 10 de la carretera a Cochabamba, se habría establecido un anillo de seguridad por parte de fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas. Al momento en el que los manifestantes intentaron pasar, inicialmente fueron contenidos con la indicación verbal de que estaba en camino la Defensoría del Pueblo para mediar; sin embargo, de conformidad con la información recibida, a los pocos momentos los agentes policiales y militares habrían abierto fuego contra la población civil allí reunida, a la que además habrían atacado con gases lacrimógenos, golpes y patadas. En estos hechos habrían resultaron muertas nueve personas: Omar Calle, César Sipe, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas Delgadillo, Arman-

¹⁷ El subtítulo corresponde al informe de la CIDH.

do Carvalho Escobar, Marco Vargas Martínez y Roberto Sejas. También habrían resultado heridas, inclusive por balas, numerosas personas que fueron recibidas en distintos hospitales de Sacaba y Cochabamba.

La Comisión toma nota de que existen diferentes versiones sobre la forma como tuvieron lugar los hechos. Por una parte, algunas autoridades estatales, incluyendo el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y los mandos policiales, han acusado a los manifestantes de haberse disparado entre ellos, aduciendo razones tales como el calibre de las balas que fueron encontradas en los cuerpos de las personas fallecidas y heridas. Por otra parte, los numerosos testimonios recibidos por la CIDH son consistentes al indicar que las personas manifestantes estaban desarmadas, avanzaban pacíficamente por iniciativa propia, y fueron agredidas de repente con armas de fuego, contenedores de gas lacrimógeno, porras y otras armas por la fuerza pública, de manera sorpresiva. En la operación participaron helicópteros de la fuerza pública, según lo atestiguó el propio comandante de la Policía de Cochabamba ante la CIDH.

La masacre de Senkata ocurrió el día 19 de noviembre. Según la información recibida, un grupo de personas partidarias del MAS realizaba un bloqueo alrededor de la planta de hidrocarburos del sector de Senkata, en El Alto. Esa mañana se permitió la salida de la planta de 60 vehículos contenedores de gasolina y gas, luego de lo cual los manifestantes habrían derribado uno de los muros perimetrales de la planta, momento en el cual habrían sido contenidos con armas de fuego por las fuerzas conjuntas de la Policía y el ejército. En los hechos resultaron nueve personas muertas por impacto de bala: Devi Posto Cusi, Pedro Quisberth Mamani, Edwin Jamachi Paniagua, José Colque Patty, Juan José Tenorio Mamani, Antonio Ronald Quispe, Clemente

Mamani Santander, Rudy Cristian Vásquez Condori y Calixto Huanacu Aguilar. Entre las víctimas fatales se cuentan varias personas que al parecer no estaban participando en el bloqueo, sino simplemente pasaban por la zona en camino a sus casas o trabajos. También resultaron numerosas personas heridas, por impactos de bala, golpes, inhalación de gases y otras causas conexas, y fueron atendidas en diversos hospitales de El Alto. Al igual que con la masacre de Sacaba, algunos funcionarios públicos, tanto forenses como policiales, han cuestionado que las balas que mataron a estos ciudadanos hayan sido disparadas de armas reglamentarias de la fuerza pública. Al respecto, según declaraciones públicas, y ante la CIDH, en forma reiterada por las propias víctimas, estas personas se estaban manifestando públicamente sin violencia y fueron objeto de represión con armas de fuego por agentes estatales. También se han presentado denuncias públicas sobre la desaparición de varios cuerpos sin vida de personas que habrían fallecido en esta misma masacre, los cuales habrían sido recogidos por agentes estatales sin que se haya vuelto a tener noticia de las personas muertas. En particular se denunció ante la CIDH que este fue el caso de una mujer campesina, y de una niña de aproximadamente 12 años, entre otros. Las víctimas de esta masacre señalaron consistentemente que los muertos fueron muchos más que los nueve que se han reportado hasta la fecha.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos. En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas.

Además de las muertes registradas en las masacres de Sacaba y de Senkata, el equipo técnico escuchó las denuncias de los asesinatos de Beltrán Paulino Condori Aruni, de 21 años, y Percy Romel Conde Noguera, de 32 años, quienes habrían muerto por disparos de arma de fuego; y de Juan Marín Félix Taco, de 18 años, cuya causa de muerte no se ha determinado, todos ellos durante la contención de una protesta realizada por pobladores de las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, entre el 10 y 11 de noviembre. Según la información presentada por la Defensoría del Pueblo, estas muertes, así como varias lesiones a personas, fueron producidas durante el ingreso de las fuerzas policiales y militares al lugar de la protesta, habiéndose identificado un uso desmedido y desproporcionado de la fuerza pública en este incidente.

El mismo día, según la información recibida por la CIDH, se produjo la muerte de Miguel Ledezma González, de 24 años, al parecer por un impacto de perdigones metálicos no reglamentarios, en un enfrentamiento con fuerzas policiales y militares en Sacaba. Asimismo, la CIDH fue informada sobre la muerte de otras personas, incluyendo agentes de la fuerza pública, en sucesos ocurridos en distintas zonas del país.

Por otra parte, la comitiva delegada por la CIDH fue informada sobre la muerte de varias personas durante conflictos violentos entre diferentes grupos de particulares en el marco de las protestas, como la muerte, el 11 de noviembre, de Filemón Soria Díaz, de 45 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Cochabamba, atado de pies y manos, quien habría muerto por estrangulamiento con un lazo. El 12 de noviembre murió Juan José Mamani, de 35 años, en Cochabamba, tras ser golpeado a muerte por un grupo de personas; y Marcelino Jarata Estrada murió en Potosí por

un impacto de arma de fuego. En Santa Cruz, en la zona de Montero, el 30 de octubre murieron Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas por impactos de bala, al igual que el joven Roberth C.S., abaleado el 13 de noviembre en la misma ciudad; las muertes ocurrieron durante enfrentamientos entre personas que realizaban bloqueos y partidarios de grupos de opositores al MAS, en los que aparentemente participaron francotiradores.

El informe de la CIDH es bastante importante pues en uno de sus acápites hace referencia al desplazamiento de grupos privados con protección de las fuerzas del orden en fechas posteriores a la constitución del nuevo gobierno.

Personas entrevistadas por la delegación de la comisión reportaron la participación directa en la violencia de grupos privados de diferente tamaño y con distintos niveles de armamento, así como enfrentamientos de distintos grados de violencia ocurridos en el curso de las manifestaciones. Según la información recibida, dichos grupos habrían actuado en ocasiones en asociación con, o bajo la tolerancia de, agentes del Estado, incluidos miembros de la fuerza pública. Tal es el caso, en particular, de la autodenominada Resistencia Cochala, grupo armado y motorizado al que se ha señalado consistentemente de participar en los desórdenes sociales ejerciendo control violento e intimidación sobre amplios sectores de la sociedad, y afectando en particular la integridad personal y la circulación de las personas. Algunos de estos grupos privados ejercen control territorial y limitan la circulación sobre amplios sectores de las ciudades; incluso sobre

la Plaza Murillo, en La Paz, donde se encuentran las oficinas del Alto Gobierno y del Poder Legislativo.¹⁸

El informe de la CIDH, que ha sido cuestionado por el gobierno de facto, hace referencia a las persecuciones y detenciones indebidas, a la situación de detención preventiva sin haberse garantizado el debido proceso, a la criminalización de opositores políticos y de dirigentes sociales, así como atentados contra la libertad de expresión, y tras aclarar que no está dentro del campo temporal de su investigación también se habrían registrado similares prácticas durante el gobierno de Morales, lo que de confirmarse también implicaría la violación de derechos humanos.

El comité de la CIDH ha tenido la oportunidad de visitar a los asilados, particularmente de los que permanecen en la residencia de la embajada de México. Es evidente que en Bolivia existe un estado de supresión de derechos y libertades al grado tal que se cumplen más de cuatro meses, más de 120 días, en los que siete exautoridades del gobierno del presidente Evo Morales nos encontramos asilados en la residencia de la embajada de los Estados Unidos Mexicanos en La Paz, sin que el gobierno actual nos haya otorgado salvoconductos para que podamos trasladarnos hacia México.

Se trata del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana Torga, el exministro de Defensa Nacional, Javier Zavaleta López; el exministro de Gobierno, Hugo Moldiz Mercado; el exministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta; la exministra de Culturas, Vilma Alanoca Mamani; el exgobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez y el exdi-

¹⁸ Ver informe de la CIDH, en el subtítulo: Uso de la violencia por grupos privados y ciudadanos particulares.

rector de la Agencia de Tecnologías de Información y comunicación del Ministerio de la Presidencia, Nicolás Laguna. Los siete permanecemos día y noche al interior de esta residencia fuertemente custodiada por un contingente policial de aproximadamente 40 policías y más de cinco vehículos por turno. Asimismo, a unos 500 metros de la residencia, el gobierno ha instalado una vigilia de personas civiles hostiles, que vigilan día y noche que ningún asilado salga de la residencia.

El ingreso a la residencia de la embajada mexicana, ubicada en el condominio La Rinconada, de La Florida, al sur de la ciudad de La Paz, se dio desde el 10 de noviembre o uno o dos días después, para salvar nuestras vidas, ya que todos fuimos amenazados de muerte, las familias fueron gravemente hostigadas y, en la mayoría de los casos, como ocurrió con varios de los presentes, las viviendas allanadas, saqueadas, destruidas e incluso quemadas.

Al momento del ingreso a la residencia de la embajada, ninguna de estas exautoridades tenía ningún proceso abierto y ningún mandamiento de aprensión en su contra. Fue, con el paso de los días, que se fueron armando y fabricando una serie de procesos judiciales (*lawfare*). El ministro de Gobierno públicamente indicó que exautoridades serían «cazadas» y encarceladas antes de que se expidieran órdenes de aprensión, y a la fecha suman y siguen procesos e investigaciones absolutamente políticas e inverosímiles, imposibles de justificar, más allá del odio que muestran las actuales autoridades que, además de negar un derecho humano fundamental, constantemente hacen declaraciones ofensivas y denigrantes a sabiendas de que nuestra condición de asilados nos limita expresarnos públicamente.

El gobierno de Bolivia actualmente nos tiene de rehenes a las siete exautoridades, al negarnos sin justificativo ni razón alguna

los salvoconductos para que salgamos del país y, lo que es peor, viola abiertamente el Derecho Internacional. Bolivia como México, es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 22.7 establece el derecho de buscar y recibir asilo. Dicha norma convencional textualmente menciona: «Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales». La adopción de un catálogo de tratados relacionados al asilo diplomático y territorial por motivos políticos ha derivado en lo que comúnmente se ha denominado como «la tradición latinoamericana del asilo».¹⁹

El gobierno boliviano ha expedido más de una decena de salvoconductos entre ellas a exministros, autoridades y familiares, empero íntegramente por razones políticas nos mantiene expuesto a siete exautoridades (entre las cuales existen dos que no tienen ninguna orden de aprensión) en un limbo jurídico y real, solamente con el objeto de causar sufrimiento y dolor, lo cual viola los más elementales derechos humanos consagrados en la Constitución boliviana y sobre todo en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Finalmente, el Estado boliviano no ha tomado en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Observaciones Preliminares, tras su visita a Bolivia a la cabeza de su Secretario Ejecutivo Paolo Abrau, del 10 de diciembre de 2019, recomendó textualmente en su parte final: «Entregar los salvoconductos a las personas que se encuentran asiladas en las embajadas de México y Argentina, o en otras sedes diplomá-

¹⁹ Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Estado Plurinacional de Bolivia. Sentencia de 25 de noviembre de 2013, párrafo 137.

ticas, para que así puedan ejercer su derecho humano a obtener asilo y refugio, en forma tal que no fragmenten sus núcleos familiares».

Por ello denunciamos ante esta Comisión y ante toda la comunidad internacional vinculada a la defensa de los derechos humanos esta grave violación a siete personas que nos encontramos imposibilitados de vivir como seres normales, por decisión arbitraria e ilegal del actual gobierno boliviano.

El golpe de Estado, la geopolítica y las relaciones internacionales

El golpe de Estado que terminó con el gobierno de Evo Morales también se debe analizar desde una perspectiva mucho más amplia, que es el campo de la geopolítica y las relaciones internacionales. No se debe perder de vista que América Latina se convirtió en un campo de abierta disputa desde fines del siglo XX, cuando irrumpieron poderosos movimientos de resistencia a las políticas neoliberales y al proyecto estadounidense de poner en marcha el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y con mayor fuerza con la instalación de gobiernos progresistas y de izquierda los primeros años del siglo XXI. La declinante hegemonía estadounidense no pudo imponerse con ese proyecto económico, cuyo brazo militar lo constituyó el Plan Colombia, rebautizado luego como Iniciativa Regional Andina, pues al frente encontró pueblos y gobiernos que coincidían en conquistar mayores grados de autonomía frente a Estados Unidos.

A contramarcha de varios estudiosos de las relaciones internacionales y de la geopolítica mundial que le otorgan a América Latina un papel secundario en la agenda global de Estados Uni-

dos, hechos históricos y actuales más bien le asignan a la región el papel de área de influencia vital y necesaria, sobre todo en las condiciones actuales, en la disputa por la hegemonía mundial. Así es como debe entenderse la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de cada uno de los países de América Latina y el Caribe.

La historia de América Latina es la historia de las intervenciones estadounidenses. Existe una amplia bibliografía que sustenta la tesis, tanto de reconocidos intelectuales y estudiosos latinoamericanos,²⁰ como de los que forman parte de su «élite» académica pensante partidaria de la dominación.²¹ Y estas intromisiones en los asuntos internos de los países latinoamericanos han contado con el respaldo de las clases dominantes locales y su profundidad ha dependido de los niveles de resistencia de los pueblos a través de una gama de formas de lucha.

Ahora estamos en una coyuntura de máxima disputa. Estados Unidos y sus aliados en cada uno de los países de América Latina han vuelto a la carga, después de su «año sabático» como dice la intelectual argentina-cubana Isabel Rauber, que fue «un tiempo de preparación activa»²² de la desestabilización de los gobiernos de izquierda y progresistas y para «retomar el mando del rumbo político-económico-cultural de las sociedades latinoamericanas a favor de sus

²⁰ Entre los más destacados tenemos a Roberto Regalado, Luis Hernández, Atilio Borón, quienes a través de sus producciones bibliográficas aportan elementos de gran valía para conocer y comprender las estrategias de Estados Unidos para dominar su «patio trasero».

²¹ Entre los más destacados tenemos a Zbigniew Brzezinski y a Henry Kissinger.

²² Isabel Rauber: *Refundar la política. Desafíos para una nueva izquierda latinoamericana*, Ediciones Continente, Buenos Aires, 2017, p. 23.

intereses de clase». ²³ La muerte de Hugo Chávez ²⁴ fue aprovechada por las fuerzas neoconservadoras de Estados Unidos para desplegar todo el esfuerzo y recursos posibles contra los gobiernos de la región que habían logrado distintos niveles de distanciamiento de la política imperial.

¿Qué razones impulsan a Estados Unidos a volcar una mayor concentración hacia América Latina a poco de cumplirse la segunda década del siglo XXI?

Evidentemente son varias. La realidad concreta, nos reflexionaba el filósofo de Tréveris, es el resultado de múltiples determinaciones. Por razones de espacio, solo decir que hay razones políticas y geopolíticas de carácter histórico y otros factores atribuibles a la naturaleza de la disputa actual en su dimensión mundial y continental.

Desde el punto de vista histórico, América Latina siempre ha estado en los ojos de Estados Unidos. Este país tuvo una temprana intervención en las luchas por la independencia del siglo XIX al poner en marcha la doctrina Monroe (1823) de «América para los americanos» y que fue determinante para frenar los intentos de reconquista colonial de parte de la «Santa Alianza», pero también para hacer fracasar el sueño integracionista de Bolívar en 1826. Es más, evitó la coronación de las gestas libertarias de Puerto Rico y Cuba, a las que las consideraba una «extensión natural» de su territorio. América Latina siempre ha jugado un papel de primer orden para Estados Unidos en materia de acceso a los recursos naturales y de construcción de un muro político-militar ante la presencia de otras potencias extra continentales.

²³ Ídem.

²⁴ Hugo Chávez murió el 5 de marzo de 2013, dos meses después de asumir su cuarto mandato presidencial.

Desde un punto de vista geopolítico mundial, retomar el control de América Latina es fundamental para Estados Unidos, cuya declinación hegemónica lo coloca en aprietos en el planeta. Pero lo es también para el capital porque «el sistema de producción capitalista necesita de un territorio dentro del cual crear condiciones uniformes y estables para valorizar el capital, y un poder político capaz de defender esa valorización».²⁵ Es decir, la disputa actual en la región entre emancipación y dominación es parte de la disputa mundial que el imperialismo tiene con China y Rusia, principalmente, y secundariamente con Irán, Corea y Turquía. Estados Unidos no cree en el equilibrio de poder, mucho menos en América Latina, como sostiene el excanciller Kissinger.²⁶ La región es vital para Estados Unidos por los recursos naturales que necesita (petróleo, gas, minerales, agua, biodiversidad y otros) y porque representa su «isla continental»,²⁷ desde donde aspira, en condiciones adversas, a mantener su condición de única superpotencia.

Para todo eso, lo que debe hacer es desplazar y «destruir» a los gobiernos que marchen por rumbos distintos a los dictados por Estados Unidos y el capital. El fracaso de sus invasiones en Afganistán, Irak y Libia, a los que se debe sumar su repliegue oficial de Siria, muestran la imposibilidad de Estados Unidos para seguir dominando el mundo como hasta hace poco. Por otra parte, también se ha debilitado su grado de influencia en Europa, a tal punto que países como Alemania y Francia de-

²⁵ Roberto Regalado: *La izquierda latinoamericana en el gobierno: ¿alternativa o reciclaje?*, Ocean Sur, 2012, p. 14.

²⁶ Henry Kissinger: *La diplomacia*, Fondo de Cultura Económica, México, 2017.

²⁷ Zbigniew Brzezinski: *El gran tablero mundial*, Paidós, España, 1998.

sarrollan líneas de aproximación, aunque en tensión, con China y Rusia.

Desde el punto de vista de la geopolítica continental y tras el derrocamiento de Evo Morales, se percibe que la tensión en la región ingresará en una nueva fase. Estados Unidos y sus aliados, a los que sumó con entusiasmo el gobierno de facto de Bolivia, se disponen a ingresar en otra fase de la escalada de agresiones para terminar con las revoluciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua (en ese orden) y a debilitar, sino destruir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que es un espacio de concertación política y de integración que nació con la idea de articular a todos los gobiernos de la región.

La relación de fuerzas es precariamente favorable a Estados Unidos. El triunfo del progresismo en México, que se ha propuesto la cuarta transformación; el retorno de lo nacional-popular en la Argentina, que la tiene dura por la bancarrota que dejó Macri; el ascenso de la lucha social en Chile, cuya ruta por avanzar hacia una nueva Constitución Política del Estado que supere al pinochetismo, intocable incluso en los tiempos de la Concertación, es indetenible; la acumulación política plasmada en las calles en Colombia, que da cuenta de los límites que enfrenta el mejor aliado de Washington en Sudamérica; y los niveles de resistencia en Honduras y El Salvador a gobiernos autoritarios, así como del rechazo social al deterioro de las condiciones de vida de la población en otros países con políticas neoliberales, no es precisamente del agrado de un imperialismo y de las élites locales que se resisten a asumir que ya no pueden seguir dominando como antes.

A diferencia del mundo bipolar en que se movió la Revolución Cubana, las llamadas revoluciones del siglo XXI: ve-

nezolana, boliviana y ecuatoriana, así como los procesos progresistas en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y El Salvador, se desarrollaron en un mundo unipolar que paradójicamente entra en crisis en un corto tiempo no previsto ni por los más pesimistas intelectuales del capitalismo, para dar lugar a un periodo de transición hegemónica que no ha concluido aún. Entre 1991 y 1999, salvo la solitaria y heroica resistencia de la Revolución Cubana, asediada con el recrudecimiento del criminal bloqueo estadounidense tras el derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en América Latina existía un mar o universo de gobiernos neoliberales. El rechazo popular a los ajustes estructurales era generalizado, aunque variaba en intensidad en cada uno de los países latinoamericanos. Las medidas neoliberales, publicitadas por partidos de derecha y socialdemócratas, así como por medios de comunicación nacionales e internacionales que instalaron la invencibilidad del «pensamiento único», no dieron el resultado que se esperaba. La economía de la filtración,²⁸ en la que el supuesto teórico era que los beneficios del crecimiento llegarían a los pobres fracasó como reconoce el exvicepresidente del Banco Mundial, Joseph. E. Stiglitz. Las economías no crecieron y si algunas lo hicieron, no distribuyeron los recursos en los sectores más depauperados, dando lugar a un proceso de concentración de la riqueza en pocas manos. Sin embargo, si bien es cierto que el rechazo al neoliberalismo, como variante táctica del modo de producción capitalista en su fase globalizada, se dio en toda la América Latina, los grados de resistencia fueron distintos y los desenlaces también. En unos, la lucha reivindicativa corporativa fue el límite al que pudo llegar el nivel de

²⁸ Joseph Stiglitz: *El malestar en la globalización*, Editorial Taurus, Argentina, 2002, p. 119.

organización y conciencia de las clases subalternas, y en otros, donde la crisis llegó al punto de «no retorno», se pasó a cuestionar y superar el orden de cosas existente, aunque los grados en los que se hizo son distintos en cada uno de los tres países. Este es el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde profundas crisis de Estado desencadenaron procesos revolucionarios que dieron origen a la instalación de gobiernos de izquierda. Entre unos y otros (resistencias reivindicativas y cuestionamientos al tema del poder), se ubicaron otras insurgencias nacional-populares que instalaron a gobiernos progresistas en la región, como es el caso de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Honduras y El Salvador. El caso de Nicaragua —que es la segunda y última revolución armada triunfante en el siglo XX—, debe ser analizado aparte pues se trata en realidad del «retorno» sandinista al gobierno a partir de 2007, en un Estado cuyo aparato no fue desmontado por los gobiernos de derecha que se instalaron desde 1990.

No hay duda que sin la impronta de la Revolución Cubana, que este año cumple 61 años, todo habría sido más difícil. Empero, América Latina se debate en una hora crucial para seguir avanzando hacia su plena independencia económica y soberanía política en medio de un mundo unipolar o, en el mejor de los casos, en transición hegemónica hacia un mundo multipolar o de bipolaridad de nuevo tipo, en el que todavía tenemos más dudas que certezas sobre el papel que cumplirá esta parte del planeta. A principios del siglo XXI, con mayor o menor precisión, se tenía la firme convicción de que América Latina contaba con la mejor condición de posibilidad de avanzar, con distintos grados, hacia su emancipación, pero al mismo tiempo se tenía cierta conciencia de que no iba a ser fácil, ni mucho menos se dejaría de enfrentar la reacción más violenta

y conservadora del imperialismo y las burguesías para evitar perder su poder y privilegios.

En ese contexto, con el plus de contar ahora con el apoyo de Bolivia, es que se mantiene la decisión estadounidense de interrumpir la continuidad de la Revolución Bolivariana al costo que sea necesario. Los planes van desde un golpe de Estado, que solo tiene algunas posibilidades si el imperialismo logra dividir a las Fuerzas Armadas Bolivarianas y/o generar una implosión producto de dificultades en el acceso a la alimentación y a la salud, así como cortes en el suministro de energía eléctrica y agua potable, asesinar al presidente Nicolás Maduro y poner en marcha la intervención militar con la participación de algunos ejércitos de la región, siguen en la agenda.

Trump está en campaña por su reelección y recurre nuevamente a tocar los tambores de guerra contra Venezuela, pensando más en seguir teniendo de su lado a los sectores conservadores de la derecha estadounidense de origen cubano-venezolana, que en la inestabilidad que puede provocar en la región. La arremetida contra Venezuela es, por tanto, contra toda América Latina y, asimismo, una macabra jugada en la geopolítica mundial. En Honduras, Paraguay, Brasil y Bolivia desplazaron a gobiernos progresistas mediante los llamados golpes de Estado de «nuevo tipo»; se suma en Ecuador, la traición de Lenin Moreno, cuyos orígenes seguramente se encuentran durante el gobierno de Correa.

Como es de suponerse, los planes para «revertir»,²⁹ cuando más pronto sea posible, la primera revolución socialista triunfante en América Latina, siguen adelante. La Administración

²⁹ El concepto «reversión» de los gobiernos de izquierda fue empleado en la década de los ochenta por el conservador gobierno republicano de Ronald Reagan.

Trump ha tomado órdenes ejecutivas para endurecer el bloqueo comercial y económico contra Cuba, que de hecho tampoco aflojó en el gobierno de Barack Obama a pesar de los avances para restablecer relaciones oficiales entre ambos países. La principal apuesta, aunque no la única, es asfixiar la economía cubana para provocar una implosión interna que, apoyada y financiada desde Estados Unidos, dé por finalizado al gobierno socialista que, ya con Miguel Díaz-Canel como presidente, aprobó en abril de 2019 una nueva Constitución con el objetivo de seguir construyendo un socialismo próspero y sostenible.

La Revolución Cubana, caracterizada como un acontecimiento cardinal,³⁰ surge y se desarrolla en medio del mundo bipolar emergente a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con el imperialismo norteamericano como única potencia realmente mundial. El politólogo cubano Roberto Regalado sostiene que la constitución del primer Estado socialista en América Latina dio lugar a dos etapas,³¹ en las que se registran hechos y acontecimientos políticos contradictorios, de los cuales los más importantes son el auge de los movimientos y las guerras de liberación nacional, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, la «inserción» de gobiernos militares reaccionarios de parte de Estados Unidos al influjo de la Doctrina de la Seguridad Nacional, invasiones militares estadounidenses a República Dominicana, Granada y Panamá, la apertura de bases militares con el pretexto de la lucha contra las drogas y la emergencia de corrientes militares nacionalistas en varias fuer-

³⁰ Ernesto Guevara: «Cuba, ¿excepción histórica o vanguardia en la lucha contra el colonialismo» en: *Obras Completas*, tomo 9, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977, p. 21.

³¹ Roberto Regalado: *La izquierda latinoamericana en el gobierno: ¿alternativa o reciclaje?*, Ocean Sur, 2012, p. 133.

zas armadas de la región que abrieron experiencias de gobiernos de corte antimperialista.

El derrocamiento de Evo Morales ha sido aprovechado por Washington para darle a la presidenta autonombraada Áñez la tarea de legitimar al designado, sin haber ido a las urnas, Juan Guaidó, y de cortar las relaciones diplomáticas con Cuba, que se mantuvieron incluso con gobiernos neoliberales. La arremetida fascista fue escalonada. A los diplomáticos venezolanos les dieron 24 horas para dejar Bolivia y contra Cuba emprendieron una «feroz campaña de mentiras y tergiversaciones»,³² allanamientos ilegales y hostigamiento contra más de 700 integrantes de la brigada médica, apoyado en el discurso del enemigo externo, que finalmente concluyó con la ruptura de relaciones diplomáticas el 24 de enero. El nivel de acoso a médicos y diplomáticos cubanos fue de tal envergadura que se transgredió la Convención de Viena al allanar la Clínica del Colaborador, al utilizar un vehículo de la embajada de Estados Unidos en La Paz, con placa 28-CD-17 y emplear a oficiales de la Policía boliviana, vinculados estrechamente a esa legación estadounidense, como el coronel Gonzalo Medinacelli, y al afirmar, sin presentar pruebas, que los médicos cubanos no tenían título y que se transfirieron a Cuba millones de dólares. De acuerdo al gobierno cubano, que destinó un promedio de 200 millones de dólares al año entre 2006 y 2012, la misión médica cubana atendió «77 millones 330 mil 447 consultas, se realizaron 1 millón 529 mil 301 intervenciones quirúrgicas, se asistieron 60 mil

³² Palabras del canciller cubano el 26 de enero de este año, en respuesta a la decisión del gobierno de facto boliviano de dar por terminadas las relaciones bilaterales. Ver más en: http://www.la-razon.com/nacional/Cuba-retirar-embajador-Bolivia-salud-urea_0_3301469846.html

640 partos, se aplicaron 22 mil 221 vacunas y se hicieron 508 mil 403 cirugías oftalmológicas». ³³ Bolivia asumió la presencia de la brigada médica desde 2013, sin haber cubierto la totalidad de lo requerido para su funcionamiento.

El golpe de Estado contra Evo Morales adquiere, por tanto, una connotación geopolítica, pues coloca a Bolivia a cabalgar en el proyecto estadounidense de la restauración conservadora y de atacar, por el medio que fuese, a los gobiernos progresistas y de izquierda, concentrando la atención y las medidas contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que están en la primera línea de objetivos a destruir. A los tres países se los califica de autoritarios, no democráticos y de promover la subversión en América Latina, un discurso de la doctrina Truman para justificar los ataques contra el campo socialista en la Guerra Fría.

Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, con efectos en la geopolítica, los planes de Trump pasan por fortalecer la OEA, lo más seguro con la ratificación de Luis Almagro como Secretario General, y de debilitar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El primer paso en la última dirección ha sido dado por el repliegue de Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú y Chile de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), para dar nacimiento al Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), ³⁴ un nuevo bloque regional del que no se ha vuelto a saber nada

³³ El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dio a conocer, el 25 de enero de 2020, una amplia declaración en la que desmonta la idea de que la suspensión de relaciones bilaterales decidida por Bolivia haya sido consecuencia de la posición firme de calificar de golpe de Estado la forma como Evo Morales fue derrocado.

³⁴ PROSUR nació oficialmente en Santiago de Chile el 23 de marzo de 2019.

desde su pomposo anuncio. Hasta ahora es inexplicable que el gobierno de Bolivia haya enviado una delegación, en calidad de observadora, al nacimiento de PROSUR, cuando tenía la presidencia *pro tempore* de UNASUR. El segundo paso ha sido dado por la decisión de Brasil de alejarse de ese organismo por dar «protagonismo a regímenes no democráticos».³⁵ Ya Bolivia anunció antes que evaluaría su permanencia en ese foro³⁶ y que no participaría en el inicio de la próxima presidencia, que le corresponde a México.

³⁵ El canciller brasileño hizo el anuncio el 17 de enero de 2020. Ver más en: <https://www.dw.com/es/brasil-abandona-la-comunidad-de-estados-latinoamericanos-y-caribe/C3%B1os-celac/a-52035439>

³⁶ El anuncio lo hace la canciller Karen Longaric el 25 de diciembre. Ver más en: <https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/26/bolivia-analiza-dejar-la-celac-vaticina-fracaso-de-la-reunion-241537.html>

1959



Cuba, 1959. El mundo cambió. No se trata de una insurgencia popular o únicamente la victoria armada de un grupo de guerrilleros; es el inicio de una revolución social que se asume por vocación martiana, que garantizará educación y salud para todos, y que repartirá la tierra entre los campesinos. Ocean Sur propone, en esta edición, 15 imágenes del primer año de aquella Revolución que hizo historia.

16 páginas de fotos, 2018, ISBN 978-1-925756-27-2

A manera de epílogo

Bolivia sintetiza la trágica historia de América Latina. El golpe de Estado ha desembocado en la instalación de un gobierno de tendencia fascistoide que en dos actos de represión masiva tiene en su haber más de tres docenas de muertos, más de una centena de heridos, siete asilados en la embajada de México a los que se les niega el derecho y la costumbre internacional del salvoconducto, y cerca de otro centenar de presos políticos. La acción combinada de fuerzas policiales y militares para enfrentar cualquier manifestación o anuncio de protesta, así como la protección desde el Estado a grupos civiles paramilitares, muestran el tipo de régimen que Estados Unidos protege.

Las elecciones generales del 3 de mayo de 2020 no iban a ser plenamente libres con una Bolivia con presos políticos, asilados y perseguidos. Con la postergación de las elecciones a raíz de la epidemia del coronavirus, contra la que se debe lograr un «frente común» con «sentido común» entre los actores políticos, sociales y económicos del país, hay que develar la oscura intención de Estados Unidos y la derecha para que el acto electoral se realice en un plazo mayor al razonablemente necesario para controlar la expansión del virus. Si esto ocurre, o es para que Áñez escale al segundo lugar o para dar paso a nuevas inscripciones que disminuyan el crecimiento de los candidatos del MAS. En ambos casos será otra medida no democrática que tendrá la complicidad del TSE.

El MAS lidera la preferencia electoral con sus candidatos Luis Arce (presidente) y David Choquehuanca (vicepresidente), y si la tendencia se mantiene el binomio de izquierda ganaría las elecciones en primera vuelta. Carlos Mesa se ubica de nuevo segundo y la actual presidenta Jeanine Áñez, con todo el aparato estadounidense de respaldo, aspira subir de un alejado tercer lugar hasta ganar las elecciones. Habrá que ver si cerca de seis meses después del golpe de Estado y de instalado un gobierno represivo con alto apoyo en fracciones urbanas conservadoras, lo que lo convierte en un régimen fascistoide, es suficiente para que las cosas no hayan pasado en balde.

Se perciben señales de que Estados Unidos y el gobierno de facto están dispuestos a todo con tal de permanecer en la cúspide y evitar, a como dé lugar y por todos los medios que sea posible, que el MAS (léase pueblo) regrese al gobierno. Entre ese «a como dé lugar», léase un nuevo golpe de Estado, con el pretexto que fuese y la modalidad que sea necesaria. Una de ellas, hay que insistir, es jugar con la excusa del coronavirus para aplazar por un tiempo largo las elecciones generales como bien ha advertido el expresidente colombiano Ernesto Samper, quien en su cuenta en Twitter sostuvo: «el coronavirus no puede contaminar la democracia. Se comienzan a escuchar voces de la derecha que, excusándose en el virus, plantean aplazar elecciones y campañas plebiscitarias cuyos resultados, según las encuestas, no los favorecen».¹

Todo dependerá de la capacidad de las masas de abrir un nuevo momento constitutivo y de autodeterminación. Pronto se sabrá si el derrocamiento del gobierno de Evo Morales marca el fin de un ciclo estatal o solo es un paréntesis del

¹ Publicado el 18 de marzo.

gobierno del pueblo. Es decir, que ya no exista el gobierno de Evo Morales, no quiere decir que necesariamente estemos en la fase final del ciclo estatal inaugurado por las rebeliones indígenas, obreras y populares en el período 2006-2009, cuando se aprueba la nueva Constitución Política del Estado. O si, más bien, el gobierno de los movimientos sociales fue un paréntesis dentro de la larga historia de dominación del bloque imperial-oligárquico-colonial.

No es una bola de cristal la que nos ofrecerá la respuesta, sino, como siempre, la manera de cómo se diluciden las relaciones de fuerza en el campo de la lucha política. Y esto solo se hace con lucha, como nos ha enseñado la historia. Para que se resuelva a favor de los humildes depende del cumplimiento de varias tareas, entre las que podemos mencionar como prioritarias: primera, que el «sujeto histórico» de la Revolución Boliviana se reconstituya e impulse la conformación de un bloque social en el que tenga la hegemonía y vuelva a ser bloque dirigente de la sociedad; segunda, que Evo Morales decida asumir el papel de líder histórico del Proceso de Cambio, que se lo ha ganado con creces, por encima de cualquier cálculo electoral personal y depende de él, en gran parte, reestructurar un triángulo victorioso;² tercera, que se supere la falsa contradicción entre la forma movimientos sociales y la forma partido — Bolivia es una formación social abigarrada, como sostiene Zavaleta, y la naturaleza de su instrumento político debe corresponder a ese carácter —; cuarta, que no solo se piense en ganar las eleccio-

² Pocas veces en la historia se presenta la articulación de: liderazgo histórico, pueblo organizado y proyecto alternativo. Cuando los tres componentes de ese triángulo no se desequilibran, el proceso político es fuerte, pero cuando se debilitan todos o uno de ellos, se registra un retroceso que, como se demostró en Bolivia a partir de 2016, puede ser letal para una revolución.

nes, que en la democracia representativa es una mera agregación de voluntades individuales expresadas en el voto, sino en volver a generar un momento constitutivo o de autodeterminación de las masas, que es adquirir su cualidad de fuerza social con efecto estatal; y quinta, que el proyecto de superación del capitalismo colonial, traducido en el «Socialismo comunitario para Vivir Bien», sea retomado, enriquecido y, sobre todo, apropiado por las grandes mayorías.

Para finalizar este breve esfuerzo político-académico —realizado en condiciones difíciles por no disponer de suficiente material bibliográfico dada nuestra condición de rehenes del gobierno de facto, aunque, por contraparte, con la plena y calurosa solidaridad del gobierno de México y de sus representantes diplomáticos en Bolivia—, dos consideraciones finales que están dialécticamente relacionadas:

Primera, el gobierno de facto de Bolivia reproduce y no podrá evitarlo, en pequeña escala, el gran problema que padece Estados Unidos para mantener su dominación global: carece de legitimidad y hegemonía, por lo que no tiene otra carta que recurrir a intensificar la represión por el motivo que sea. Esa es la única vía que tiene a mano para cerrar todos los espacios legales de lucha a la participación del pueblo organizado.

Segunda, Bolivia, al igual que América Latina, es un escenario de disputa, en todos los campos, entre dominación y emancipación. Nunca antes tuvimos las condiciones de posibilidad de construir una sociedad desde los humildes, con los humildes y para los humildes. Pero tampoco nunca antes en nuestra historia latinoamericana y boliviana hemos enfrentado peligros tan grandes y difíciles para el ser humano y la naturaleza, producto de la irracionalizada reproducción del capitalismo.

No hay victorias predestinadas ni derrotas definitivas. Mientras exista capitalismo, más aún de carácter colonial en Bolivia, la visibilidad de un horizonte de emancipación siempre estará como condición de posibilidad, obviamente en la medida que se asuman sin complejos ni con ánimos de autoflagelación o inquisición los errores cometidos en cerca de 14 años de gobierno indígena.

A meses de cumplirse el cuarto año de la muerte de Fidel Castro quizás se hace más importante que nunca reflexionar, en momentos como estos, sobre las lecciones aprendidas durante el Proceso de Cambio en Bolivia. El 17 de noviembre de 2005, en un encuentro con jóvenes estudiantes, el líder histórico de la revolución socialista en América Latina se hacía varias preguntas: ¿Es que las revoluciones están llamadas a derrumbarse, o es que los hombres pueden hacer que las revoluciones se derrumben? ¿Pueden o no impedir los hombres, puede o no impedir la sociedad que las revoluciones se derrumben? ¿Puede ser o no irreversible un proceso revolucionario?, ¿cuáles serían las ideas o el grado de conciencia que harían imposible la reversión de un proceso revolucionario? Y tras un amplio repaso de las vicisitudes de la Revolución Cubana sostuvo: «Una conclusión que he sacado al cabo de muchos años: entre los muchos errores que hemos cometido todos, el más importante error era creer que alguien sabía de socialismo, o que alguien sabía de cómo se construye el socialismo».³ Es de revolucionarios rectificar.

³ Al cumplirse 60 años de su ingreso a la Universidad de La Habana, el presidente Fidel Castro realizaba, en el Aula Magna, en aquella tarde del 17 de noviembre de 2005, un amplio análisis del curso que siguió la Revolución Cubana. Ver más en: <http://www.cubadebate.cu/especiales/2005/12/06/discurso-fidel-aula-magna/#.Xnj8TW5Z3GI>



COLECCIÓN FIDEL CASTRO

Proyecto dedicado a difundir el pensamiento y la oratoria del líder de la Revolución Cubana, una de las figuras que más ha aportado a las luchas revolucionarias, antiimperialistas y anticolonialistas en el mundo.



www.oceansur.com
www.oceanbooks.com.au

Ni calles, ni monumentos EL LEGADO DE FIDEL

Narra sucintamente la historia de Fidel Castro, la figura que guió el destino de la Revolución Cubana por casi 60 años. Tras su muerte, en noviembre de 2016 y a la edad de 90 años, millones de cubanos escoltaron sus cenizas en un larguísimo recorrido por todo el país. En una roca extraída de la Sierra Maestra, descansan las cenizas de este hombre gigantesco que solo se llevó a su tumba —martiano de pura cepa— la inmensa satisfacción del deber cumplido, con los suyos y con la Patria.

72 páginas, 2019, ISBN 978-1-925756-37-1





FIDEL CASTRO

Argumentos culturales de la Revolución Cubana

El texto recoge una selección de fragmentos de discursos de Fidel Castro acerca de la educación, la ciencia y la cultura en Cuba; un proceso que le permitió a la Isla no solo resistir los embates del imperio, el neoliberalismo, las renunciaciones, las apostasías y las derrotas, sino que posibilitó la recuperación de la iniciativa de los pueblos del continente para un nuevo amanecer en América Latina.

480 páginas, 2019, ISBN 978-1-925317-79-4



ocean sur

una editorial latinoamericana
www.oceansur.com • info@oceansur.com

Ocean Sur es una casa editorial latinoamericana que ofrece a sus lectores las voces del pensamiento revolucionario de América Latina de todos los tiempos. Inspirada en la diversidad étnica, cultural y de género, las luchas por la soberanía nacional y el espíritu antiimperialista, desarrolla múltiples líneas editoriales que divulgan las reivindicaciones y los proyectos de transformación social de Nuestra América.

Nuestro catálogo de publicaciones abarca textos sobre la teoría política y filosófica de la izquierda, la historia de nuestros pueblos, la trayectoria de los movimientos sociales y la coyuntura política internacional.

El público lector puede acceder a un amplio repertorio de libros y folletos que forman parte de colecciones como Che Guevara, Fidel Castro, Revolución Cubana, Nuestra América, Cultura y Revolución, Roque Dalton, Vidas Rebeldes, Historias desde abajo, Pensamiento Socialista, Biblioteca Marxista y El Octubre Rojo, que promueven el debate de ideas como paradigma emancipador de la humanidad.

Ocean Sur es un lugar de encuentros.

Una de las grandes preguntas del caso boliviano es cuáles fueron las causas de ese viraje que a la larga terminaron por debilitar no solo el impulso revolucionario sino también la capacidad para leer adecuadamente las amenazas de la coyuntura.

De la lectura de este libro —escrito por Hugo Moldiz y editado por Ocean Sur—, así como de la observación minuciosa de los acontecimientos, surge claramente que el golpe de Estado podía haberse evitado; que no era el corolario inexorable del proceso, más allá de sus señaladas debilidades.

Tengo fundadas esperanzas de que este volumen contribuirá a una mejor comprensión de ese extraordinario proceso vivido por el pueblo boliviano y que, una vez retornado al poder, no se cometerán los errores que terminaron por derrotarlo, perseguirlo y atormentarlo en las fatídicas jornadas de noviembre.

— Atilio A. Borón

